



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Dirección General de Estudios de Posgrado
Facultad de Derecho y Ciencia Política
Unidad de Posgrado

**El derecho de defensa y el proceso inmediato en caso
de flagrancia**

TESIS

Para optar el Grado Académico de Magíster en Derecho con
mención en Derecho Procesal

AUTOR

Orlando VILLARREAL SALOMÉ

ASESOR

Mg. Ricardo Alberto BROUSSET SALAS

Lima, Perú

2018

Referencia bibliográfica

Villarreal, O. (2018). *El derecho de defensa y el proceso inmediato en caso de flagrancia*. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.



Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia.



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

Unidad de Post Grado

ACTA DE GRADO DE MAGÍSTER EN DERECHO

En la ciudad de Lima, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, siendo las dieciséis horas, bajo la Presidencia del Mg. Alexei Dante Sáenz Torres y con la asistencia de los Profesores: Mg. Ricardo Alberto Brousset Salas, Mg. Víctor Manuel Cubas Villanueva, Mg. Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, Mg. Jorge Rosas Yataco y el postulante al Grado Académico de Magister en Derecho con mención en Derecho Procesal, Bachiller Orlando VILLARREAL SALOMÉ, procedió a hacer la exposición y defensa pública de su tesis titulada: "EL DERECHO DE DEFENSA Y EL PROCESO INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA".

Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, habiendo obtenido la siguiente calificación:

Aprobado por unanimidad con BUENO con la nota de QUINCE (15)

A continuación el Presidente del Jurado recomienda a la Facultad de Derecho y Ciencia Política se le otorgue el Grado Académico de Magíster en Derecho con mención en Derecho Procesal al Bachiller en Derecho Orlando VILLARREAL SALOMÉ.

Se extiende la presente Acta en tres originales y siendo las dieciocho horas, se dio por concluido el acto académico de sustentación.

Mg. Alexei Dante SAENZ TORRES
Presidente
Profesor Principal

Mg. Ricardo Alberto BROUSSET SALAS
Asesor
Profesor Principal

Mg. Víctor Manuel CUBAS VILLANUEVA
Jurado Informante
Profesor Asociado

Mg. Alonso Raúl PEÑA CABRERA FREYRE
Jurado Informante
Profesor Contratado

Mg. Jorge ROSAS YATACO
Miembro
Profesor Contratado

Dedicatoria

A mi esposa, Inés, por su apoyo moral e incondicional.

A mis hijos: Ema, Orlando y Celeste, por ser la razón de mi vida.

A mis padres, Rosalvina y Máximo, por su apoyo moral.

Agradecimiento

A mis profesores de la
UNMSM por sus sabias
enseñanzas.

Índice

Dedicatoria	ii
Agradecimiento.....	iii
Índice	iii
Resumen	vii
Abstract	ix
Introducción.....	1
CAPÍTULO 1: CUESTIONES METODOLÓGICAS	3
1.1. Situación problemática	4
1.2. Formulación del problema	8
1.2.1 Problema general	8
1.2.2 Problemas específicos	8
1.3. Justificación teórica	8
1.4. Justificación práctica.....	9
1.5. Objetivos.....	9
1.5.1 Objetivo general	9
1.5.2 Objetivos específicos	9
CAPÍTULO 2: ASPECTOS TEÓRICOS	10
2.1. Antecedentes de la investigación	11
2.2. Bases teóricas	17
2.2.1. Derecho de defensa y el proceso inmediato en caso de flagrancia.....	17
2.2.2. Fundamentos del derecho de defensa	19
2.2.3. Modalidades del derecho a la defensa.....	25
2.2.4. Principios pilares del derecho defensa.....	31
2.2.5. Garantías constitucionales y el derecho de defensa	34
2.2.6. El derecho de defensa en el proceso penal	40

2.2.7. El derecho de defensa en el proceso inmediato.....	42
2.2.8. La flagrancia.....	43
2.2.9. La detención en flagrancia y el proceso inmediato.....	63
2.2.10. Procedimiento	65
CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA, OTROS ASPECTOS	82
3.1. Hipótesis.....	83
3.1.1. Hipótesis general.....	83
3.1.2. Hipótesis específicas.....	83
3.2. Tipo y diseño de investigación.....	83
3.2.1. Tipo de investigación.....	83
3.2.2. Diseño de investigación	84
3.3. Unidades de análisis.....	84
3.4. Población de estudio	84
3.5. Tamaño de la muestra	84
3.6. Selección de la muestra	85
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos.....	85
3.7.1. Técnicas de recolección de datos	85
3.7.2. Instrumentos de análisis de datos	86
3.8. Análisis e interpretación de la información	87
CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	89
4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados.....	90
4.2. Prueba de hipótesis	92
4.3. Presentación de resultados	96
4.3.1. Análisis de Fuente Documental.....	96
4.3.2. Análisis normativo nacional	106
4.3.3. Análisis normativo de derecho comparado	110
4.3.4. Análisis jurisprudencial	117

CONCLUSIONES	128
RECOMENDACIONES.....	129
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	130
ANEXOS.....	137
Matriz de consistencia	134
Sentencias.....	138
A) CASO SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER.....	138
B) CASO EXPEDIENTE N° 1318-2000-HC/TC.....	145
C) CASO EXPEDIENTE N° 07731-2013-PHC/TC.....	150
D) CASO MAXIMILIANO BENITES R. CASACIÓN N° 842-2016.....	160
E) CASO MIGUEL ANTONIO CORTEZ CASACIÓN N° 692-2016.....	171

Resumen

Esta investigación, cuestiona el proceso inmediato en caso de flagrancia, situándose en el marco del derecho a la defensa que tiene el procesado, siendo uno de los principales problemas el derecho al plazo razonable del procesado para el ejercicio de la defensa –material y técnica.

Asimismo se analizan los alcances de la justificación del proceso inmediato en caso de flagrancia, vista desde la *ratio legis* y su aceptabilidad jurídica de dicha institución, en un Estado constitucional de derecho. Por otro lado, se analiza el proceso inmediato en caso de flagrancia y se busca determinar si se observa el debido cumplimiento del principio acusatorio con el objeto de garantizar el derecho a la defensa del procesado.

Asimismo, se analiza si se cumple con la observancia del principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del procesado, en tal sentido, en el desarrollo de la investigación se ha aplicado las diversas técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, con la finalidad de contrastar y analizar la información, en aplicación de un conglomerado de métodos.

De lo cual se ha concluido que en el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, toda vez que al ser muy corto y no es razonable el plazo en la que se le sentencia, lo cual limita que el procesado prepare y ejerza una defensa adecuada.

Asimismo se ha determinado que en el proceso inmediato en caso de flagrancia se afecta el derecho al plazo razonable del procesado, el proceso inmediato en caso de flagrancia tiene su justificación en la necesidad de sancionar los delitos flagrantes y reducir la carga procesal, pero éste no justifica la vulneración de los derechos del procesado.

Finalmente, se ha determinado que en este proceso no se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio, toda vez que la acusación que efectúa el fiscal no cumple con todos los caracteres de una acusación, y no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, en la

medida que el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, pero la defensa requiere un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa, con lo cual se afecta el ejercicio del derecho a la defensa del procesado.

Palabras claves: Proceso inmediato, flagrancia, derecho a la defensa, procesado, igualdad de armas y plazo razonable.

Abstract

This investigation questions the immediate process in case of flagrante delicto, within the framework of the defendant's right to defense, one of the main problems being the right to a reasonable period of time for the defense of the defense - material and technical.

It also analyzes the scope of justification of the immediate process in case of flagrancy, as seen from the *ratio legis* and its legal acceptability of said institution, in a constitutional State of law. On the other hand, the immediate process is analyzed in the case of flagrancy and it is sought to determine whether due observance of the accusatory principle is observed in order to guarantee the right to defend the proceedings.

It also examines whether compliance with the principle of equality of arms is ensured in order to guarantee the right to defend the defendant. In this regard, in the development of the investigation, the various data collection and analysis techniques and instruments have been applied, With the purpose of contrasting and analyzing the information, in application of a conglomerate of methods.

From which it has been concluded that in the immediate process in case of flagrancy, the right to defend the defendant is violated, since it is very short and the sentence is not reasonable, which limits that the Processed and prepared.

It has also been determined that in the immediate process in case of flagrancy the right to a reasonable period of time is affected, the immediate process in case of flagrancy is justified by the need to punish flagrant crimes and reduce the procedural burden. Justifies the violation of the rights of the accused.

Finally, it has been determined that this process does not guarantee due compliance with the accusatory principle, since the accusation made by the prosecutor does not comply with all the characteristics of an accusation, and does not guarantee the proper compliance with the principle of equality of Weapons, to the extent that the prosecutor has immediately the elements to

accuse, but the defense requires a prudent time to review the file and, where appropriate, provide evidentiary means of defense, thereby affecting the exercise of the right to defense Of the processed.

Key words: Immediate process, flagrancy, right to defense, prosecution, equality of arms and reasonable term.

INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigencia del D. L. Nº 1194, que reforma del proceso inmediato norma de carácter imperativo, antes meramente facultativo, pone en marcha y operatividad su aplicación a nivel nacional como respuesta a la criminalidad tradicional, indudablemente desde su promulgación y publicación en el diario oficial el peruano, el 30 de agosto del año 2015, a la fecha en su aplicación específicamente en delitos flagrantes ha venido mostrando en algunos casos la vulneración del derecho a la defensa del investigado y/o procesado en sus diversas manifestaciones y aspectos como derecho a un intérprete, derecho a un juez natural, derecho al plazo razonable, derecho a la igualdad de armas, derecho de comunicarse privada y confidencialmente con su abogado y, la calificación errónea de flagrancia desviando de este modo al justiciable del proceso común a un proceso especial, por algunos magistrados de poder Judicial y Ministerio Público.

Como es evidente desde la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal en junio del año 2006 en el Distrito Judicial de Huaura, con la cual el proceso inmediato ya estaba regulado, pero su aplicación era casi nula, paralelamente la institución de la flagrancia también ya estaba regulada no obstante ello han venido sufriendo varias reformas, a fin de mejorar y dar una respuesta eficaz y eficiente a la criminalidad, sin embargo, las circunstancias son bastante conocidas por la ciudadanía insatisfecha del Poder Judicial, por procesos lentos, ineficientes e ineficaces, en este contexto la ciudadanía se ha inclinado por una justicia fuera del Estado de Derecho, por decir la justicia llamada de propia mano, lo cual origino acuñar frases como “chapa tu choro y déjalo paralítico”, “chapa tu juez”, etc., es decir siete de cada diez peruanos está a favor de linchamientos.

Y frente a ello con las reformas adoptadas especialmente en la flagrancia y su aplicación del proceso inmediato se busca una justicia rápida, célere y eficaz, indudablemente no se debe sacrificar derechos del justiciable como el derecho a la defensa, al debido proceso, de modo tal que por ello nació la presente tesis titulada “EL DERECHO DE DEFENSA Y EL PROCESO INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA”, por lo que la investigación materia

de tesis está estructura en cuatro capítulos, iniciando con aspectos metodológicos, donde hemos esbozado la situación problemática, formulando el problema general y específicas, la justificación teórica y práctica y el planteamiento de objetivos. En el segundo capítulo referida a los aspectos teóricos, donde se trata los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, el derecho a la defensa y el proceso inmediato en caso de flagrancia, sus fundamentos, sus modalidades, sus principios y las garantías constitucionales, finalizando con la detención en flagrancia y el proceso inmediato. En el tercer capítulo, se encuentra la metodología en sus aspectos de la hipótesis general y específica, el tipo y diseño de la investigación, las unidades y población de estudio, el tamaño y la selección de la muestra, y las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. Finalmente en el capítulo cuarto, trata de los resultados y discusión, como la prueba de hipótesis, la presentación de resultados, el análisis de fuente documental nacional y extranjera y el análisis jurisprudencial.

Antes de finalizar, que las conclusiones arribadas después de haber desarrollado la investigación entre algunas de ellas es que, en el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, sólo en algunos casos, por la mala práctica de algunos magistrados del Ministerio Público y del Poder judicial, debido a la calificación errónea que realizan al momento de definir el tipo de flagrancia, el mismo que limita el ejercicio del derecho a la defensa formal y material del procesado.

En el proceso inmediato en caso de flagrancia, en algunos casos, no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, toda vez que a diferencia de la defensa, el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, sin embargo, la defensa requiere un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa o descargo.

Que la presente investigación sirva de consulta y debate a aquellos estudiantes y abogados identificados con el proceso inmediato en caso de flagrancia, a fin de enriquecer la institución materia de tesis.

CAPÍTULO 1: CUESTIONES METODOLÓGICAS

1.1 Situación problemática

La presente investigación desarrolla el derecho de defensa en marco de la regulación del Decreto Legislativo N° 1194 la misma que regula los procesos inmediatos en casos de flagrancia llevados a cabo inicialmente por el Ministerio Público y posteriormente por la autoridad jurisdiccional.

Se pretende desde luego determinar si el proceso inmediato en casos de flagrancia afectan el derecho de defensa del procesado toda vez que al ser un proceso inmediato de tiempo reducido se ven afectados derechos fundamentales que en su momento no son realizados ni efectuados correctamente por el procesado, viéndose de esa manera limitado a actuar con toda las garantías que la Constitución le reconoce.

En ese sentido la regulación de la flagrancia por tratarse de un proceso especial donde se simplifican las etapas del proceso penal común no se estaría garantizando los derechos del procesado dado que el ejercicio del derecho de defensa y el plazo razonable para poder contradecir, definir su estrategia, construir su teoría del caso o realizar sus descargos correspondiente se ven mermados, circunscritos por el intervalo del tiempo corto, laxo y restringido.

Al respecto Guillermo (2017) nos señala lo siguiente:

[...] La realidad demuestra que, en no pocos casos, se presentan factores que no hacen posible que ello ocurra, situación que se agrava en lugares de la zona andina y la Selva, donde las posibilidades de contar “en ese acto” con un defensor privado, se reduce ostensiblemente, quedando el defensor público como única opción; incluso, en algunas oportunidades ni siquiera con esta opción se cuenta (p. 4).

Bajo esta premisa es que se abre a tela de juicio si verdaderamente los procesos especiales, como es el caso de la flagrancia, linda con la constitucionalidad toda vez que por tratarse de un proceso inmediato, sumarísimo, simplificado, de celeridad en el proceso se vulneran ciertos derechos esenciales del procesado, donde el derecho a la prueba, la dificultad para la correcta elaboración de su estrategia de manera organizativa, su

derecho de defensa, el plazo razonable y el debido proceso se ven simplemente restringidos y amenazados en el desarrollo del proceso.

Por ello, el desarrollo de la presente investigación busca determinar si el proceso inmediato regulados por el Decreto Legislativo N° 1194 la misma que modifica el Nuevo Código Procesal Penal tiene correspondencia con la constitucionalidad de las normas toda vez que al existir derechos fundamentales que se ven amenazados y vulnerados por la praxis de esta forma de proceso la necesidad de estudiarlo y revisarlo si por allí tiene alguna justificación jurídicamente aceptable tanto por la comunidad social como la comunidad jurídica.

En nuestra realidad se observa que con la implementación de la nueva normativa sobre el proceso inmediato en casos de flagrancia se ha visto de alguna manera en cuestión un conjunto de derechos de los posibles responsables del hecho delictivo, toda vez que la emisión de la sentencia sobre la responsabilidad de los mismos se hace en tiempos muy cortos, en tal sentido, por un lado, el derecho a la defensa, debido proceso, derecho a un plazo razonable, la observancia del principio acusatorio, y el principio de la igualdad de armas de acuerdo al modelo procesal penal que ha adoptado el sistema jurídico penal peruano.

En este orden de ideas, el problema se presenta en el plano práctico, debido a las reformas normativas al respecto, toda vez que si no hay observancia de las exigencias mínimas de las garantías en el proceso penal, al ser esta una de las sanciones –pena privativa de libertad- más severas aplicables en un estado constitucional de derecho, debe seguirse con la observancia y respeto de los derechos de los procesados, caso contrario hay afectación de los derechos inversos y conexos de la persona, el mismo que en el plano constitucional e internacional es prohibida o abolida.

De lo cual se extrae que en el proceso inmediato en caso de flagrancia no garantiza el derecho a la defensa del procesado, asimismo, al afectarse este derecho, también se afecta el derecho a un plazo razonable, es decir, si hay una resolución judicial en setenta y dos horas, que sanciona con pena privativa de libertad por la comisión de un delito y es detenida en flagrante,

entonces, cabe preguntarse, si los setenta y dos horas han de ser suficientes para que dicha persona pueda recabar los medios probatorios de descargo de la acusación fiscal, acreditar o realizar un peritaje de parte, contratar una defensa técnica de su libere elección, entre otros derechos que le asiste.

Por otro lado, viene a ser la cuestión filosófica, en sentido de que si la justificación del proceso inmediato en casos de flagrancia es suficiente y aceptable jurídicamente, es decir, no solo desde el punto de vista positivista, sino, desde el punto de vista del principio de la justicia.

Asimismo sale a brote o en cuestión el cumplimiento del principio acusatorio en casos de proceso inmediato por caso de flagrancia, esto implica que el fiscal, en calidad titular de la acción penal en principio ha de realizar las investigaciones necesarias para que pueda, primero identificar que la acción no haya prescrito, que el hecho que se investiga constituya delito e identificar a los posibles autores de dicho ilícito. Sin embargo, cuando se trata de una detención en flagrancia, a *prima facie*, el fiscal ya habría identificado cada uno de los elementos ya mencionados, y adicionalmente a ello ya tendría los suficientes elementos de convicción o probatorios para determinar la responsabilidad de los investigados, y todo esto en un lapso corto de tiempo. Como se puede evidenciar, todo aquello ya expuesto es desde el punto de vista del fiscal, y pareciera que la normatividad penal está diseñada para facilitar y satisfacer los requerimientos del fiscal como titular de la acción penal, de forma tal que deja de lado las carencias, dificultades y demás aspectos negativos que pueda afrontar el imputado. Como bien se dice, si el fiscal cuenta con todo los elementos de convicción, podrá acusar, en el tiempo que tenga dichos elementos, lo cual implica que si el fiscal tiene todo los elementos en el mismo día de la detención flagrante, entonces puede iniciar el proceso inmediato, pero, como se puede notar, dicha posición no es desde el punto de vista del investigado, no de la defensa técnica que ésta pueda tener, sino, como ya se advirtió, desde el punto de la actuación del fiscal. De lo cual se puede concluir que si el fiscal cuenta con todo los elementos para poder acusar, entonces lo hace válidamente, sin embargo, si el investigado y/o su abogado apenas están pensando en la estrategia de defensa o su teoría del caso, si la sentencia se dicta en setenta y dos horas, entonces no habrían

podido actuar ninguna prueba de parte que requiera tiempo conseguir, mucho menos una pericia de parte o prueba nueva que recién acaba de conocer, como es el caso de un video grabado por una de las cámaras de seguridad de alguna institución privada, donde la solicitud de una fracción de esta demora, por lo que el investigado no puede hacer un descargo apropiado para contradecir los puntos de la acusación fiscal. De ello se puede inferir que si el fiscal está listo, no implica que el investigado con su defensa técnica también lo estén.

La igualdad de armas que se hace referencia en relación al modelo procesal penal de 2004 adoptado en el sistema jurídico penal peruano, se hace notar que tanto el fiscal como el investigado con su defensa técnica tienen las mismas posibilidades de producción y ofrecimiento de medios probatorios, es decir, el Ministerio Público se encarga de acusar o presentar las pruebas de cargo, mientras el investigado a través de su defensa técnica se encarga de presentar las pruebas de descargo, de modo tal que permita un equilibrio entre las partes, sin embargo, como ya se evidenció, dicha igualdad queda aparente y no se aplica correctamente, con ello no se cumple adecuadamente el principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del investigado.

Hipótesis general

En el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, toda vez que al ser muy corto el plazo, no es razonable y limita que el procesado prepare una defensa adecuada.

Hipótesis específicas

En el proceso inmediato en caso de flagrancia se afecta el derecho al plazo razonable del procesado, toda vez que el corto plazo no permite que el procesado prepare una defensa adecuada.

El proceso inmediato en caso de flagrancia tiene justificación en la necesidad de sancionar los delitos flagrantes y reducir la carga procesal, sin embargo, ello no justifica que se debe afectar los derechos del procesado.

En el proceso inmediato en caso de flagrancia no se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio para garantizar el derecho a la defensa del procesado, toda vez que la acusación que efectúa el fiscal debe cumplir con todos los caracteres de una acusación.

En el proceso inmediato en caso de flagrancia no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, en la medida que el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, pero la defensa requiere un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿En el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho a la defensa del procesado?

1.2.2 Problemas específicos

¿En el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho al plazo razonable del procesado?

¿El proceso inmediato en caso de flagrancia tiene justificación jurídicamente aceptable?

¿En el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio para garantizar el derecho a la defensa del procesado?

¿En el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del procesado?

1.3 Justificación teórica

Este tipo de justificación es aplicada en el presente trabajo de investigación, toda vez que se desarrollan las diferentes teorías o instituciones jurídicas de

flagrancia y el proceso inmediato, con el objeto de ampliar conocimiento sobre esta área, así como generar reflexión, discusión de las teorías observadas.

1.4 Justificación práctica

En la práctica se observa que hasta la fecha existen muchos procesos ya concluidos por el denominado proceso inmediato en caso de flagrancia, sin embargo, al respecto existen muchas críticas en sentido que, este proceso rápido tiene costos sociales, como es la afectación de los derechos de los procesados, principalmente el derecho a la defensa.

Somos testigos que existen casos donde se ha sentenciado en veinticuatro o cuarenta y ocho horas, y lógicamente, si nos preguntamos que pudo haber hecho el procesado en este tan corto plazo en el ejercicio de su derecho a la defensa, tanto material como formal. En práctica la defensa técnica del procesado tiene que acceder al expediente, revisar y preparar la defensa, y en su caso ofrecer medios probatorios que permitan desvirtuar los ofrecidos por el Ministerio Público.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho a la defensa del procesado.

1.5.2 Objetivos específicos

Determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho al plazo razonable del procesado.

Determinar si el proceso inmediato en caso de flagrancia tiene justificación jurídicamente aceptable.

Determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio para garantizar el derecho a la defensa del procesado.

Determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del procesado.

CAPÍTULO 2: ASPECTOS TEÓRICOS

2.1. Antecedentes de la investigación

Se entiende por antecedentes de la investigación a aquellos estudios previos sobre el tema o problema a investigarse, en tal sentido, en esta parte de esta investigación se ha hecho la recopilación de diversos estudios relacionados al tema objeto de estudio y extraído únicamente los aspectos relevantes como son las conclusiones a que deriva el investigador que antecede:

Carrasco, M. (2016). En su tesis con el título “La implicancia del proceso inmediato por flagrancia delictiva al principio acusatorio y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, sustentada en la Universidad de Huánuco, para obtener el Título de Abogado.

La presente investigación señala como problema general si el proceso de flagrancia o proceso inmediato por flagrancia cumple con las garantías que ofrece toda acusación fiscal.

El trabajo de investigación se realiza con el fin que se aclare acerca de la figura nueva que fue insertada en el Nuevo Código Procesal Penal, siendo ello el proceso inmediato por flagrancia delictiva, dado que al ser un proceso que se capta por ser rápido, existen algunos problemas dado que con este proceso no se está respetando el plazo razonable que debe tener todo imputado.

Presenta como conclusiones que en el proceso inmediato por flagrancia no se respeta los requisitos que debe existir en toda acusación, dado que se transgrede el principio acusatorio, señala que ello se ve afectado por lo que existe demasiado celeridad en los procesos, la cual deviene la inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Asimismo señala que se ha confirmado las hipótesis secundarias planteadas en el estudio de investigación, siendo que el tiempo de 24 a 48 desde que el imputado es detenido, para obtener medios probatorios que desvirtúan la presunción de inocencia del acusado y sustentan la acusación la acusación fiscal en el proceso de flagrancia tiene implicancia negativa en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, además que se debe cambiar el hecho de que el fiscal sea obligado acusar una vez que ya se pasó a una audiencia

de proceso inmediato y darle la potestad que en caso tenga duda pueda pasar a proceso ordinario. (Carrasco, 2016, p. 78).

Sernaqué, J (2014) En su tesis con el título “El proceso inmediato como mecanismo de simplificación en la celeridad y descarga procesal penal en el distrito judicial de Huaura”. Sustentada en la “Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión”.

El tesista señala como objetivo de su investigación que se determine si el proceso inmediato resulta siendo eficaz en la celeridad y descarga de los procesos penales en el distrito judicial de Huaura.

La presente investigación fue realizada con la finalidad de solucionar algunos problemas del sistema de justicia de nuestro país, dado que existía demora en los procesos y una demasiada carga procesal, ello debido a un estudio que se realizó en que se señala que existían muchos casos sin tener respuesta alguna, teniendo como ello que los internos no tenían sentencia, es por ello que con el proceso inmediato lo que se buscaba era que los procesos se den de manera rápida oportuna, en el sentido que en este proceso ya no se verificaba la culpabilidad del imputado, sino que este debía tener una sentencia de manera rápida.

El tesista señala una serie de conclusiones de las cuales se presentarán las más relevantes.

Señala que existen casos que se han desarrollado por el proceso inmediato, teniendo como ello un tiempo de duración de más de un año, lo cual comprende que este proceso no contribuye a la celeridad procesal.

Además de señalar que existe falta de celeridad en la etapa comprendida desde la emisión de disposición de acusación por el fiscal hasta la emisión del auto de enjuiciamiento y citación a juicio por el juez unipersonal o colegiado.

Finalmente señala que de los muchos casos resueltos aplicando el proceso inmediato, no se ha llegado a disminuir la carga procesal, siendo prueba de ello que solo representan el 0.017% de total de procesos acabados. (Sernaqué, 2014, p. 144).

Monge, V (2012). En su tesis con el título “La Constitucionalidad del procedimiento penal de Flagrancia”, sustentada en la Universidad de Costa Rica.

La presente investigación se centra en que al tramitarse procesos con celeridad, se ha llegado a la conclusión que un proceso que se realiza de manera corta no ofrece a las personas que han cometido el delito, o que se han visto inmersas la debida oportunidad para ejercer su defensa en los términos en que se encuentra establecido en su ordenamiento.

Señala que tiene como objetivo que se analice “la existencia o no de roces de constitucionalidad en la aplicación del actual procedimiento especial de flagrancia, contenido en la ley 8720”. (Monge, 2012, p. 8).

Concluye que el “procedimiento de flagrancia presente una serie de particularidades que lo distinguen del trámite ordinario, y de otro proceso especial existente en el Código Procesal Penal actualmente. Siendo que su principal contraste con la tramitación ordinaria radica en la supresión de las etapas preparatoria e intermedia”. (Monge, 2012, p. 267).

Asimismo señala que de todas “las garantías que se brindan a las personas imputada en flagrancia en contrastes con las garantías que existen en el proceso ordinario, se comprueba que existe lesión al principio de igualdad, en la medida en que se reducen, echando mano que no son jurídicamente sustentables, una serie de garantías para la persona que resulta acusada de delito flagrante” (...).

Por otro lado señala que el procedimiento especial de flagrancia vulnera el principio de imparcialidad, al poner en manos de un mismo órgano jurisdiccional las decisiones relacionadas con la imposición de medidas de medidas alternativas. (Monge, 2012, p. 270).

Gómez, J. (2010). En su tesis con el título “La aprehensión en delito flagrante y sus efectos jurídicos en la legislación ecuatoriana”, sustentada en la Universidad Regional Autónoma de los Andes.

El estudio tiene como objetivo que se dé el cumplimiento del debido proceso como garantía constitucional en el momento de la aprehensión en delito flagrante. (Gómez, 2016).

El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad que todos los operadores de justicia, tengan por cumplimiento los derechos y garantías que se encuentran establecidas en la Constitución de Ecuador, ello se verifica en el sentido que existen casos en los que se vulnera sus derechos de las personas que son detenidas por delito flagrante, ello ya sea por la autoridad que los detiene, o por los operadores de justicia, que no aplican un debido proceso, tal como se encuentra señalado acerca del delito flagrante.

Concluye que pese a que cuentan con una Constitución Garantista, aún se sigue vulnerando derechos fundamentales al momento de aprehender a la persona sospechosa en el delito flagrante. Además de señalar que la aprehensión por el delito flagrante es un caso excepcional como medida para quitar el derecho a la libertad de una persona, ello de acuerdo a como señala su normal, en el que la persona detenida no puede encontrarse más de 24 horas sin formula de juicio.

Asimismo se tiene que el derecho al debido proceso en lo que respecta a lo penal es un mecanismo legal mediante el cual se tiene el cumplimiento de derechos y garantías básicas, ello con la finalidad que se obtenga un juicio justo y equitativo. (Gómez, 2016, p. 70).

Ortega, P (2013). En su tesis con el título “El incorrecto procedimiento de los agentes policiales en la aprehensión de personas por delito flagrante en la audiencia de flagrancia y formulación de cargos y la violación del debido proceso”, sustentada en la Universidad Regional Autónoma de los Andes.

El tesista señala como objetivo de su investigación que se elabore una política pública para regular el procedimiento en la aprehensión de personas por el delito flagrante, dado que con ello se podrá garantizar el principio del debido proceso, siendo que el problema social viene hacer que han existido diversos casos en los que la ley es alterada debilitando así lo que la norma establece, dado que en la sociedad de Ecuador el problema surge cuando la persona que ha cometido el delito ha sido aprehendida de inmediato debió ser puesto a la orden de un juez mas no ser llevado a un centro de detención, como es lo que vienen aplicando ahora.

Finalmente concluye que mediante el trabajo de investigación se realizó un análisis de campo y se pudo evidenciar que existen personas que tienen conocimiento del procedimiento, pero que ello no está siendo aplicable de manera correcta, asimismo señala satisfacción con respecto a que tanto los jueces de garantías penales como la policía, tengan conocimiento del delito flagrante, sin embargo señala que este no solo debe ser así, sino que también deben aplicar lo que la norma señala. (Ortega, 2013, p. 73)

Ozollo, F. (2015). En su tesis con el título “En defensa del procedimiento especial para los casos de Flagrancia”, sustentada en la Universidad Empresarial Siglo Veintiuno”.

El presente trabajo de investigación se realiza con el fin que el proceso de flagrancia sea aplicado no solo ante la sociedad, sino que también este sea aplicado con su Constitución Nacional, dado que lo comparan con otros países, en que se señala que el proceso de flagrancia es utilizada de manera satisfactoria. El tesista señala como objetivo que se demuestre no solo la convivencia, sino además la perfecta compatibilidad del proceso de flagrancia con su Constitución Nacional.

Concluye que existen razones por las cuales se debe establecer el procedimiento de flagrancia en la legislación procesal penal de la provincia de San Juan, ello con el fin de que su sistema penal colapsa. Ello ya sea por la economía, por las falencias del sistema educativo, o también por la falta de programas educativos, pero ello no solo tiene que ver sino que también se debe a la incapacidad del sistema judicial (...). (Ozollo , 2015, p. 41)

Señala que la situación representada por un delito flagrante requiere de una respuesta pronta del sistema judicial. Ejemplo de ello se evidencia que cuando existe un accidentado no se puede imaginar que este no sea socorrido presurosamente, o que no exista una respuesta rápida de las autoridades ante un desastre natural. Es por ello que ningún argumento justifica que no exista rápido y adecuado accionar del sistema ante la comisión de un delito flagrante.

Asimismo señala que tales mejoras podrían evidenciarse a través de la aprobación del procedimiento de flagrancia, que representa una óptima vía a seguir en casos de ínfima o inexistencia complejidad probatoria. Ello con el fin de poder concluir una causa penal en tiempo record, sin tener que vulnerarse garantías constitucionales, ni tener que hacer perder recursos al Estado.

Finalmente refiere que la importancia del combate contra la actividad delictiva a través del procedimiento de flagrancia, aquella conclusión se llega luego de revisarse la revista digital del Ministerio Público de Costa Rica, en la misma que se explica cómo la fiscalía de flagrancia extendió su accionar a diversos cantones de San José, ello debido que se presentó demasiada incidencia delictiva. (Ozollo , 2015, p. 43)

Coronado, N. (2010). En su tesis con el título “Aspectos y consideraciones teóricas de la Flagrancia y regulación en la legislación penal Guatemalteca”, sustentada en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

La presente investigación tiene como fin que se efectuó un análisis jurídico y doctrinario del contenido del artículo 257 del Código Procesal Penal en lo que respecta a los aspectos de la aprehensión, los aspectos doctrinarios y legales de la flagrancia, los presupuestos para que produzcan en la actualidad, el criterio de los jueces y abogados en general respecto a la flagrancia.

Presenta una serie de conclusiones de las cuales se presentarán las más relevantes al tema de estudio.

Refiere que la facultad de aprehensión que otorga el Código Procesal Penal, al particular en algunos casos termina en abusos, en los cuales les golpean, linchan al presunto delincuente, provocando su muerte, dado que al hacer

justicia la población por su propia mano violan con ello el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.

Señala que las personas que han sido sorprendidas cometiendo un ilícito penal y que son detenidas por la Policía Nacional Civil, y puestas a disposición del juez ante la poca investigación y escasos medios de prueba, por parte del Ministerio Público, en gran parte son puestos en libertad por orden judicial inmediatamente. (Coronado, 2010, p. 87)

Asimismo señala que su sistema penal tiene una gran acusatoria, pero que las estructuras judiciales en Guatemala no son adecuadas para poder a plenitud, establecer una justicia pronta y cumplida como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre cuales su país los ha ratificado en relación al proceso penal. (Coronado, 2010, p. 87)

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Derecho de defensa y el proceso inmediato en caso de flagrancia

2.2.1.1. Contenido y concepto del derecho de defensa

“Etimológicamente la expresión defensa significa "oponerse al peligro de un daño" o, más gráficamente, "el rechazo a un ataque o agresión". Este ataque o agresión pasa a denominarse ofensa, constituyéndose, lógicamente, en el antecedente necesario de la defensa. Vale decir: la defensa exige previamente una ofensa y su nota esencial en consecuencia es su carácter reactivo” (Carocca, s.f, p. 2)

“[El derecho de defensa es un] derecho fundamental atribuido a las partes de todo proceso y para ser respetado por el tribunal que conoce del mismo, que consiste básicamente en la necesidad de que éstas sean oídas, en el sentido de que puedan alegar y demostrar para conformar la resolución judicial, y en que conozcan y puedan rebatir sobre los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la resolución judicial” (Beltran, 2008, pp. 78-79).

Por otra parte, según el Diccionario de Derecho Penal y de Procedimiento Penal, elaborado por los famosos profesores de

derecho George Antoniu y Costica Bulai, el derecho de defensa está representado por “la totalidad de las prerrogativas, facultades y posibilidades, que, según la ley, tiene cualquier parte en el juicio penal, para sostener su posición en el juicio penal, para hacer las comprobaciones que considere oportunas y para participar en el desarrollo del juicio, siendo, al mismo tiempo, una garantía para la ley” (Antoniou y Bulai, 2011, p. 299).

Moras citado por Abundio señala que “La defensa es una función procesal que realiza el procesado para oponerse a la acusación, la que podrá ejercerse por el propio imputado siempre que no afecte su eficacia, o por un abogado particular de su confianza o por un defensor público” (Abundio, 2006, p. 3).

“El derecho a la defensa o derecho de defensa es un derecho humano fundamental, es la base sobre la que se erige el debido proceso, válido para todo tipo de procedimiento, pero esencialmente aplicable en el proceso penal, (...) Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o acusado, desde el inicio de la investigación penal, por esta razón, este derecho está rodeado de una serie de garantías como aquellas de ser informado, de tener acceso a los documentos y actuaciones, asistencia de un abogado defensor, presentar pruebas, contradecir la prueba, ser informado en su lengua materna, no ser interrogado si no está presente su defensor, no ser obligado a auto incriminarse, motivación de la sentencia, garantía de apelar de la sentencia, etc.” (Guaicha, 2010, p. 1).

2.2.2. Fundamentos del derecho de defensa

2.2.2.1. Fundamentos Filosóficos

a) En el derecho natural

“El Derecho Natural está estrechamente ligado con el tema de los derechos humanos, tanto en su concepción teológica como racional, como principios o derechos fundamentales, que están por encima de las normas positivas o como guías de base ética. Esta forma de ver los derechos humanos concretiza una antigua aspiración del hombre poner fronteras o límites al poder del Estado, encausándolo por el camino para conseguir la justicia y no como en épocas anteriores la reparación del daño causado y el castigo para el infractor” (Guaicha, 2010, p. 20).

“La influencia que del Derecho Natural se refleja en el moderno Derecho Procesal Penal radica en que fue decisivo el interés de los filósofos ius naturalistas en establecer que el individuo, por su condición humana, es poseedor de derechos fundamentales e inalienables anteriores y superiores a toda regulación positiva; derechos que el Estado no puede dejar de reconocer y ante los cuales el poder encuentra límites en favor de la persona humana y su libertad” (Barrios, 2011, p. 11).

“En el campo del Derecho Penal, se depuró su procedimiento, eliminando las torturas e intentando humanizar los castigos, se eliminó los procesos por hechicería. En definitiva, se distinguió entre un derecho penal sustantivo y un derecho penal procesal, se puso coto a los excesos de la inquisición y a los horrores de las guerras de religión, se fijó límites a la discrecionalidad de gobernantes y jueces, en general se propendió a eliminar que el procesado carezca al menos de garantías mínimas y una mayor benignidad a las penas” (Guaicha, 2010, p. 22).

“El pensamiento *ius naturalista* dedicó especial interés a los problemas relativos “al Derecho Penal tanto en sus aspectos sustantivos como procesales. Los atropellos de la inquisición, los horrores e intolerancia de las guerras de religión, el uso generalizado de la tortura, la falta de garantías para el procesado y la crueldad de las penas”, provocaron repugnancia y rechazo. A razón de esta realidad se revelan pensadores como Locke, Diderot, D’Alambert, Holback, Helveticus, Montesquieu y Rousseau, entre otros, y abogan por una humanización del sistema penal, para que se establecieran por escrito previo al hecho las conductas prohibidas, “por la abolición del tormento, contra la arbitrariedad de los jueces y por el establecimiento de garantías en el sistema penal” (Hernandez, 2013, p. 11).

b) El iluminismo y las ideas de Beccaria

“Es Cesare Beccaria (1738-1794) con su obra *De los Delitos y de las Penas* (Dei delitti e delle pene -1764) quien influyó directamente en la reforma penal de la época, y hacia un sistema penal *humanitario-individualista*. Surgen, entonces, las primeras inquietudes por establecer garantías procesales para un enjuiciamiento justo. En su momento Beccaria supo relacionar y aprovechar las ideas de autores como Montesquieu y Rousseau, de quienes toma muchas de las ideas críticas sobre materias jurídicos penales” (Barrios, 2011, p. 12).

“Para el Marqués de Beccaria, *El nullum crimen, nulla poena, sine lege*, debe entenderse integrado dentro del propósito general de estricta limitación otorgado por los iluministas en general y Beccaria en particular a la facultad punitiva del Estado; el derecho de castigar surge de las condiciones del pacto social, por ello es limitadísimo; en consecuencia el derecho que traspase el límite es abuso y no justicia, es hecho y no derecho”.

“En esta obra, se resalta como valores jurídicos fundamentales en materia penal sustantiva y adjetiva: la libertad y la seguridad jurídica, sin dejar de ser su obra un tratado para la defensa al individuo que está siendo procesado” (Guaicha, 2010, p. 23).

“Las críticas Volterianas al procedimiento penal francés, las censuras de Montesquieu a la inútil crueldad de las penas, las protestas de algunos espíritus compasivos humanitarios contra la tortura, o estaban insertadas en un conjunto temático mucho más amplio, dentro del cual quedaban ocultas para quienes tuvieran interés en silenciar su existencia, o aparecían vinculadas a casos procesales muy concretos. Hacía falta observar que los excesos que unos y otros denunciaban esporádicamente obedecían a unas raíces comunes, y que sólo sustituyendo por unas premisas humanitarias, modernas, respetuosas para el hombre que hay en cada delincuente, era posible eliminar los abusos e injusticias del sistema y elaborar otro más racional, mejor y más justo. Y eso fue lo que hizo Beccaria” (Barrios, 2011, p. 12).

“Según Beccaria, las torturas o tormentos son inútiles, como medio de investigación o de punición, por cuanto, una vez que se conozcan las pruebas y la existencia de la comisión de un delito, aun así se debe conceder al procesado un tiempo necesario y medios para que se justifique. Además, el Marqués fiel a su idea esencial, esto es, que sean las leyes la que fijen el momento y características de la defensa y los medios probatorios. Para Beccaria el procesado es sujeto de derecho y no objeto del poder punitivo del Estado. Sobre esta tesis se construirá las bases del Derecho Penal Liberal” (Guaicha, 2010, pp. 23-24).

c) La escuela clásica y las ideas de Carrara

“El contenido filosófico del pensamiento liberal encuentra en Carrara (1805-1888) su máximo exponente, lo que lo convierte, a su vez, en el más notable representante de la Escuela Clásica. La Escuela Clásica y Carrara fundamentan el contenido filosófico de su pensamiento jurídico en las inmutables reglas del Derecho Natural, porque encuentran en sus normas validez universal, y es que para el pensamiento de Carrara el carácter científico de la disciplina jurídica consiste en encontrar los principios inmutables e invariables del *Código eterno de la razón*” (Barrios, 2011, p. 14).

“Funda sus teorías filosóficas en el campo del Derecho Penal, en reglas del Derecho Natural, manifestando que sus normas, tienen una validez universal, porque están basadas en la razón. Carrara si bien abordó el tema de la construcción teórica de lo punitivo manifestó que a la par se debían establecer lo que hoy conocemos como normas de procedimiento para el juicio penal o Derecho Procesal Penal, haciendo una diferenciación entre el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal (...)” (Guaicha, 2010, p. 25).

“Para Carrara si la ley eterna del orden la impone al género humano una sociedad y una autoridad civil que protejan el derecho; si, por las condiciones de la naturaleza humana, esa protección de la autoridad social no puede actuarse sin la amenaza de un castigo que debe infligirse a todo el que viole el derecho, de estas verdades se desprende como legítimo corolario, de esos mismos principios de donde proviene la legitimidad de la prohibición y de la amenaza, tiene que derivarse también la legitimidad del juicio. Este es necesario para que al verificarse la previsión del delito, se haga real la irrogación del castigo; y es necesario que el juicio sea un acto de razón, así como también es un acto de razón el que prohíbe la violación y amenaza con penas” (Barrios, 2011, p. 14).

“Para Carrara, hay que conciliar la tutela del orden jurídico con los derechos del procesado, y en caso de conflicto entre estas dos teorías debe primar la protección o tutela a los derechos del procesado, esto es la aplicación estricta del principio *indubio pro reo*, ello por razones de orden humanitario, por cuanto es preferible que un delito quede sin sanción a que se castigue o sancione a una persona inocente. Ello no implica impunidad. Que este principio *indubio pro reo* debe aplicarse tanto para las personas honradas para el sospechoso o que está siendo sujeto de una investigación procesal e incluso para el culpable o responsable de una infracción” (Guaicha, 2010, p. 25).

“Para Carrara era necesario resolver el problema procesal en lo relativo a su contenido sustancial y al carácter eminentemente racional en que debe fundamentarse el procedimiento; en consecuencia, siguiendo el pensamiento de Carrara, deben determinarse "los principios inalterables a los que el acto de juzgar tiene que someterse"; por lo que los principios que rigen el proceso deben ser minuciosamente establecidos y fijados en la Ley, porque ello es el fundamento racional para establecer el procedimiento que conduce a la solución del conflicto penal, y establece las garantías de obligatorio cumplimiento tanto para el ciudadano sometido a proceso como para el Estado en ejercicio de su poder punitivo” (Barrios, 2011, p. 14).

“Para Francisco Carrara la defensa, es necesaria en el juicio, que su fundamento está en la naturaleza del ser humano y en la necesidad que hay de protegerlo como persona humana, este derecho no es dado por la sociedad sino que existe antes que ella y en tal sentido, no es un privilegio ni una concesión, sino un verdadero derecho original del hombre y, por consiguiente inalienable” (Guaicha, 2010, p. 25).

2.2.2.2. Fundamento normativo

“Los principales fundamentos normativos del derecho a la defensa lo encontramos en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1984, que en su Artículo 10 señala que ““Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal” (Guaicha, 2010, p. 36).

“Así también el texto de la Declaración de Independencia influyó directamente en las Constituciones Estatales las cuales establecieron expresamente la prohibición de que nadie puede ser privado de su vida, libertad o propiedad sin debido proceso legal (es el caso de las constituciones de Maryland, Pensilvania y Massachusetts). Luego la enmienda V a la constitución federal reconoció la garantía del proceso legal, refrendada por la enmienda XIV: *Ningún Estado privará a persona alguna de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal, ni denegará dentro de su jurisdicción, a persona alguna, la igual protección de las leyes*”. (Barrios, 2011, p. 16).

“Asimismo en 1969, en la ciudad de San José de Costa Rica, la Conferencia Especializada Interamericana aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida más como Pacto de San José de Costa Rica (...) según el preámbulo del Pacto de San José de Costa Rica, los países suscriptores deben tener como propósito a través de sus instituciones democráticas un régimen de libertad personal y justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre, cuyo origen radica en los atributos de la persona humana. Este principio ha sido declarado en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos” (Guaicha, 2010, p. 37).

“La regulación del derecho de defensa al concebirse como un derecho de rango fundamental, atribuido a las partes de todo proceso, podemos decir que se puede materializar básicamente en la necesidad de que estas sean oídas, en el sentido de que puedan alegar y puedan demostrar para conformar la resolución judicial, y en que conozcan y puedan rebatir sobre todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la resolución judicial” (Hernandez, 2013, p. 25).

2.2.3. Modalidades del derecho a la defensa

2.2.3.1. Autodefensa o defensa material

“La Defensa material es la que realiza el imputado personalmente, sin que para ello se requiera sea técnico en derecho. Se comporta en su haber como sujeto activo en las diversas manifestaciones u omisiones, por lo que se dice que sus manifestaciones más que medio de prueba, son medios de defensa” (Mendoza y Nuñez, 1999, p. 22).

“También llamada privada, explica la reacción natural de un inculpado de hacer su propia defensa, ya sea contestando la imputación, negándola o guardando silencio o bien aceptando la acusación fiscal (...) ejercida directamente por el imputado puede realizarse en la participación de actos procesales, pasando por la presentación de escritos hasta la utilización de medios impugnatorios o presentación de pruebas de descargo que contradigan la tesis de la acusación” (Villar, 2010, p. 119).

“La defensa material, que viene a ser una actividad procesal del imputado, es realizada por él mismo para hacer valer, ante el tribunal, sus derechos; mientras que la defensa técnica o formal es el derecho del imputado a contar con la asistencia y representación de un profesional del Derecho, la que recae en la figura del abogado defensor. Pero ambas constituyen el derecho de defensa Integral, y se conectan y enlazan de una forma unitaria” (Barrios, 2011, p. 24).

“La dimensión material o substancial, tiene en vista un complejo de derechos y garantías con carácter procesal, siendo esto el derecho de defensa, en sentido amplia (...) Bajo aspecto material, a las partes se le asegura la posibilidad de participar en todas las etapas de desarrollo del proceso. Pueden ser informadas sobre el contenido del dossier, proponer pruebas, hacer sus defensas, presentar sus sostenimientos en escrito y oral, y ejercitar las vías legales de apelación, con respecto de las condiciones previstas por la ley” (Vladila, Ionescu, y Matei, 2011, p. 244).

“Por propia definición, el derecho de defensa del imputado en causa penal, comprende su facultad para llevar a cabo actividades para resistir o poder atenuar la imputación penal, lo que realiza interviniendo personalmente en el proceso. Un contenido que hace a ese derecho de defensa, y que adquiere importancia vital, es su derecho a ser asistido por un abogado; que supone la prerrogativa de contar con un defensor técnico que interviene de manera independiente en el proceso procurando a su favor” (López, 2013, p. 9).

“Esta defensa, la realiza el imputado por su propia cuenta desde el inicio del proceso, al serle imputados los hechos y comunicado e informado de la prueba existente en su contra. Implica, de esta manera, que el imputado puede realizar todas las manifestaciones que estime necesarias en cualquier momento del proceso, y solicitar se recabe elementos de prueba que le resultan favorables, estando las autoridades judiciales obligadas a su recabación, siempre que sean pertinentes” (Mendoza y Nuñez, 1999, pp. 22-23).

2.2.3.2. Defensa técnica o defensa formal

“Defensa técnica es el acto o acciones realizada por el Profesional del Derecho, encaminada a proteger los intereses del sindicado dentro del proceso, promoviendo cualquier actividad pertinente en favor de su defendido” (Santisteban, 2007, p. 81).

“También llamada pública o formal debido a su naturaleza obligatoria y jurídica, cuya tecnicidad es comprensible porque desde el punto de vista de servicio público es imprescindible aún contra la voluntad del investigado-procesado para cumplir con las exigencias de equilibrio y justeza de un proceso penal, es decir, para garantizar el desarrollo de los principios procesales penales” (Villar, 2010, p. 116).

“La defensa formal o técnica, que se la ejercita por medio de un profesional del derecho que completando las limitaciones del imputado, formula alegatos, interviene en los interrogatorios y hace observaciones que considera pertinentes. La defensa técnica constituye el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso” (Guaicha, 2010, p. 44).

“El derecho a la asistencia jurídica letrada, parte ineludible de la inviolabilidad del derecho de defensa que nace a favor de quien resulta imputado penalmente, constituye un elemento definidor del acceso a la justicia en sentido amplio, en tanto la intervención activa de un defensor técnico posibilita que todos los derechos y garantías reconocidos al primero sean no sólo resguardados, sino efectivamente ejercitados” (López, 2013, p. 7).

“Es indudable, que uno de los grandes triunfos del derecho garantista, es que todo inculcado se encuentre asistido y defendido por un profesional del derecho desde las primeras diligencias hasta la conclusión del juicio. Por ello, si no puede designar un defensor, el Estado le proporcionará uno. Ahora bien, se entiende por ese solo acto, que goza de una defensa legal, sin embargo, resulta de suma importancia distinguir que el derecho de gozar de un defensor tiene dos grandes aspectos, el primero, que le sea otorgado el derecho de designar su defensor, pero el segundo aspecto, es el de mayor significación, que ese profesional esté debidamente capacitado para defenderlo, ya que, en caso contrario podrá contar con una defensa legal, pero no técnica” (Hernandez, 2013, p. 31).

“La dimensión formal o institucional se limita a definir el derecho de la parte a beneficiarse de un defensor especializado, siendo esto el derecho de defensa, en sentido limitado (...) así, bajo el aspecto formal, las partes tienen el derecho de ser representadas o, en su caso, asistidas en las condiciones legales” (Vladila, Ionescu, y Matei, 2011, p. 244).

“El principio que inspira este derecho es colocar al imputado en paridad con la parte acusadora, permitiéndole, como un sistema de frenos y contrapesos, proponer la prueba y diligencias necesarias para justificar su posición, con la ayuda de una persona capacitada en el estricto tecnicismo y complejidad del procedimiento en que se ve envuelto. Este principio rector, es lo que se conoce como principio de igualdad de armas u oportunidades” (Mendoza y Nuñez, 1999, p. 27).

2.2.3.3. Contenido constitucional del derecho de defensa

“El derecho de defensa se encuentra reconocido en el inciso 14) del artículo 139 de la Constitución, según el cual son principios y derechos de la función jurisdiccional: El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un abogado defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad” (Recurso de agravio constitucional, 2015).

“El derecho de defensa es un derecho que se reconoce al imputado en todos los órdenes jurisdiccionales y en todas las fases del proceso, para lo cual, los tribunales tienen la obligación de evitar cualquier tipo de desequilibrio en los derechos de las partes, que den lugar a una situación de indefensión. Por esta razón, se considera que el derecho de defensa es una parte indispensable del llamado *debido proceso*, esto es, que se respeten todos los derechos que posee una persona según la ley. Éste es un principio jurídico que implica que toda persona tiene derecho a un proceso con todas las garantías mínimas establecidas por la ley, que vayan dirigidas a asegurar un resultado justo y equitativo del proceso” (García y Rodríguez, 2014, pp. 5-6).

“El derecho de defensa constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudiera repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés” (Hernández F. , 2012).

“Este derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso penal tiene una doble dimensión: una material, referida al derecho del imputado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de un determinado hecho delictivo; y *otra formal*, que supone el derecho a la defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso” (Recurso de agravio constitucional, 2015).

“Este derecho también tiene el rango o categoría de principio, porque constituye parte de los atributos inherentes a toda persona humana y principalmente del sindicado, así también el de libertad y dignidad como tales no pueden ser inadvertidos durante la tramitación de un proceso. Es así como al sindicado, frente a la imputación que se le hace, le asiste el derecho de defenderse a través de un profesional. Es una garantía a la dignidad y al respeto de los derechos humanos” (Martínez, 2006, p. 10).

2.2.3.4. Contenido internacional del derecho de defensa

“El derecho de defensa es reconocido a nivel internacional en una multitud de Tratados Internacionales, de los cuales los más importantes son: la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; y el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998” (García y Rodríguez, 2014, p. 6).

“El derecho de defensa está previsto también en el artículo 6, párrafo 3, de la Convención Europea de los Derechos Humanos, en el art. 48 párrafo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General ONU por la Resolución 217 (III) del 10 de Diciembre de 1948 o en el art. 14 punto 3 letra d) del Pacto internacional concerniendo los derechos civiles y políticos” (Vladila, Ionescu, y Matei, 2011, p. 257).

“El artículo 8°, 2.d, de la Convención Americana sobre derechos humanos señala que el inculcado tiene derecho a: defenderse personalmente o [a] ser asistido por defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. A su vez, el artículo 139°, inciso 14), de la Constitución Política del Perú señala que toda persona: tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorado por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad” (Recurso de Casacion, 2012).

“El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de diciembre de 1966, se refiere en el artículo 14.3 al derecho de asistencia letrada el cual establece: durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficiente para pagarlo” (Maldonado, 2016, p. 30).

2.2.4. Principios pilares del derecho defensa

2.2.4.1. Principio de contradicción

“Este principio se asienta sobre las bases de las partes del proceso la posibilidad de comparecer acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones durante el proceso. Se exige tres: 1) la imputación 2) la intimidación 3) derecha de audiencia” (Carrasco, 2016, p. 21).

“Para cualquier litigante, el principio de contradicción significa que, al defender sus intereses, podrá alegar sus propios argumentos y sustentarlos con las pruebas que estime convenientes y, en consecuencia –con el fin de que este derecho no sea meramente teórico e ideal sino real y efectivo– también podrá pronunciarse sobre las pretensiones de la otra parte, en una posición de “igualdad de armas” que le permitirá disponer de las mismas oportunidades para alegar y probar todo aquello que estime oportuno, con vistas a lograr que el tribunal reconozca su posición” (Perez, 2016, pp. 22-23).

“Según este principio, el proceso es una controversia entre dos partes contrapuestas: Acusador y el Acusado. El juez, por su parte, es un árbitro imparcial que debe decidir en función de las alegaciones de cada una de las partes. El principio de contradicción exige que ambas partes puedan tener los mismos derechos de ser escuchados y de practicar pruebas, con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente a la otra. Requiere de igualdad” (Palacios, 2015, pp. 13-14).

“Este principio tiene lugar en todo el proceso penal, permitiendo que la parte contra quien se propone la prueba tenga la facultad de intervenir en el momento de la notificación, petición, presentación, práctica y admisibilidad, dicha producción permite se formule preguntas, observaciones, objeciones, aclaraciones y evaluaciones, sobre las mismas. Además permite la discusión de la prueba, es decir que una vez producida ésta las partes puedan formular sus alegaciones u observaciones sobre su mérito probatorio, estableciendo para el efecto las disposiciones adjetivas un tiempo, momento procesal o período específico, denominado etapa de prueba” (Toaquizza, 2014, p. 54).

2.2.4.2. Principio acusatorio

“Es un principio relevante del sistema acusatorio reside en la división de poderes. En el sentido se trata de una garantías esenciales del proceso penal con las distribuciones de roles” (Carrasco, 2016, p. 21).

“El principio acusatorio admite y presupone el derecho de defensa del imputado y, consecuentemente, la posibilidad de *contestación* o rechazo de la acusación. Provoca en el proceso penal la aplicación de la contradicción, o sea, el enfrentamiento dialéctico entre las partes, y hace posible el conocer los argumentos de la otra parte, el manifestar ante el Juez los propios, el indicar los elementos fácticos y jurídicos que constituyen su base, y el ejercitar una actividad plena en el proceso” (Perez, 2016, p. 7).

“Este principio se basa en la necesaria existencia de una parte acusadora distinta e independiente del juez, que ejercite la acción penal; a su vez admite y presupone el derecho de defensa; por lo que hay posibilidad para ésta, de discusión o rechazo de la acusación con igualdad de medios que los de la parte acusadora; y por último, la existencia de un órgano judicial independiente que debe fallar con carácter absolutamente imparcial. El principio acusatorio puede sintetizarse en dos ideas bien simples: no hay proceso sin acusación (la expresión latina *nemo iudex sine actore* quiere significar la misma idea) y quien acusa no puede juzgar” (Chicas, 2013, pp. 43-44).

“El principio acusatorio exige que se promueva y sostenga por parte acusadora (sujeto diferenciado del órgano jurisdiccional) una pretensión punitiva para que pueda abrirse el juicio penal indica la aplicación y potestad jurisdiccional exclusiva de los jueces, juezas y tribunales de justicia, así como el ejercicio de la acción procesal penal, por parte de un ente acusador” (Sarti, 2014, pp. 16-17).

2.2.5. Garantías constitucionales y el derecho de defensa

2.2.5.1. El derecho a ser oído

“El derecho a ser oído constituye un componente fundamental del derecho de defensa y se erige en derecho humano esencial y por tanto, elemento visceral de un justo proceso constitucional. El derecho a ser oído es constitutivo de un principio irrenunciable del derecho procesal constitucional que se expande, desde la norma cimera y su bloque, hacia todas las exteriorizaciones procedimentales, pudiendo desarrollarse excepciones razonables en orden a su tiempo y modo de concreción” (Hernandez C., 2013, p. 26).

“Existiendo una imputación nace el derecho de defensa, lo que importa reconocer que el sujeto pasivo de la imputación tiene, en cuanto posibilidad procesal, el derecho de acceder al proceso o investigación preliminar, a ser oído por la autoridad en todas y cada una de las instancias en que la causa se desenvuelva” (Villar, 2010, p. 84).

“La base esencial del derecho a ser oído, reposa sobre la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación. Es imprescindible que exista algo de qué defenderse, es decir, una imputación de materia procesal penal. Esa imputación debe ser conocida por el encausado, es decir, debe ser correctamente intimado (noticia íntegra, clara, precisa y circunstanciada del hecho concreto), si no, este tampoco podría defenderse de algo que no conoce (principio de contradicción)” (Nogueira, s,f, pp. 8-9).

“Mediante el derecho a ser oído por un juez o tribunal se garantiza que cada una de las partes que participan en un proceso judicial puedan ofrecer, de manera efectiva, sus razones de hecho y de derecho que consideren necesarias para que el juez o tribunal resuelva el caso o la controversia en la que se encuentren participando. Se encuentra comprendido dentro de su contenido constitucionalmente protegido el contradictorio argumentativo, el cual exige que éste se lleve a cabo sin que alguna de las partes, por acción u omisión del juez o tribunal, pueda encontrarse en una evidente situación de desventaja respecto de la otra, cualquiera sea la competencia *ratione materiae* del proceso” (Recurso de agravio constitucional, 2005).

2.2.5.2. Derecho de prueba

“En sentido amplio, cabe decir que prueba, es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o afirmación precedente, la cual es el medio más confiable para descubrir la verdad real y, a la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales. Asimismo, puede decirse que prueba es el único medio seguro de lograr esa reconstrucción de modo comprobable y demostrable” (Martínez, 2006, p. 43).

“El derecho constitucional a la prueba incluye también poder intervenir en la agenda para controlar su correcta práctica y contradecirla, por lo tanto: no se debe prohibir absolutamente a la parte la aportación de pruebas sobre todo o parte del proceso, no se debe de negar el ofrecimiento de pruebas sino por una resolución motivada, no se debe de negar el ofrecimiento de pruebas con motivación irrazonable, no se debe vulnerar el equilibrio de igualdad de las partes en la prueba” (Villar, 2010, p. 121).

“El derecho a la prueba lleva aparejada la posibilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrime a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un derecho fundamental de los justiciables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según esta dimensión subjetiva del derecho a la prueba, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa” (STC 1014-2007- PHC/TC).

“El derecho de probar tiene una naturaleza compleja, en la medida que está integrado por una diversidad de componentes: el derecho a ofrecer medios probatorios sean admitidos, el derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba y el derecho a que se valoren adecuada y motivadamente los medios probatorios” (Carrasco, 2016, p. 22).

“Siendo un derecho fundamental, el derecho a la prueba tiene una doble dimensión o carácter. En su dimensión subjetiva, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria, con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. En su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia” (STC 1014-2007- PHC/TC).

2.2.5.3. El derecho a comunicarse libre y confidencialmente con su abogado

“El presupuesto básico de la efectividad de la defensa letrada es que las comunicaciones entre el acusado y su abogado sean confidenciales, debiendo garantizar las autoridades dichas comunicaciones, ya que no puede existir una defensa efectiva a menos que el acusado pueda confiar plenamente en su abogado” (Beltran, 2008, pp. 136-137).

“Este derecho exige que el defensor se comuniquen con el acusado en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones. Los abogados deben poder asesorar y representar a sus clientes de conformidad con su criterio y normas profesionales establecidas, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte” (Villar, 2010, p. 102).

“Así pues, cuando el acusado se encuentre bajo la custodia policial, las autoridades también deberán proporcionar el tiempo y los medios adecuados para que se entreviste y mantenga comunicaciones confidenciales con su abogado, directamente, por teléfono o por escrito. Estas entrevistas o conversaciones telefónicas podrán ser vigiladas visualmente por otras personas, pero no deberán ser escuchadas” (Beltran, 2008, p. 138).

“El derecho a comunicarse previa y privadamente con el defensor significa evitar censuras e interferencias, así como el acceso a los documentos necesarios para la preparación de la defensa. No tener la posibilidad de preparar la defensa por falta de comunicación libre y privada con el patrocinado constituye una violación de los derechos mencionados” (Pari, 2015, p. 129).

“El mantenimiento del contacto entre ambos de forma confidencial, qué duda cabe, posibilita un mutuo intercambio de información entre el imputado -necesitado de asesoramiento y defensa- y su defensor, a quien es imprescindible para, desde un primer momento, articular con eficacia su estrategia (...)” (Lope, 2001, p. 209).

2.2.5.4. El derecho a un plazo razonable

“El derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable se encuentra reconocido por el artículo 8.1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), el cual señala que *toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable*. A su turno, el Nuevo Código Procesal Penal – Decreto Legislativo Nº 957- establece en el artículo 1º de su Título Preliminar que *la justicia penal (...) se imparte (...) en un plazo razonable*. Estos dispositivos reflejan la indiscutible importancia del respeto y protección de este derecho como garantía del debido proceso” (Viteri, s.f, p. 1).

Sendra citado por Angulo sostiene que el plazo razonable es “un derecho subjetivo constitucional, que asiste a todos los sujetos que hayan sido parte en un procedimiento penal, de carácter autónomo, aunque instrumental del derecho a la tutela, y que se dirige frente a los órganos del poder judicial aun cuando en su ejercicio han de estar comprometidos todos los demás poderes del Estado, creando en ellos la obligación de satisfacer dentro de un plazo razonable las pretensiones y resistencias de las partes o de realizar sin demora la ejecución de las sentencias ” (Angulo, 2010, p. 16).

“Respecto a la doctrina del no plazo, Pastor ha establecido que el plazo razonable de duración del proceso penal, no es un plazo en sentido procesal penal que debe ser previsto abstractamente por la ley, sino que se trata de una pauta interpretativa abierta para estimar si la duración total de un proceso ha sido o no razonable, para lo cual debe procederse caso a caso, una vez finalizado el proceso y globalmente, tomando en cuenta la complejidad del caso, la gravedad del hecho” (Portocarrero, 2015, p. 29).

“El carácter razonable de la duración de un procedimiento se debe apreciar según las circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta: (i) la complejidad del asunto; (ii) el comportamiento del recurrente; (iii) la forma en que el asunto ha sido llevado por las autoridades administrativas, es decir, lo que ordinariamente se demora en resolver determinado tipo de procesos; y (iv) las consecuencias que la demora produce en las partes” (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2003, p. 23).

“Pero hay que tener presente que esta garantía no implica la idea, de un juicio breve o express, ya que ella debe ser entendida también en el marco del principio *nulla poena sine iudicio*, el que claramente no permite que un juicio, que se sustancie con pleno respeto de los principios y normas que lo guían, se lleve a cabo sumariamente. Ello contravendría no sólo las normas y principios que configuran el debido proceso, sino que también el correcto ejercicio del derecho a la defensa” (Angulo, 2010, p. 17).

“El plazo de un proceso o un procedimiento será razonable sólo si es que aquél comprende un lapso de tiempo que resulte necesario y suficiente para el desarrollo de las actuaciones procesales necesarias y pertinentes que requiere el caso concreto, así como para el ejercicio de los derechos de las partes de acuerdo a sus intereses, a fin de obtener una respuesta definitiva en la que se determinen los derechos u obligaciones de las partes” (STC N. ° 0295-2012-PHC).

“Asimismo, si revisamos la Constitución podemos notar que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no se encuentra expresamente descrito en la Constitución Política del Perú de 1993. Pero esto no significa que el derecho al plazo razonable no tenga respaldo constitucional porque el catálogo de los derechos plasmados en la Constitución es *numerus apertus*” (Meneses G, Meneses Ochoa, 2016, p. 102)

“Es así, que el derecho al plazo razonable al tener su fundamentación en la dignidad humana, al evitar someter al procesado a plazos procesales irrazonables que vulneran derechos fundamentales como el derecho al debido proceso, el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva” (Meneses G, Meneses Ochoa, 2016, p. 103)

2.2.6. El derecho de defensa en el proceso penal

“El derecho de defensa en el marco del proceso penal es una garantía fundamental del Debido Proceso, que involucra innumerables derechos dentro de los que encontramos el derecho de toda persona a ser asistida por un abogado defensor de su elección, o en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad, materializándose la defensa técnica” (Andía, 2013, p. 17).

“Por lo que se puede decir que el derecho de defenderse es aquél que tiene el procesado para oponerse a la acusación. El concepto de defensa, junto con las nociones de acción y jurisdicción, son los tres pilares básicos sobre los que descansa la idea misma del proceso penal como estructura normativa destinada a armonizar la pretensión punitiva del Estado, la libertad individual y las exigencias de la correcta y válida administración de justicia dentro del Estado de Derecho” (Hernandez C. , 2013, p. 28).

“En la medida que, el derecho de defensa es un atributo esencial del debido proceso, el Tribunal Constitucional ha entendido que cualquier impedimento de participar en un proceso judicial a quienes tienen legítimo interés constituye una violación constitucional inadmisibles, aun cuando esta limitación se base en la ley; motivo por el cual, en cualquier etapa del proceso, incluso cuando un proceso se encuentra en vía de ejecución de sentencia, es más valioso constitucionalmente proteger el derecho de defensa, que asumir una noción formalista de la cosa juzgada” (Landa, 2002, p. 454).

“Una garantía de singular importancia como es el derecho de defensa en cada etapa del procedimiento y durante todo el proceso que se lleva a cabo, lleva consigo la necesidad de accesar y garantizar, en sí mismo, el principio de contradicción para el perfeccionamiento y perseguir la finalidad de una justicia que exige la sociedad, al llevar de la mano a la víctima y ofendido durante todo su camino en el ámbito del *ius puniendi*, que tiene el Estado, para perseguir con ello, como dicen los autores latinoamericanos, una “igualdad de armas” al otorgar posibilidades de defensa y participación a los sujetos procesales por igual” (Hernandez C. , 2013, p. 29).

“La defensa técnica en el proceso penal es un derecho fundamental de cada una de las partes. En el proceso penal la defensa técnica del imputado acusado adquiere, además, la condición de requisito necesario, que se impone al propio titular del *ius puniendi*. Como sabemos el estado es quien asume el monopolio de la administración de justicia, a través del poder judicial, que solo podrá realizar el proceso e imponer penas dentro del estricto marco constitucional si está presente tanto el abogado del acusado, como el abogado del agraviado y en consecuencia cumplir los principios “no hay derecho sin defensa y principio de condición de igualdad”, para alcanzar la tutela y evitar la indefensión”.

2.2.7. El derecho de defensa en el proceso inmediato

“En palabras de Sánchez Velarde, el proceso inmediato es un procedimiento especial que atiende al criterio de simplificación procesal, pues busca abreviar al máximo el proceso penal. La finalidad de este proceso especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio Público de formular directamente la acusación y que esta sea aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia” (Portocarrero, 2015, p. 21).

“Este proceso especial supone la eliminación de la etapa intermedia del proceso penal, para pasar directamente de la investigación preliminar a la etapa del juicio oral. La razón fundamental para que el fiscal presente este requerimiento ante el juez de la investigación preparatoria es que considera que hay suficientes elementos de convicción para creer que el imputado es el responsable del hecho delictivo” (De la Jara, Mujica, y Ramirez, 2009, p. 53).

“Se debe tener en cuenta que la acusación una vez pasada la audiencia de entrada al proceso inmediato tiene el plazo de un solo día para presentar la acusación, dejando al fiscal con una premura inconcebible de la recolección de pruebas y a su vez, deja prácticamente sin tiempo alguno a la defensa para analizar y realizar nuevas actuaciones para la audiencia de juzgamiento en dos días posteriores, para la defensa muchas de las actuaciones que fundamentan la sanción o pena tienen que ser actuadas en presencia de un abogado de oficio puesto que el imputado debe encontrar a su abogado en un plazo mínimo, no dando tiempo para lograr que el abogado defensor decidido por el imputado tenga un tiempo prudente para revisar el expediente y presentar nuevas pruebas que acrediten la inocencia del inculcado” (Carrasco, 2016, pp. 2-3).

“Específicamente en el proceso inmediato por flagrancia por el escaso tiempo que se tiene es prácticamente imposible al imputado esperar al letrado de su confianza pues por la precariedad del tiempo muchas actuaciones se realizan con abogado de oficio. Por lo cual no existe una real defensa técnica” (Carrasco, 2016, p. 21).

“Se trata pues de que solamente se aplique el proceso inmediato a casos en los que la culpabilidad del imputado es evidente; de manera tal que al no haber duda alguna de la culpabilidad, se puede prescindir de la totalidad de las etapas del proceso (...) mediante él se acorta la etapa de investigación preparatoria y se salta la etapa intermedia de manera tal que el juez de la investigación preparatoria (que es un juez de garantías) remitirá la acusación al juez penal para que este último emita acumulativamente el auto de enjuiciamiento y la citación a juicio” (Benites, 2010, p. 43).

2.2.8. La flagrancia

“La palabra flagrante viene del latín “flagrans-Flagranti, que proviene del verbo flagrar. Que significa “arder o resplandecer como fuego y llama”, según el diccionario de “la Real Academia de la Lengua Española”, que sabemos en cuestiones de terminología es fuente de claridad conceptual para la interpretación jurídica; en el mismo término se pronuncia, el Diccionario de Larousse, el que entiende por flagrar arder, llamear y, entiende por flagrante aquello que se ejecuta actualmente” (Reyes, El delito flagrante: sus implicancias en el proceso penal, 2004, p. 2).

“La expresión metafórica se refiere a la llama, que denota con certeza la combustión, cuando se ve la llama, es indudable que alguna cosa arde. En cuanto a la flagrancia delictiva está vinculada al preciso momento en que es percibido o apreciado la ejecución de un delito, lo cual, proporciona en términos procesal penal, una mayor convicción tanto respecto al delito mismo como de la responsabilidad del presunto

autor” (Arcibia, Garcia, Gonzales, Mori, Mosqueira, y Valdivia, 2011, p. 26).

“Desde un punto de vista jurídico, se entiende como la calidad de una acción que se está cometiendo actualmente, la expresión se utiliza respecto al delito, siendo flagrante aquel en que el delincuente es sorprendido al momento de efectuarlo, sin que pueda eludir la acción de la justicia, entendiendo este además por flagrante que flagra, que está ejecutando o cometiendo ahora” (Rebolledo, Moraga, Careau, y Andrade, 2008, p. 95).

“La Flagrancia es un concepto que, por un lado, abarca el momento en que el autor o los partícipes están cometiendo el delito, lo que incluye a todos los actos punibles del *iter criminis*. De ahí que los actos de inicio de ejecución aquellos posteriores a los actos de preparación y con los cuales empieza la tentativa son actos que también quedan abarcados por el concepto de flagrancia”.

2.2.8.1. Antecedentes históricos de la flagrancia en el mundo

A) En la antigüedad: Roma y el Derecho Canónico

“Como primer código legal de la historia fue. En el Código laico de Hammurabi, primer código legal de la historia, creado por el Rey Hammurabi, cuando gobernaba Babilonia, entre los años 1790 a 1750 a.c. El código buscaba evitar, bajo leyes aplicables en todos los casos, que los ciudadanos tomaran la justicia por su propia cuenta. Se regularon aspectos como (...) las penas por delitos de robo, asesinato, entre otros. El castigo fijado por el estado consistía en penas: pena de muerte, castigos corporales, composición económica, multas y expulsión de la comunidad” (Cartagena, 2016, p. 18).

“La primera referencia al delito flagrante, la encontramos en el derecho romano, conocido como manifestum, en oposición al no manifiesto (furtum) y esta distinción tenía importancia, en razón de que el primero era punido no sólo en forma más severa sino también de oficio. La razón de la mayor sanción la explica CARRARA *por* a) la culpabilidad es evidente; b) más intenso el espíritu de venganza” (Arcibia, Garcia, Gonzales, Mori, Mosqueira, y Valdivia, 2011, p. 9).

“Asimismo, en el Derecho Romano existieron el hurto manifiesto y el no manifiesto (furtum manifestum et nec manifestum), siendo constitutivo el primero de delito flagrante, que era penado más rigurosamente, con la esclavitud para el hombre libre, y con la precipitación desde una roca para los esclavos, y para cuyo juzgamiento se procedía de oficio, en razón de que, tal como propone Carrara (2000, 72), a) la culpabilidad es evidente; b) más intenso el espíritu de venganza” (Castejon, 2009, pp. 13-14).

Bajo esa misma premisa Cartagena señala:

“Aparece encontrarse el primer instituto procesal cercano a la flagrancia denominado manifestum, término relacionado directamente para delitos contra la propiedad, donde era manifiesta la responsabilidad o culpabilidad por la evidencia de la acción. De ahí surgen los conceptos de *furtum manifestum o nec manifestum* entendido como el hurto ocurrido cuando el autor era sorprendido en el momento mismo del hecho, con la cosa en sus manos” (Cartagena, 2016, pp. 18-19).

Por otra parte, en referencia al Derecho Canónico Castejón señala:

“En el Derecho Canónico, para aplicarle también el procedimiento de oficio, se equiparó el hecho notorio al delito flagrante; pero es en la época intermedia cuando el Derecho se ocupa más profundamente el estudio de la flagrancia, especialmente con lo relacionado con la aprehensión del sorprendido in fraganti, su juzgamiento y las pruebas a utilizar en su contra, produciéndose también, en el proceso inquisitorio sumario que se seguía en la época, una equiparación de la situación que surgía cuando aparecía evidente la culpabilidad del reo en razón del señalamiento general, con el delito flagrante, debiendo procederse en ambos casos ex abrupto” (Castejon, 2009, p. 14).

“En estos casos había que proceder ex abrupto ya que, según refería el derecho canónico en las causas notorias no se necesitaba acusación, denuncia, inquisición o excepción, ni siquiera testigos u otras pruebas, ni se debía recibir en ellas líbello, ni emplearse conocimiento de causa, pero si se debía citar al reo e interrogarlo y a presencia de él o ausente en contumacia, se debía promulgar sentencia” (Arcibia, Garcia, Gonzales, Mori, Mosqueira, y Valdivia, 2011, p. 11).

B) En la edad media

Por otra parte Cartagena sostiene: “El instituto de flagrancia toma relevancia. El sujeto que fuere sorprendido in fraganti, era arrestado y, mediante un proceso distinto al ordinario, era definida su situación. El proceso, denominado ex abrupto (bruscamente), además de fundarse en el ritualismo, resultaba sumario y carente de acusación y desahogo probatorio” (Cartagena, 2016, p. 20).

“Aquí se empieza a discutir la detención por flagrancia versus detención con orden judicial o por funcionario competente. Durante la Edad Media aparecieron normas que se refirieron a los delitos flagrantes, como son el Código de Alarico II, o Breviario de Alarico, que responde a la necesidad que tiene el pueblo hispano romano de disponer de un cuerpo de leyes claro y actual por el que se habría de regir el pueblo vencido frente a los visigodos, que ya disponían del Código de Eurico. Se conservan castigos, para los casos tales como el robo en flagrancia, un ejemplo lo pone el Código cuando castiga el hecho de robar un tarro de miel por parte de un esclavo que podía costarle la horca mientras que la muerte era castigada en numerosas ocasiones con el pago de una suma de dinero” (Arcibia, Garcia, Gonzales, Mori, Mosqueira, y Valdivia, 2011, p. 13).

“La flagrancia en la edad media, se desarrolló basado en el Derecho Romano unido con el Derecho Germánico dependiendo de la región o de quienes aplicaban con mayor o menor influencia cultural el derecho del imperio caído (...) fueron restringidas las libertades personales al máximo e incluso llegaban a las crueldades y barbaries más increíbles para la obtención del cumplimiento de una obligación y el castigo de un culpable o de aquel que tuviera apariencia de ser culpable o presumirse su responsabilidad” (Haro, 2015, p. 11).

“En España, la flagrancia se encontraba desarrollada en las siete partidas o Código Alfonsino, denominada de este modo porque fue una colección del Rey Alfonso X el Sabio, estaba compuesta de siete partes; en la primera se trata de las cosas pertenecientes a la fe católica, y al conocimiento de Dios por creencia; en la segunda, de los emperadores, reyes y señores de la tierra que deben mantenerla en justicia; en la tercera, de la justicia, y del modo de administrarla ordenadamente en juicio para la expedición de pleitos; en la cuarta, de los desposorios y matrimonios; en la quinta, de los contratos; en la sexta, de los testamentos y herencias; y en la séptima, de las acusaciones, delitos y penas” (Haro, 2015, p. 12).

C) En la edad moderna

La Edad Moderna es el tercer periodo histórico de la Historia Universal, en esta fase de la historia, triunfan los valores de la modernidad (el progreso, la comunicación, la razón) frente al periodo anterior, la Edad Media. La toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453 (invención de la imprenta y el desarrollo del Humanismo y el Renacimiento, la llegada a Italia de exiliados bizantinos y textos clásicos griegos), el Descubrimiento de América (1492) y la Reforma Protestante (1517) se han propuestos como hitos de partida. (Haro, 2015, pp. 12-13).

“Posteriormente, en España, debido al descubrimiento del nuevo mundo en el año 1492, el Rey debió aplicar normas jurídicas vigentes en España, como las que acabamos de mencionar, para luego crear un consejo asesor, *llamado Consejo de Indias*, dictando leyes particulares para ser aplicadas espacial y temporalmente en América, surgiendo las Leyes de Indias, la Nueva Recopilación de las leyes de Indias, y en caso de omisiones o imposibilidad de solución de los conflictos de relevancia jurídica no contemplados en éstas, se debía recurrir a la legislación hispánica en órdenes que fueron cambiando de acuerdo a la casa del monarca que ejercía el poder en la corona española” (Arcibia, Garcia, Gonzales, Mori, Mosqueira, y Valdivia, 2011, p. 15).

“En la edad moderna, surgen las Repúblicas Independientes en Europa y con dicha situación, cada Nación crea su sistema legal y de gobierno, frente a lo cual cada individualidad adopta las instituciones jurídicas que estimaron convenientes al desarrollo de sus estados y así cada uno aporó ligeras reformas a los requisitos y el procedimiento a seguir en materia de Flagrancia. En la Edad Moderna, se retorna a la concepción que existía en el derecho antiguo de los Romanos acerca de la Flagrancia, en lo atinente al Robo Manifiesto y ésta concepción, fue tomada por los Germanos en la Ley Carolina y por los Franceses en las Ordenanzas de 1670” (Sanchez y Santiago, 2010, p. 35).

“En la edad media fue la etapa del derecho de castigar que desplazo todo el poder monárquico y feudal al poder judicial dando un enorme paso al respeto de las garantías individuales especialmente la libertad. Y es de esa manera como ha venido evolucionando los procesos en delito flagrante, tanto es así que en la época moderna este delito se traslada a leyes y procedimientos” (Gomez, 2016, p. 1).

D) En la edad contemporánea

“La Edad Contemporánea es el nombre con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Revolución francesa y la actualidad. De este época se señala como referente la legislación europeo continental, cuando se afirma que las leyes de enjuiciamiento criminal (española de 1872, art. 382, italiana de 1930 y de diversos países autorizaban a cualquier persona particular a proceder al arresto del delincuente sorprendido in fraganti o en forma cuasi flagrante, en dichos casos la facultad que se le concedía se restringía, en cuanto tenía la obligación inmediata de poner al reo en manos de la autoridad competente” (Cartagena, 2016, p. 21).

“El referente histórico de la legislación europea continental, está dada por las leyes de enjuiciamiento criminal de diversos países, la cual autorizaba a cualquier persona particular a proceder al arresto del delincuente sorprendido in fraganti o en forma cuasi flagrante, en dichos casos la facultad que se le concedía se restringía, en cuanto tenía la obligación inmediata de poner al reo en manos de la autoridad competente” (Haro, 2015, pp. 13-14).

“Ahora bien, el delito flagrante sigue teniendo en la actualidad una importante trascendencia procesal, por cuanto, al igual que en la antigüedad, continúa determinando la aplicación, como de hecho ocurre en muchos países civilizados, de un juicio rápido, casi inmediato a la comisión del hecho, y excluyente de algunas de las etapas del proceso que ordinariamente se sigue para delitos no flagrantes, pero por supuesto en el que debe darse cumplimiento al elenco de garantías establecidas en el moderno Derecho procesal penal a favor del encausado, además de que aparece consagrado como causa de detención en casi todas las constituciones del mundo” (Castejon, 2009, p. 15).

2.2.8.2. Regulación normativa de la flagrancia en el Perú

“El Código de Procedimientos Penales de 1940 no definía ningún concepto de flagrancia. Este primer acercamiento al concepto de flagrancia se realiza con el Decreto Legislativo 638 que aprobó el Código Procesal Penal de 1991 (art. 106, inc. 8) al señalar que: «Hay flagrancia cuando la comisión del delito es actual y en esa circunstancia su autor es descubierto». Asimismo, «si el agente es perseguido y detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, o es sorprendido con objetos o huellas que revelan que viene de ejecutarlo». Este artículo no entro en vigencia, tal como sucedió con parte de este texto normativo” (Cabrejo, 2011, p. 2).

“Posteriormente, el Código Procesal Penal de 2004, en su artículo 259º, propone tres comportamientos de la flagrancia” (Cartagena, 2016, p. 32).

1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible.
2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto.
3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración de hecho punible, sea por el agraviado o por otras persona que haya presenciado el hecho, o por medio audio visual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible.
4. El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración de delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o hubiere sido empleados para cometerlo o con las señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación el hecho delictuoso.

Bajo éste último supuesto podemos citar:

“Se permite detener por flagrancia a una persona hasta después de veinticuatro (24) horas de cometida el delito. Dicho período de tiempo implícitamente otorga a la autoridad policial por un lado, la realización de actos de investigación para lograr la identificación del presunto autor de delito y por otro, actos de investigación para encontrar los efectos que fueron materia del delito o los instrumentos empleados para cometerlo, que ya no constituye propiamente un supuesto de flagrancia delictual, desnaturalizándola, permitiéndose una detención no sustentada ella, sino en acto de investigación policial, lo cual, puede entenderse como inconstitucional por vulnerarse el espíritu del artículo 2 inciso 24 literal f) de nuestra Constitución” (Arcibia, Garcia, Gonzales, Mori, Mosqueira, y Valdivia, 2011, pp. 57-58).

“El mismo que a partir de la ejecución de un diseño denominado plan piloto aplicado en el distrito judicial de Tumbes; esto es el 01 de agosto del 2015, se empezaron a incoar los primeros procesos inmediatos; posteriormente a consecuencia de la Ley de Flagrancia, cuya entrada en vigencia fue desde el 01 diciembre de 2015 se cambió el verbo “podrá” por el “deberá” mediante el Decreto Legislativo N° 1194 emitido por el Poder Ejecutivo en virtud de la Ley N° 30336” (Tejada, 2016, p. 48).

“Nuestra actual Constitución en su título I, regula hace referencia a la flagrancia en forma específica en los artículos 2 inciso 24, parágrafo f) al referirse como un límite de la libertad locomotora y de excepción a la detención sin mandato judicial; así como en el mismo artículo 2 inciso 9, a referirse al derecho a la inviolabilidad del domicilio, en el cual, una excepción a dicho derecho, es la flagrancia” (Cartagena, 2016, pp. 41-42).

2.2.8.3. Clasificación de flagrancia

- **Flagrancia propiamente dicha o estricta**

“Hay flagrancia estricta cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento mismo de estar ejecutando o consumando el delito, concepto que se encuentra vinculado con las fases consumativa o ejecutiva del hecho punible” (Arcibia, Garcia, Gonzales, Mori, Mosqueira, y Valdivia, 2011, p. 30)

“La flagrancia propiamente dicha se configura cuando la policía detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito, el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible o cuando acaba de cometerlo; supone la actualidad en la comisión del delito que se revela al que descubre a su autor en el momento de la comisión, es decir, se sorprende al autor en el acto de delinquir; requiere de forma imprescindible la percepción sensorial del mismo” (Espinoza, 2016, p. 186).

“Podemos indicar que habrá detención en flagrancia tradicional o estricta, cuando el sujeto es intervenido o sorprendido en la ejecución o consumación de la conducta ilícita, concurriendo los requisitos de inmediatez personal, al estar presente físicamente el agente en el lugar de los hechos e inmediatez temporal, al ser descubierto ejecutando el hecho punible” (Meneses, 2015, p. 43).

“La doctrina se ha pronunciado también conocida como flagrancia real, estricta, en sentido estricto (stricto sensu) o propiamente dicha. Hace referencia al descubrimiento del autor en el momento de la comisión de los hechos. Es decir, acontece cuando se ejecuta e instantes acaba de cometer un delito y el responsable es percibido sensorialmente por un tercero en su comisión”. En ese sentido quiere decir una vez que se ha iniciado y consumado la fase interna y externa de la iter criminis” (Cartagena, 2016, p. 34).

- **La cuasiflagrancia**

“Cuasiflagrancia se da cuando un individuo ya ha ejecutado el hecho delictivo, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. Por ejemplo, un sujeto roba un artefacto y es visto en el acto de perpetrar el latrocinio, siendo perseguido por quien o quienes lo han sorprendido y es detenido” (Arcibia, Garcia, Gonzales, Mori, Mosqueira, y Valdivia, 2011, p. 30).

“La cuasiflagrancia, se da cuando el agente es detenido o perseguido inmediatamente después de cometer el delito, siendo característica primordial que la persecución que se inicie, dure, o no se suspenda mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que lo persiguen. De esta forma, quienes admiten la cuasiflagrancia como una forma más amplia de la flagrancia entienden que la flagrancia del delito se verifica cuando la noticia de un hecho que constituye delito se obtiene mediante la presencia a la perpetración del hecho, o bien por efecto de consecuencias a reacciones de tal hecho inmediatamente producidas” (Espinoza, 2016, p. 186).

“Se da este supuesto cuando ya se ha ejecutado el delito, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. En palabras del tratadista Jorge Alberto SILVA SILVA, una persona puede ser detenida aun después que ejecutó o consumó la conducta delictiva, pero siempre y cuando no le hayan perdido de vista y sea perseguido desde la realización del hecho delictivo” (López J. , 2015, p. 4).

“Ocurre cuando el agente ha ejecutado el hecho delictivo, pero es descubierto inmediatamente después, cuando se encuentra identificado en la zona de comisión del ilícito penal, antes de que logre alejarse más, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. La intervención policial es posterior al momento que fue descubierto el agente cometiendo el hecho por el mismo agraviado, parientes o terceros o cuando la misma víctima reduce al agresor, logrando escapar este, circunstancia en la que se incorpora a perseguirlo la policía, logrando capturarlo” (Carrasco, 2016, p. 11).

- **La flagrancia presunta**

“Presunción legal de flagrancia o flagrancia presunta se presenta cuando el autor es sorprendido con los objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. El caso de que se encuentra al agente llevando en su poder un aparato electrodoméstico que acaba de sustraerlo de una vivienda” (Mendoza G. , 2016, p. 109).

“La flagrancia inferida se produce cuando se sorprende inmediatamente después de cometido el delito, con efectos o instrumentos que infundan la sospecha vehemente de su participación en él; es una figura muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho” (Espinoza, 2016, p. 186).

“Se configura cuando al agente se le encuentra con señales o instrumentos que permitan pensar que es el autor del ilícito penal. Esta figura está referido al sujeto activo que no ha sido sorprendido ejecutando o consumando el hecho delictivo, y menos aún ha sido perseguido luego de cometer el delito, sino más bien que ha dicho sujeto se le encuentra con objetos que hacen presumir la comisión de un hecho criminal – cuando sólo hay indicios razonables que permitan pensar que es el autor material del delito” (López J. , 2015, p. 6).

“Presunción de Flagrancia ocurre cuando el agente no fue descubierto al iniciar la comisión del delito ni durante la comisión de aquel y ni siquiera después de cometido el hecho delictivo, sino que huyó y logró no ser identificado, sino que solo existen indicios que permiten pensar que es el autor del delito” (Carrasco, 2016, pp. 11-12).

- **La flagrancia diferida**

“Se configura cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible” (López J. , 2015, p. 5).

“[Este tipo de flagrancia se da] Cuando es identificado por la víctima, un testigo o medios audiovisuales y es intervenido dentro de las 24 horas. Esto es también, cuando es intervenido dentro de las 24 horas con los efectos o instrumentos que sirvieron para la perpetración del evento delictivo” (Cardenas, 2016, p. 121).

“Al flexibilizar los requisitos que integran la figura de la flagrancia, incorporando la tecnología en la inmediatez personal (registrar el hecho a través de medios audiovisuales u otros dispositivos), y ampliando el término de la captura hasta 24 horas en la inmediatez temporal, el legislador, basado en criterios político-criminales, ha considerado reformular este concepto de flagrancia con el fin de hacer más efectiva la lucha contra la criminalidad” (Espinoza, 2016, p. 187).

2.2.8.4. Principios de la flagrancia

- **Fumus Commisi Delicti:**

“Este principio también es conocido como atribución de un delito, parte del hecho que de forma previa, razonada e indiscutible, un tercero impute a un sujeto la comisión de un hecho delictivo; lograda tal imputación, la ley autoriza al tercero para la aprehensión del responsable sin orden judicial previa (...) se trata de aquel supuesto fáctico en el cual para poder detener a un sujeto es imprescindible que exista una vinculación previa, directa e inmediata del hecho mediante el sorprendimiento de su acción flagrante. Es pues una percepción sensorial directa e inmediata por un tercero de la comisión de un delito” (Tejada, 2016, p. 53).

“Es conocido como atribución del delito e inmediata del tercero de la comisión del delito o bien en parte de la fase de la ejecución del mismo, hasta lograr su aprehensión. En caso de consumación del delito es indispensable una conexión material: huella, instrumento, entre otros, entre la comisión del ilícito y el sujeto vinculante al hecho delictivo” (San Martín, 2016, p. 14).

“En resumen para una detención flagrante se requiere la existencia de percepción sensorial directa e inmediata del tercero de la comisión del hecho delictivo o bien en parte de la fase de ejecución del iter criminis, hasta lograrse su aprehensión. En caso que el delito ya se haya consumado se requiere que de forma evidente se dé una conexión material, directa e inmediata entre la comisión del suceso y el sujeto vinculado con el hecho delictivo” (Tejada, 2016, p. 53).

- **Periculum Libertatis:**

“Se refiere a que, ante el descubrimiento, urge la aprehensión del sujeto, para hacer cesar el delito, frustrar la huida, evitar el ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del hecho (ARAYA), esto es, la obtención de pruebas que desaparecerán si se acudiera a solucionar la autorización judicial” (San Martín, 2016, pp. 14-15).

“Este concepto parte de la necesidad de la intervención. Ante el descubrimiento de la delincuencia in fraganti es posible encontrarnos ante una urgencia de aprehensión del responsable, a efectos de hacer cesar la acción delictiva, frustrar la huida, evitar el ocultamiento o impunidad y el descubrimiento del hecho” (Tejada, 2016, p. 53).

“Siendo la detención flagrante una excepción constitucional al principio pro libertates se requiere para su aplicación que se funde en los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad. Es decir, debe ser realizada para alcanzar el objetivo constitucionalmente establecido (evitar que prosiga el hecho delictivo y someter al justiciable al proceso), tratarse de una medida necesaria (solo en los casos señalados), ejecutarse por los medios adecuados y menos gravosos (no medios excesivos o innecesarios) y por el tiempo estrictamente necesario (entrega a la autoridad pública de inmediato)” (Tejada, 2016, pp. 53-54).

2.2.8.5. Requisitos (características) para su configuración

- **Inmediatez Temporal**

“Inmediatez temporal, consiste en que la persona procesada este cometiendo el hecho, o que se haya cometido momentos antes; inmediatez personal es decir que el procesado se encuentre en el lugar de los hechos, en situación tal que se infiera su participación en el mismo; necesidad urgente, de modo que los servidores públicos o simples ciudadanos, por las circunstancias del caso concreto, estén el deber de intervenir inmediatamente, para poner término en la situación existente, impidiendo la propagación del mal que el hecho demuestra y conseguir la aprehensión del ciudadano presuntamente infractor” (Gomez, 2016, pp. 5-6).

“Aquí lo importante es la circunstancia de que el espacio de tiempo que media entre el hecho punible y su descubrimiento sea corto (*post factum immediato*). Este lapso es fundamental para determinar si estamos frente a un delito en carácter flagrante, ya que transcurrido un tiempo razonable, la única posibilidad de detención sería bajo orden judicial, por tanto, quién descubra un hecho con estos caracteres, (sobre todo las fuerzas policiales), debe informar al fiscal a cargo, para que este despache las correspondientes ordenes de investigar” (Reyes, 2004, pp. 47-48).

- **Inmediatez Personal**

“Inmediatez personal, es aquella en la que el procesado se encuentre en el lugar de los hechos, en situación tal que se infiera su participación en el mismo (...) debemos establecer la participación del sospechoso en el cometimiento del delito, es decir cuando el procesado se encuentre en el lugar de los hechos, o a su vez, exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la comisión hasta la aprehensión. Asimismo se determina la inmediatez personal cuando el sospechoso se le encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos al delito recién cometido” (Gómez, 2016, p. 14).

“[Por ello] es necesario que al momento de sorprenderse al hechor en el lugar de comisión del delito o en sus inmediaciones una relación tal con el objeto o instrumentos utilizados que evidencien su participación en el mismo (...) esto significa que el detenido puede ser objeto de persecución, y como consecuencia de ésta, ser aprehendido, pero la misma debe iniciarse inmediatamente después del descubrimiento de la comisión del delito, en caso contrario, la única actuación válida es denunciar el hecho a la autoridad, pues ya no sería posible una detención, y en caso de hacerlo esta debería ser declarada como ilegal” (Reyes, 2004, pp. 49-50).

- **Necesidad Urgente**

“La necesidad urgente se da ante un conocimiento fundado, directo e inmediato del delito, por el cual, resulta urgente la intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones y ponga término al delito. Esto se da ante la imposibilidad de obtener una orden judicial previa. La característica propia de la inmediatez exige la intervención policial en el delito” (Arcibia, García, Gonzales, Mori, Mosqueira, y Valdivia, 2011, p. 30).

“Necesidad Urgente de tal modo que la policía, por las circunstancias concurrentes en el caso concreto, se vea impulsada a intervenir inmediatamente con el doble fin de poner término a la situación existente impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que la infracción penal acarrea, y de conseguir la detención de autor de los hechos” (Cordero, 2010, p. 9).

“Se verifica la concurrencia del requisito de la urgencia de la detención; se trata de evaluar las razones de necesidad concreta *para* detener al agente; se justificaría privar de libertad a una persona *para* evitar la realización –en devenir- de un riesgo concreto; ese es el fundamento de la necesidad y urgencia de la detención del agente. Debe evitarse el artilugio de utilizar el término urgencia, pero desprovisto de contenido concreto” (Celis, 2016, p. 45).

2.2.8.6. Detención en flagrancia

“Podríamos definir la detención en flagrancia, como el acto por el cual una persona sin existir orden de juez, priva provisionalmente de la libertad a otra, a quien sorprende en el momento mismo en que está cometiendo un delito o bien cuando se halla en un estado declarado equivalente por la ley” (Hernandez J. , 2013, p. 1773).

“La detención por flagrancia es una figura de corte eficientista dentro del derecho procesal penal, que constituye una excepción al principio que limita la afectación de la libertad individual de una persona al pronunciamiento de un tribunal competente (...). Su fundamento radica en el favorecimiento de la persecución e investigación de un delito con proyecciones exitosas, por lo que el ordenamiento permite a los policías y a cualquier particular sustituir a la autoridad jurisdiccional y les habilita en determinados supuestos para privar de la libertad a una persona” (Vitar, s.f, p. 1).

“La detención por delito flagrante es aquella que el sujeto activo del delito es aprehendido justo en el momento mismo de la comisión del acto delictivo, para lo cual no necesariamente debe hacerse por un policía y con orden judicial, sino por cualquier ciudadano para posteriormente ponerle a disposición de las autoridades competentes. En este aspecto es importante conocer que la flagrancia es un delito de naturaleza procesal que se origina desde el comienzo de la civilización, y que ha venido evolucionando con el paso del tiempo” (Gomez, 2016, p. 1).

“Esto puede entenderse en el sentido de que la detención en flagrancia, contemplada como un deber de colaboración con la justicia que es a cargo de todos, básicamente atiende a dos criterios: de un lado, a los sujetos facultados para detener y, del otro, al momento en que se realiza la detención” (Hernández J, 2013, p. 1773).

“El particular que proceda a la detención, deberá poner a disposición de la autoridad que se señala en el articulado al detenido inmediatamente, lo que significa en su sentido literal a la brevedad posible, situación que juzgará la autoridad judicial en la audiencia de control de la detención, so pena de no cumplir con esta disposición declarar que la misma medida cautelar no se ajustó a la constitución ni a la ley que autoriza la detención en flagrancia, trayendo consecuencias jurídicas al particular que la llevó a cabo” (Gomez, 2016, pp. 44-45).

“En este sentido, en nuestro ordenamiento jurídico se han previsto taxativamente (a nivel constitucional e infra constitucional) los casos en que procede restringir el derecho a la libertad. Así se tiene que conforme al artículo 2° inciso 24, literal f de la Constitución Política, resulta legítimo detener a una persona en dos supuestos: cuando se trate de una detención por mandato judicial escrito y debidamente motivado y en caso de delito flagrante por las autoridades policiales” (Tejada, 2016, p. 51).

2.2.8.7. Afectación de derechos fundamentales mediante la aplicación de la flagrancia

“El derecho a ser juzgado en un plazo razonable, las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa son derechos internacionalmente reconocidos y que a su vez son considerados parte de los Derechos Humanos a los cuales tiene acceso todo inculpado (...) Asimismo es la modificación en el Nuevo Código Procesal Penal (2004) lo que ingresa al proceso inmediato por flagrancia y en donde podemos visualizar los plazos tan exageradamente cortos e irracionales. Tal cual es que el fiscal tenga solo 24 horas para denuncia” (Carrasco, 2016, p. 75).

“Efectivamente en el proceso inmediato por flagrancia no se respetan los requisitos que debe tener toda acusación, transgrediendo así el principio acusatorio, asimismo se da cuenta que esta vulneración es consecuencia de la excesiva celeridad existente en este proceso, la cual deviene de la inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable” (Carrasco, 2016, p. 78).

“Al tener el proceso inmediato como características fundamentales, la simplicidad de los actos de investigación y su contundencia probatoria, convirtiéndolo así en un procedimiento rápido, hace que se aparten, por ir en contra de su propia naturaleza, los hechos considerados como complejos y cuando existen motivos razonables para dudar de la legalidad o suficiencia de los actos de investigación recabados” (Espinoza, 2016, p. 187).

“La detención en flagrancia no solo será determinante en la procedencia del inicio del proceso inmediato, sino tendrá repercusión en la eventual exclusión de información probatoria obtenida con una detención arbitraria; en efecto, si se determina que la detención fue arbitraria y que se afectó el contenido esencial de la libertad del imputado, entonces, toda información obtenida a propósito de esa detención arbitraria tendrá –ulteriormente- que ser excluida por configurar prueba prohibida” (Celis, 2016, p. 47).

“Conviene advertir desde ya, que hay críticas al proceso inmediato que no le son atribuibles al proceso per se; sino más bien a las malas praxis de los operadores jurídicos. Sin embargo se ha criticado al proceso inmediato lo siguiente: (a) Proceso mediático populista: La existencia del proceso nuevo y expedito ha conllevado un mayor interés público y presencia mediática (...) (b) Inversión del estado de inocencia criminal: La determinación de culpabilidad sólo es alcanzada a través de una sentencia penal firme, cualquier otra visión resulta contraria a la ley y los Tratados Internacionales” (Araya, 2016, p. 9).

2.2.9. La detención en flagrancia y el proceso inmediato

“La flagrancia delictiva, habilita la intervención y detención policial, precisamente por la urgencia. La necesidad de la detención policial tiene su ratio esencial en la urgencia, que del caso concreto se desprenda. En efecto, el requisito de la urgencia atiende a razones concretas, de prevención, de interrupción del iter criminal, de evitación de mayor lesión al bien jurídico, o carácter irreparable de éste, riesgo de fuga, de no identificación, etc.; por tanto, este requisito de la urgencia no está presente en casos en que la persona esté identificada, no exista riesgo de fuga, carácter reparable del bien, etc.” (Celis, 2016, p. 45).

“Lo que convierte un proceso común en uno inmediato es la evidencia delictiva. La consecuencia inmediata de esta conversión es la simplificación de sus trámites y el aceleramiento procesal, de tal forma que la subfase de diligencias preliminares se convierte en el aspecto central, eliminándose la etapa intermedia. De esta forma, la celeridad de este proceso se debe al recorte de actividad procesal por la notoriedad y evidencia objetiva de los elementos de cargo. Este proceso no encuentra su fundamento en la idea del consenso como lo hace el principio de oportunidad, por ejemplo, sino en la evidencia delictiva” (Espinoza, 2016, p. 184).

“Este proceso especial supone la eliminación de la etapa intermedia del proceso penal, para pasar directamente de la investigación preliminar a la etapa del juicio oral. La razón fundamental para que el fiscal presente este requerimiento ante el juez de la investigación preparatoria es que considera que hay suficientes elementos de convicción para creer que el imputado es el responsable del hecho delictivo” (De la Jara, Mujica, y Ramirez, 2009, p. 53).

“De esta forma, este proceso se sustenta, en primer lugar, en la noción de *simplificación procesal*, cuyo propósito consiste en eliminar o reducir etapas procesales y aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia rápida, sin depreciar su efectividad; y, en segundo lugar, en el

reconocimiento de que la sociedad requiere de una decisión rápida, a partir de la noción de *evidencia delictiva* o prueba evidente, lo que conlleva precisamente a la reducción de etapas procesales” (Espinoza, 2016, p. 184).

“Por tanto, dichos mecanismos constituyen en conjunto uno de los pilares principales del Código Procesal Penal, pues permite simplificar, economizar y descongestionar el Sistema de Justicia Penal, logrando resultados de mayor eficacia en la respuesta penal frente a los punibles” (Meneses G, Meneses Ochoa, 2016, p. 269)

“Dentro de estos, el proceso inmediato constituye uno de los principales mecanismos de simplificación, el mismo que tiene sus bases en el ordenamiento italiano de 1988 que regula el *giudizio immediato* (443° a 458°), donde se prescinde de la etapa intermedia, quedando expedito los hechos para el juzgamiento, en especial para presupuestos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención de prueba evidente y suficiente para atribuir responsabilidad al investigado” (Meneses G, Meneses Ochoa, 2016, p. 269)

“Su fundamento de estos mecanismos radica en la necesidad de simplificar el procedimiento penal. Haciéndolo más sencillo, rápido y eficiente, para reducir el tiempo en que se brinda una respuesta penal, combatir la morosidad procesal y descongestionar el número de casos a la espera de juicio. En la legislación comparada, conocidos son el procedimiento acelerado (Alemania), sentencia de conformidad (España), procedimiento simplificado (Francia), *giudizio direttissimo* y *giudizio immediato* (Italia), proceso sumarísimo (Portugal), *summary offences*, *indictable offences* o *felonies*; *hybrid* o *dual procedure offences* (Países del common law), procedimiento simplificado (Chile y Ecuador), procedimiento extraordinario (Uruguay), entre otros países” (Meneses G, Meneses Ochoa, 2016, p. 269)

“La importancia y utilidad de la aplicación del proceso inmediato radica en su grado de intervención y naturaleza – sobre aquellos delitos que configuran flagrancia delictiva – ofreciendo un tratamiento procedimental simplificado y eficaz frente al delito flagrante (tránsito directo de las diligencias preliminares a la etapa de juzgamiento), a diferencia del proceso común donde el caso deberá transitar por todas las etapas procesales (diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento), (Meneses G, Meneses Ochoa, 2016, p. 271)

“Este factor cualitativo del proceso inmediato justifica su vigencia, así como el restablecimiento de su aplicación a nivel nacional, resultando necesario que el Estado incentive su aplicación a través de las modificaciones y precisiones normativas pertinentes que la hagan más operativa y predecible. (Meneses G, Meneses Ochoa, 2016, p. 271)

2.2.10. Procedimiento

2.2.10.1. Primera etapa

- **Investigación preparatoria: diligencias preliminares**

“La investigación preparatoria está a cargo del Ministerio Público, razón por la cual el proceso inmediato sólo es requerido por el fiscal. Dicho pedido se formula por escrito al juez de la investigación preparatoria, sin perjuicio de solicitar también las medidas de coerción correspondientes —personal o real”.

“El Ministerio Público, como titular del ejercicio público de la acción penal (persecutor del delito), conduce la Investigación Preliminar (Preparatoria); desde sus inicios, y ante la comisión de un delito y de darse los supuestos de suficiencia probatoria, (que ponga de manifiesto la existencia de un delito y la vinculación con el imputado), la flagrancia delictiva, o la confesión del imputado, (aparejada esta

de elementos de convicción), y con el objeto de evitar que la investigación se convierta en un procedimiento burocrático rutinario e innecesario cuando en la práctica están dadas las condiciones para la sentencia” (Mendoza G. , 2016, p. 88).

“Este proceso especial supone la eliminación de la etapa intermedia del proceso penal, para pasar directamente de la investigación preliminar a la etapa juicio oral. La razón fundamental para que el fiscal presente este requerimiento ante el juez de la investigación preparatoria es que considera que hay suficientes elementos de convicción para creer que el imputado es el responsable del hecho delictivo” (Tejada, 2016, p. 57).

“Así a nivel de diligencias preliminares, bastará que al imputado se le haga "conocer los cargos formulados en su contra" (art. 71° numeral 2 literal a del CPP); formalizada la investigación preparatoria se requiere que la disposición contenga "los hechos y la tipificación específica correspondiente", incluso con la posibilidad de consignar tipificaciones alternativas (art. 336° numeral 2 literal b) del CPP); finalmente en el requerimiento acusatorio, se demanda "La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores" (art. 349° numeral 1 literal b) del CPP)” (Guillermo, 2016, p. 77).

“[Finalmente] el requerimiento se presenta luego de culminar las diligencias preliminares; es decir que la incoación del mismo por parte del Ministerio Público puede hacerse una vez que se haya concluido con las diligencias preliminares establecidas en la disposición fiscal, y que se pueda sostener una imputación necesaria” (Mendoza G. , 2016, p. 19).

- **Incoación del proceso inmediato**

“La incoación del proceso inmediato se promueve a pedido de la Fiscalía ante el Juez de la investigación preparatoria; luego de emitida la acusación, se llevará a cabo el juicio en una audiencia única que tiene dos fases: instalación de la audiencia, en la que hay control de la acusación, encargada al juez de juzgado (no hay que soslayar que es un proceso especial); luego viene el desarrollo del juicio oral propiamente dicho” (Salas, 2016, p. 38).

“Existen dos momentos procesales definidos para que el Ministerio Público plantee la incoación del proceso inmediato. El primero, conforme lo establece el artículo 447° numeral 1 del NCPP, al término del plazo de la detención policial de oficio o de la preliminar, hasta 24 horas en delitos comunes y hasta 15 días en delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas (artículo 264° NCPP), el fiscal debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato; este momento está vinculado al delito flagrante (art. 446°, literal a del apartado 1). (Espinoza, 2016, p. 189).

El segundo momento es cuando el fiscal presenta su solicitud de incoación luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los 30 días de formalizada la investigación preparatoria; este momento está relacionado con el delito confeso y el delito evidente (art. 446° literales b) y c) del apartado 1)” (Espinoza, 2016, p. 189).

“Planteado el requerimiento fiscal de incoación de proceso inmediato, cuya oportunidad, es al término del plazo de detención policial de oficio o de la primera - hasta 24 horas en delitos comunes y hasta 15 días en delitos exceptuados -,salvo los supuestos de confesión y de evidencia delictiva, en que la oportunidad procesal para presentar el requerimiento se extiende al término de las diligencias preliminares y hasta antes de 30 días de iniciada la investigación preparatoria formalizada, el juez de la investigación preparatoria debe señalar la denominada *audiencia única de incoación del*

proceso inmediato dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento fiscal”.

2.2.10.2. Segunda etapa

- **La audiencia y el auto de juez de investigación preparatoria**

“El art. 447 numeral 2 estipula que el fiscal puede requerir la imposición de una medida de coerción, mientras que el art. 447 numeral 3 dice que las partes pueden instar la aplicación del principio de oportunidad, de un acuerdo reparatorio o de la terminación anticipada, según corresponda. Claro que si admite y estima alguna de las solicitudes señaladas anteriormente, ya no será necesario pronunciarse respecto a la incoación del proceso inmediato, pues estas tienden a resolver la causa bajo modalidades propias, en las que el principio del consenso tiene primacía” (Espinoza, 2016, p. 190).

“En la etapa de incoación del proceso inmediato, el juez de la investigación preparatoria tiene la posibilidad de acceder al pedido y de aplicación el principio de oportunidad o la terminación anticipada, es decir, tiene opciones para manejar las formas de culminación adelantada del encausamiento penal; si el juez considera que se cumple los requisitos para instaurar el proceso inmediato, devolverá la causa al fiscal para que emita acusación (que ha de ser una formulación solvente), y con ella el juez de la investigación preparatoria remitirá la causa al juez penal preparatorio remitirá la causa al juez penal competente en el día con el objeto de que se inicie la etapa final del juzgamiento” (Salas, 2016, p. 38).

“Audiencia Única de Incoación de Proceso Inmediato: En esta audiencia el Juez de la Investigación Preparatoria, se pronunciará, previo debate y contradictorio ante las siguientes incidencias: a) sobre la Procedencia de alguna medida coercitiva (Real o Personal) requerida por el Fiscal; b. Sobre la Procedencia del Principio de Oportunidad, Acuerdo Reparatorio o c. Sobre la Procedencia de la Incoación del Proceso Inmediato” (Tejada, 2016, p. 60).

“El auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciado, de modo impostergable, en la misma audiencia de incoación, siendo que la resolución es apelable con efecto devolutivo, al tratarse de un auto. Para este caso, lo esencial, dada la intención de la norma, es el efecto no suspensivo de la apelación (art. 447 numeral 5). Si el juez dicta el auto oral de aprobación de la incoación del proceso inmediato, el fiscal tiene un plazo de 24 horas, bajo responsabilidad, para formular acusación (art. 447 numeral 6). Recibido el requerimiento fiscal, el juez de la investigación preparatoria, en el día, lo remite al juez penal competente para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio. Frente al auto que rechaza la incoación del proceso inmediato, el fiscal dicta la disposición que corresponda o la formalización de la investigación preparatoria” (Espinoza, 2016, pp. 190-191).

2.2.10.3. Tercera etapa

- **Juzgamiento o juicio oral**

“Recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez penal competente realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día. En todo caso, su realización no debe exceder las 72 horas desde la recepción, bajo responsabilidad funcional (art. 448° numeral 1 del NCPP)” (Espinoza, 2016, p. 191).

“Se efectúa el debate, se evacua la prueba, se escuchan conclusiones y se dicta la sentencia. La sentencia puede ser dictada oralmente (eventualmente dispondrá sobre la prisión preventiva) En caso de impugnación se agregará al acta de debate, una transcripción fiel de los hechos probados y de la fundamentación intelectual del fallo” (Tejada, 2016, p. 67).

“La realización del enjuiciamiento inmediato tiene, en puridad, dos periodos definidos pero sin solución de continuidad, que deben realizar, inmediata y oralmente de ahí el acuerdo en la denominación de audiencia *únicamente*. El primer periodo está destinado a que el juez penal pueda sanear el proceso y dictar sucesivamente, sin suspensión

alguna, los autos de enjuiciamiento y de citación a juicio. El segundo periodo está circunscrito al juicio propiamente dicho, informando siempre por el principio de aceleramiento procesal, que es el límite de aplicación supletoria de las reglas del proceso común (frase final del apartado 4 del artículo 448 del NCPP)” (San Martín, 2016, pp. 25-26).

“El único medio impugnatorio que admite el proceso inmediato es el recurso de apelación, En cuyo caso se trata de una apelación con efecto devolutivo, al trasladar la competencia funcional del juez *A quo* al juez *A quem*, conforme lo establece el art. 447.5 NCPP. Ahora, de acuerdo a lo señalado en el art. 418.1 NCPP, al verificarse que se trata de un auto que no pone fin al procedimiento penal, sea que acepte o rechace la incoación del proceso inmediato, no tiene efecto suspensivo” (Espinoza, 2016, p. 192).

2.2.10.4. Casos emblemáticos con éste proceso

- **Caso SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER**

El día 17 de diciembre del 2015, “la ciudadana SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER infringió la norma penal de violencia y resistencia a la autoridad, figura penal agravada, al resistirse a que se le imponga una papeleta de infracción de tránsito, bajando de su vehículo y agrediendo física y verbalmente al efectivo policial. Estos hechos fueron tramitados al amparo del D. Leg. 1194 que regula el PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA.

Culminado el proceso, la ciudadana fue sentenciada a 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, como autora del delito de violencia y resistencia a la autoridad, en su figura agravada. Se trata de una pena consensuada, esto es, acordada entre el Ministerio Público y la defensa técnica de la acusada”.

Como consecuencia de este fallo judicial diversas voces se han hecho escuchar –entre ellos, “al actual Decano del Colegio de Abogados de Lima-, señalando que la pena resulta desproporcional entre la conducta misma, y la pena impuesta. Sin lugar a dudas, el fallo judicial –y el caso en sí– generarán –como así ha ocurrido– polémica, incluso algunos letrados han señalado que la conducta resultaba atípica, y por ende no era pasible de sanción penal”.

En esta oportunidad no vamos a analizar la pena impuesta –podríamos hacerlo en un próximo análisis-, sino que nos avocaremos a analizar lo actuado dentro de la audiencia, verificando el rol de la defensa técnica. Para un mejor análisis, se acompaña a este comentario, el vídeo íntegro de la audiencia para que pueda ser analizado al detalle, y puedan consignar sus opiniones técnicas. Los invito a ser minuciosos. Es probable que lleguen a conclusiones insospechadas, e incluso podrían cuestionar el hecho de si ciudadana SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER haya tenido una eficaz defensa técnica. Si ello fuese así, ¿Es posible cuestionar un fallo judicial si es que la ciudadana estuvo en desprotección técnica legal?

Consigno algunos datos que puedan servir para responder la pregunta:

1º De la lectura del Art. 447º del CPP modificado por el D. Leg. N° 1194 (vigente desde el 01DIC2015), se desprende que lo que el Juez debe definir en audiencia, en primer lugar, es si concurren los presupuestos de Flagrancia Delictiva. Para ello debe existir un requerimiento fiscal al respecto, y discutirse técnicamente si nos encontramos en condiciones de llevar adelante, o no, un proceso inmediato por flagrancia delictiva. Esta discusión -técnica- resulta importante para los efectos de la defensa, en tanto si bien los supuestos de flagrancia aparecen descritos en el Art. 259º del Código Procesal penal, no toda detención importa encontrarnos en flagrancia, tanto más si como aduce la defensa de la investigada, existen testigos que evidencian que el efectivo policial demoró aproximadamente media hora para imponerle la papeleta, pudiendo ello generar otros aspectos técnicos de defensa a su favor. Ahora bien, el mismo Art. 447º inciso 5 CPP señala que “el auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato debe ser pronunciada, de modo impostergable, en la misma Audiencia de Incoación. LA RESOLUCIÓN ES APELABLE CON EFECTO DEVOLUTIVO”.

Recordemos que el efecto devolutivo produce 3 efectos: a) Hace cesar los poderes del A Quo, es decir, del juez penal que lleva a cabo la audiencia, b) Paralelamente, el ad quem (Tribunal que revisará la resolución) asume el conocimiento de la causa para re examinar lo resuelto; y, c) la resolución queda en un estado de interinidad.

Si ello es así, no podríamos descartar el recurso de apelación como una posibilidad dentro de una estrategia de defensa. En el caso materia de análisis, la defensa técnica de SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER solicitó que se deje constancia de que debe tramitarse el procedimiento como un proceso ordinario, y no como proceso inmediato. Sin embargo, llama mi atención el hecho que esta observación no la canalizara a través de un recurso impugnatorio, llegando a señalar que cualquier decisión del Juzgado no iba a ser impugnada, pretendiendo sí que su dicho quede como "una observación". El Juez, siendo uno de garantías, procedió a correr traslado de dicho pedido a las partes. Finalmente, luego del debate, el juez decidió que lo que se va a debatir en audiencia son los elementos de convicción respecto a los supuestos de flagrancia, determinando si se ha respetado el derecho de defensa, y los derechos fundamentales de la investigada, pues de suceder lo contrario, desaprobaría el proceso inmediato para tramitarlo a través del proceso común. La **resolución N° 2 DECLARÓ IMPROCEDENTE** lo solicitado por la defensa técnica y ordenó que se siga el proceso bajo las reglas del D. Leg. N° 1194, esto es, como un proceso inmediato. Pese a esta decisión, la defensa técnica manifestó no estar conforme, pero como había mantenido su palabra, sólo dejaba constancia de este hecho que tendría que ser revisada en el Parlamento, pues se cometen arbitrariedades.

Queda claro que "una observación" no constituye ningún recurso impugnatorio, y a la vez evidencia una contradicción: ¿cómo es posible estar en desacuerdo (que consistiría en dejar la observación), pero a su vez quedarse conforme con la decisión judicial sin impugnarla?.

2º Una vez decidido que se prosiga con el trámite del proceso inmediato, lo que se discutió jurídicamente es si se daban los supuestos de flagrancia. Al finalizar el debate jurídico, el Juez Penal, mediante **Resolución N° 3**, decidió que sí concurrían los supuestos de flagrancia. Llama la atención, sin embargo, que el Juzgado no corriera traslado a las partes para que muestren su conformidad o disconformidad. El Juez se limitó a consultar a las partes respecto a si existía una salida alternativa de solución, pero no preguntó a las partes si se encontraban conformes con la Resolución N° 3. Advierto en este

extremo, una afección al Derecho de defensa, dado que si bien no se impugnó la resolución N° 2 por parte de la defensa técnica, ello no significaba que la Resolución N° 3 no podría ser apelada. En todo caso, más allá de si el Juzgado preguntase a las partes procesales si se encontraban conformes o no con la resolución N° 3, queda claro que la defensa técnica tampoco la impugnó.

Así, con estas dos resoluciones no apeladas es posible preguntarse: ¿Realmente ejerció SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER su derecho a la defensa? La defensa no es eminentemente formalista, tiene que ser efectiva.

3º Un nuevo dato rescatable e importante para analizar lo sucedido en la audiencia, es cuando se somete a debate si era necesaria la diligencia de visualización del video que una de las efectivos policiales había grabado con su celular. La defensa técnica señaló que no era necesaria la diligencia pues su patrocinada había reconocido su responsabilidad. La Fiscalía inicialmente estuvo de acuerdo. Quien no estuvo de acuerdo y solicitó la visualización de este medio probatorio fue la Procuraduría, sin embargo el Juez Penal resolvió en el sentido que ya se había visualizado en etapa de investigación preliminar, existían actas de ello y no había observaciones de ninguna de las partes. Pese a esta decisión, el abogado de la Procuraduría persistió en que se visualice el video, pues era importante para su defensa, verificar la conducta de la acusada: extrañamente el juez penal aceptó llevar a cabo la diligencia, generando una rápida reacción de la defensa técnica de la acusada, quien indicó al magistrado que el Juzgado ya había resuelto, y que si la Procuraduría no estaba de acuerdo, tenía que impugnar. El Juez reconoció que estaba cometiendo un error (se evidencia QUE NO ERA EL PRIMER ERROR en esta audiencia), por lo que procedió a emitir la resolución denegando la visualización. Si se analiza en detalle esta parte de la audiencia, se podrá advertir que el Juez nuevamente no es claro en correr traslado a las partes para que señalen su conformidad o disconformidad con esta decisión. ¿Se encontraba Silvana Buscaglia Zapler realmente ante un Juez que respete sus Garantías?

4º Para terminar el análisis respecto a la diligencia de visualización, no podemos aventurarnos a señalar si técnicamente convenía o no la decisión de no visualizar las imágenes, en tanto el abogado no estuvo en las primeras diligencias donde efectivamente se llegó a visualizar las imágenes, y se levantaron las actas respectivas. Pese a ello, tratándose de un análisis técnico de lo sucedido en audiencia, se hace necesario precisar lo siguiente:

Que una posibilidad de actuación como medio probatorio, es la revisión en la carpeta fiscal si el celular donde se captaron las imágenes el día de los hechos, fue sometido al proceso de CADENA DE CUSTODIA, lo que implica que el celular debió haber sido lacrado, firmando las partes intervinientes el acta de lacrado.

Que, una vez establecida la cadena de custodia, existe una persona encargada de la cadena de custodia del celular.

Que para proceder a la visualización del celular, se debió utilizar instrumental que otorgue seguridad técnica, esto es, a través de equipos que tengan programas AUTÉNTICOS (no softwares “piratas”), y otorguen seguridad a las diligencias, como ocurre con los equipos que utiliza la Policía Especializada de Alta Tecnología, o la DIRANDRO. No es de recibo ni admisible el revisar el celular en la computadora de una comisaría, o de la misma Fiscalía, si ésta no está protegida por el software especial que impida por defecto el traspaso de información de un equipo a otro.

Que se debe buscar obtener registros de la última vez que el celular se reportó como utilizado. También resulta importante verificar la fecha de creación del archivo a visualizar, entre otros detalles que no es del caso ahondar por ahora.

Así las cosas: ¿Era necesario visualizar el video aportado como elemento probatorio? A mi modesto entender, sí era necesario, no por las imágenes mismas, sino por los datos a obtener y que he detallado precedentemente.

5º El inciso 6 del Art. 447º del CPP que regula la Audiencia Única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva, señala que

pronunciada la decisión que dispone la Incoación del proceso inmediato, el Fiscal procede a formular acusación dentro del plazo de 24 horas, bajo responsabilidad. *“Recibido el requerimiento fiscal, el Juez de la Investigación Preparatoria, EN EL DÍA lo remite al Juez Penal competente, para que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 448”*. De la lectura de la norma se advierte que si SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER no obtenía un buen acuerdo con la Fiscalía, pudo haber concurrir a juicio, presentando los testigos que la defensa técnica había individualizado, y que presentó a través de una DECLARACIÓN JURADA. Aquí es necesario reconocer que no es lo mismo estar en ese preciso momento en la audiencia, que analizarla después, “en frío”, y luego de haberse llevado a cabo la audiencia. Pese a ello, tratándose de un caso que ha suscitado el interés público por lo mediático del caso, su análisis técnico-académico, bien puede servir de base para obtener otros comentarios técnicos adicionales.

6º De otro lado, no habiéndose producido ningún debate sobre la pena a imponer, sino un “acuerdo” con la Fiscalía, no queda claro cómo ese “ACUERDO” comprendió aspectos no conciliables, como lo es la “CONFESIÓN SINCERA”, por estar expresamente prohibido a tenor del Art. 161º del CPP. Aun así, en el video puede verse (véase cuando transcurre 1 hora 08 minutos 29 segundos del video), cómo la defensa técnica solicita que el Juez aplique los beneficios de la confesión sincera ejerciendo para ello el control difuso, a pesar de su prohibición normativa (Art. 161º del CPP). Con este último análisis, nuevamente surge la misma pregunta: ¿SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER ejerció en forma real y efectiva su derecho de defensa?

7º Finalmente, ya emitido el fallo judicial, advirtiendo la defensa técnica que el acuerdo por él propuesto y aceptado por la Fiscalía no estaba completo (en la tesis de la defensa técnica: faltaba el extremo de la confesión sincera), sin embargo, escuchado el fallo judicial no impugnó el extremo del fallo condenatorio, limitándose a dejar constancia. Surge entonces otra pregunta vinculada a la actuación procesal: ¿Tiene alguna significación jurídica dejar

constancia de algo que no se impugna? ¿Es posible impugnar una sentencia cuya pena ha sido consensuada? La respuesta a la primera pregunta es que la constancia no tiene efectos de cuestionar o impugnar una decisión jurisdiccional. Respecto a la segunda pregunta, la respuesta es que sí era posible impugnar el fallo porque no se encontraba conforme con el control de legalidad que realizó el Juez penal. Más allá de si la impugnación resulta correcta, el análisis -reitero- se centra en analizar la audiencia para verificar si la ciudadana SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER ejerció un efectivo derecho de defensa.

En el video se aprecia la consejería que le da el letrado a su patrocinada cuando el juez requiere de la acusada una respuesta en el sentido de si se encontraba conforme con lo resuelto en la sentencia condenatoria. Inicialmente SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER señaló **que SE RESERVABA EL DERECHO**. Esta decisión obedece a una asesoría técnica, pues significa que la acusada pide 3 días al juez penal para decidir si impugna o no la sentencia, por lo tanto, es el letrado quien le tiene que haber asesorado en ese sentido. Hasta acá existen 2 posiciones: la del abogado que está conforme con la sentencia, y la de la acusada que quiere pensar si impugna o no. Es en esos momentos en que el juez interviene y le indica al abogado de la acusada, que le informe a su patrocinada que se encontraban en una sentencia con pena consensuada, ante lo cual el abogado vuelve a asesorarla, respondiendo la Sentenciada que está conforme.

Ya finalizando mi análisis, vuelvo a preguntar ¿Hubo un ejercicio efectivo del derecho de Defensa por parte de SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER?

Como se puede evidenciar, el análisis de este caso resulta abundante. No hemos tocado la proporcionalidad de la pena, porque otros letrados y especialistas ya lo han hecho. Reservo mi opinión al respecto e invito a la comunidad jurídica a emitir comentarios, pronunciamientos, todo desde el punto de vista técnico y académico, respecto a este caso, y especialmente, en los temas abordados, dejando constancia que no conozco a la defensa técnica de la ciudadana Buscaglia, ni me une ningún lazo positivo ni negativo con dicha persona. Mi opinión es netamente jurídico – procesal. Sírvanse

enviar sus comentarios y sugerencias para enriquecer el debate jurídico en torno a este caso, que puede repetirse muy pronto, por ser una figura, aparentemente bastante usual. (Canevaro Fernández)

SE PUEDE REVISAR SENTENCIA DEL CASO SILVANA BUSCAGLIA

El constitucionalista Fernando Calle Hayen estimó que es posible anular la sentencia contra Silvana Buscaglia Zapler, quien fuera condenada, al amparo de la Ley de Flagrancia, a más de seis años de cárcel por haber agredido al suboficial de la Policía Nacional Elías Quispe Carbajal, días atrás en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Y es que no ha sido desmentida la versión de que el fallo contra Buscaglia habría sido consensuado entre la Fiscalía, el Poder Judicial, la Procuraduría, y, lo que sería delicado, por confesión anticipada de la condenada, en tanto ella misma habría renunciado al derecho de impugnación, al parecer por indicación de su defensa.

Si esto es así, Calle Hayen afirma que existe jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a la defensa defectuosa o mal asesoramiento técnico.

“La anulación de sentencia se produce solo en aquellos supuestos en que el justiciable se ve impedido de modo injustificado de argumentar, en favor de sus derechos e intereses legítimos, por una mala asesoría técnica”, advirtió el expresidente del Tribunal Constitucional.

“Doctrinariamente no se puede condenar a una persona por un hecho que no ha cometido. Además, tengamos en cuenta que la confesión sincera a la que se han referido en este proceso, para que sea válida y considerada con valor probatorio, conforme al artículo 160 inciso *d* del Nuevo Código Procesal Penal, debe ser ‘sincera y espontánea’. Entonces, habría que preguntarnos si la referida confesión nació de la voluntad de la hoy condenada”, refirió.

PUNTO DE PARTIDA

En el caso Buscaglia Zapler que lo primero que se debe constatar jurídicamente es si los hechos que se suscitaron en el Aeropuerto Jorge Chávez encuadran y constituyen o no las figuras ilícitas por las que se le ha encarcelado.

Ese es el punto de partida de Calle Hayen para encarar en forma justa este episodio en que Buscaglia purga condena de pena privativa de libertad por el supuesto delito contra la administración pública en las modalidades de violencia y resistencia a la autoridad, y violencia contra funcionario público.

“En el marco constitucional-penal lo primero que tiene que hacerse en un proceso, por más corto que sea su desarrollo, como ahora sucede con los de flagrancia, es una correcta tipificación de los hechos que identifiquen con total precisión la tipicidad de determinado ilícito penal; es decir, hacer una adecuada o correcta subsunción”, dice el jurista.

En ese sentido, el exmagistrado del TC sostuvo que para que se consume el delito de resistencia y violencia a la autoridad, se requiere de la preexistencia de una orden impartida por autoridad, bajo apercibimiento de denunciar por el referido delito y dirigido concretamente contra la persona que desobedeció porque se trata de un asunto doloso.

En ese orden de ideas, Calle Hayen sostiene que si empezamos por el artículo 366 del Código Penal, al parecer no se ha presentado un hecho violento para impedir el ejercicio de las funciones del policía agraviado.

¿DELITO O FALTA?

Fernando Calle señala que, de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1194, que regula los casos de flagrancia, el policía encontró flagrantemente que Silvana Buscaglia había estacionado su vehículo, violando las normas de tránsito, situación que no constituye delito, sino una infracción de tránsito o quizás hasta una falta en la medida en que se desarrollaron los hechos.

“Otra cosa es si queremos interpretar y tipificar estos hechos como delito de violencia contra la autoridad, que también tiene sus grados, ya que una cosa es ser violento verbalmente o, como lo que hemos visto, es diferente propinarle un golpe fuerte, o agredirlo con objeto contundente”, señala.

“Peor si fuera con un arma de fuego, como en muchas oportunidades se ha producido y que creo que ha llevado al legislador a sanciones tan severas”, agrega.

El profesor de la PUCP **Heber J. Campos Bernal**, “en su cuenta personal de facebook, ha mostrado su desacuerdo con la pena impuesta a Silvana Buscaglia Zapler, la mujer que días atrás agredió a un policía que la intervino por estacionarse en un espacio que no debía. El profesor PUCP consideró que la pena, si bien ajustada a ley, es desproporcionada. Así también, hizo un llamado a desterrar el *populismo penal* de nuestra práctica jurídica. Estas fueron sus palabras. La pena fue desproporcionada”, «Diversos abogados han sostenido que la pena estuvo bien dada, debido a que los hechos fueron claros y calzaban de manera milimétrica en el tipo penal que se le impuso. A mí, sin embargo, me parece que aun cuando ello es cierto, **la pena fue desproporcionada**. Ya sé que habrán quienes sostengan, sin duda, con buen criterio, que la ley es la ley y que no se pueden hacer distinciones ahí donde ella no los hace, pero también es verdad que una afirmación de este tipo pone el acento en solo una de las dimensiones del derecho: la de su validez formal. Validez material de la ley» “Desde el punto de vista de la validez formal de la pena, pienso, nadie podría objetar la decisión del juez. Su sentencia fue impecable y refleja bastante bien lo que la norma, en su sentido positivo, establece. El punto es que, no obstante ello, **las normas no se pueden (no se deben) analizar sólo desde la dimensión de su validez formal**, sino también, y sobre todo, desde la dimensión de su validez material. Y qué significa ello. Advertir que para que un mandato jurídico sea válido debe ser congruente con los derechos y principios que dotan de sentido al sistema jurídico” (Campos).

El Tribunal constitucional ha desarrollado en diversas sentencias los alcances de la validez material de las normas, así como el de los principios de

proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de sanciones. Del mismo modo, la Corte IDH, cuyos pronunciamientos son de aplicación vinculante en nuestro sistema jurídico, sostiene que la imposición de sanciones – más aún de sanciones penales- constituye la *ultima ratio* del derecho. Ello supone una obligación no sólo a nivel de la regulación de determinadas conductas, sino del análisis de hechos que se ajustan a las normas que devienen de ellas. Así, pues, aun cuando un hecho se ajuste a lo que sostiene una norma, si su aplicación atenta o pone en cuestión dichos principios, lo mínimo que corresponde es un análisis que demuestre porque en dicho caso concreto aquella se impone a estos. Sin duda, se trata de un caso difícil que, debido a lo censurable de la conducta y aptitud de esta señora, ha devenido en un caso fácil cuya resolución y sanción ha tomado apenas dos horas. “El populismo penal: una enfermedad crónica, no se debe perder de vista, finalmente, el daño que le hace al derecho en general y al derecho penal en particular un Parlamento que actúa movido por coyunturas especiales resaltadas (y a veces exageradas) por los medios. **El populismo penal es una enfermedad crónica que debemos eliminar de nuestra práctica jurídica.** Los problemas no se resuelven con normas. El derecho no cambia la realidad. Es más, a veces, en casos como estos, y en otros, incluso, infinitamente más graves, la afectan y empeoran de modo sensible”.

- **Caso Exp. Nº 1318-2000-HC/TC**

“El favorecido le habría vendido la cantidad de un kilo cuatrocientos gramos de pasta básica de cocaína el día treinta de octubre de dos mil, en horas de la tarde, no puede considerarse detención en flagrancia cuando esta medida acontece en una fecha posterior, el día tres de noviembre a las 08 h 00 min. Tampoco cabe justificar la presente detención dentro de la denominada figura de *cuasiflagrancia* tal como lo sostiene la Sala Penal Corporativa de la Corte Superior de Justicia del Santa, consecuentemente se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el proceso común” (Sentencia TC).

- **Caso Exp. N° 07731-2013-PHC/TC**

“Al respecto el Tribunal observa que las autoridades jurisdiccionales no otorgaron una debida tutela en la medida que no ofrecieron las garantías necesarias, a fin de que el derecho de defensa de la recurrente en su calidad de analfabeta y quechua hablante se encuentre plenamente protegido. En opinión del Tribunal, la autoridad judicial debió asignar un intérprete a la favorecida para que pueda comunicarse correctamente y sin limitaciones con el objeto de que pueda ser oída en el proceso; en consecuencia al no otorgársele se vulneró su derecho a la defensa establecido en el numeral 3) del artículo 114º del NCPP” (Sentencia TC).

- **Caso MAXIMILIANO BENITES RODRIGUEZ, Casación N° 842-2016 Sullana**

“En el presente caso, los policías captores no presenciaron la comisión del delito tampoco lo hizo la madre, ni siquiera la tía de la niña. Ambas se limitaron a expresar lo que la niña, luego del suceso, les dijo, cuando ni siquiera el imputado se encontraba en la vivienda de aquella. Lo cierto es que el delito no puede calificarse como flagrante, ni como flagrancia presunta. En consecuencia se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido que es el común” (<https://legis.pe/casacion-482-2016-sullana-declaran-nulo-lo-actuado-proceso-inmediato/>).

- **Caso MIGUEL ANTONIO CORTEZ ORTEGA, Casación N° 692-2016. Lima Norte**

En el presente caso, el imputado no fue reconocido por la agraviada en el momento en que ocurrió el robo. Ella no le vio el rostro. Por eso es que no describió en su denuncia ni en su declaración preliminar, de suerte que llama la atención que recién lo haga en el juicio oral inmediato. La agraviada según expresó apuntó el número de placa y horas más tarde se capturó el vehículo, en el primer registro con resultado negativo y el segundo registro se practicó horas más tarde sin presencia de su abogado con resultado positivo. Y por las circunstancias descritas debió proseguirse la secuela dentro del proceso común, debido a que no concurría la simplicidad procesal o ausencia de complejidad, requisito indispensable para la incoación del proceso inmediato en flagrancia.

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA, OTROS ASPECTOS

3.1. Hipótesis

3.1.1. Hipótesis general

En el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, toda vez que al ser muy corto el plazo, no es razonable y limita que el procesado prepare una defensa adecuada.

3.1.2. Hipótesis específicas

En el proceso inmediato en caso de flagrancia se afecta el derecho al plazo razonable del procesado, toda vez que el corto plazo no permite que el procesado prepare una defensa adecuada.

El proceso inmediato en caso de flagrancia tiene justificación en la necesidad de sancionar los delitos flagrantes y reducir la carga procesal, sin embargo, ello no justifica que se debe afectar los derechos del procesado.

En el proceso inmediato en caso de flagrancia no se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio para garantizar el derecho a la defensa del procesado, toda vez que la acusación que efectúa el fiscal debe cumplir con todos los caracteres de una acusación.

En el proceso inmediato en caso de flagrancia no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, en la medida que el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, pero la defensa requiere un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa.

3.2. Tipo y diseño de investigación

3.2.1. Tipo de investigación

La presente investigación es aplicada, de nivel descriptivo y explicativo, enfoque cualitativo. La presente investigación es aplicada debido a que al finalizar el estudio lo que se ponen son soluciones que servirán para reducir el problema de la presente investigación, se dice que es de nivel descriptivo ya que desde el primer momento describe y así mismo analiza, cuestiona e interpreta la unidad de estudio, en un segundo lugar es explicativa ya que fundamenta la razón del presente objeto de estudio. Es una investigación

cualitativa, debido a que las técnicas y los instrumentos que se emplearán durante el desarrollo de la presente tesis son de investigación cualitativa, no aplicándose así la estadística en el resultado de la investigación.

3.2.2. Diseño de investigación

Carrasco señala que el diseño de la investigación “es el conjunto de estrategias procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar el proceso de investigación.” (Carrasco Díaz, 2008, p. 58).

En tal sentido, el presente proyecto de investigación se encuentra estructurado de acuerdo al diseño no experimental, transversal o transaccional. Es de diseño no experimental debido a que durante la investigación las unidades de estudio no sufren modificaciones provocadas por el investigador, sino que son recolectadas en la naturalidad en la que se encuentra. Se dice que es transversal ya que la recolección de aquellos datos son realizados en un único momento.

3.3. Unidades de análisis

Las unidades de análisis de esta investigación son: 1) Proceso inmediato en caso de flagrancia y 2) El Derecho a la defensa. Los mismos que serán analizadas, criticadas, descritas, cuestionadas y desarrolladas desde diversos puntos de vista.

3.4. Población de estudio

La población de estudio del presente proyecto de investigación se encuentra constituido por expertos en la materia objeto de investigación, en los cuales participarán jueces penales que conocen procesos de flagrancia, docentes especialistas en la materia, abogados especializados en derecho procesal penal y fiscales que interviene en el proceso inmediato en caso de flagrancia.

3.5. Tamaño de la muestra

La muestra representativa de la población de la presente investigación estará conformada por 8 expertos en el tema de investigación, entre ellos se encuentran dos jueces especialistas en materia penal, dos procesalistas en el tema penal (docentes universitarios), dos abogados especialistas en derecho

procesal penal y dos fiscales que interviene en el proceso inmediato en caso de flagrancia.

3.6. Selección de la muestra

Para la selección de la muestra representativa de la población en esta investigación se aplicará el muestreo no probabilístico intencional, de acuerdo a lo que señala Ramírez, el muestreo intencional “Es un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la población limitando la muestra a estos casos. Los elementos se seleccionan bajo el juicio personal del investigador que tiene conocimiento de los elementos poblacionales.” (Ramírez, 2010, p. 274).

Esto implica que a criterio y juicio el investigador seleccionará quienes de los profesionales descritos en el ítem anterior serán los informantes, es decir, entrevistados en el desarrollo de esta investigación, sin embargo, la selección de los mismos será de acuerdo a criterios fundados que permitan la fiabilidad de los resultados del estudio.

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

3.7.1. Técnicas de recolección de datos

- a- **“Análisis de fuentes documentales:** Este tipo de técnica permite poder analizar, la regulación existente con respecto al tema, es decir, el derecho a la defensa y proceso inmediato en casos de flagrancia, esta técnica permitirá analizar jurisprudencias y doctrina sobre el tema de investigación. La información también se podrá recolectar de libros que sean adquiridos de bibliotecas, internet, etc., que sean de utilidad para la investigación”.
- b- **“Entrevista:** Esta técnica permitirá formular preguntas abiertas a profesionales especializados en materia de investigación, con la finalidad de recopilar la información de fuente primario y analizar posteriormente.

La entrevista se encuentra compuesta por preguntas abiertas, formuladas de acuerdo a los objetivos de la investigación”.

- c- **“Análisis de las normas nacionales:** Esta técnica permitirá analizar normas nacionales que regula el proceso inmediato, la flagrancia y el derecho a la defensa”.
- d- **“Análisis del derecho comparado:** Esta técnica de recolección de datos permitirá recopilar las normas extranjeras sobre la flagrancia, proceso inmediato y derecho a la defensa o figuras jurídicas similares para analizar comparativamente”.
- e- **“Análisis de la jurisprudencia Nacional:** Con esta técnica el investigador pudo analizar la jurisprudencia peruana en el tema de proceso inmediato, la flagrancia y el derecho a la defensa”.

3.7.2. Instrumentos de análisis de datos

- a) **Fichas de análisis de fuentes documentales:** “Las ficha de análisis son instrumentos importantes en la investigación, debido a que permiten analizar o procesar información, así como permite la recolección de la información y los datos de una forma ordenada y organizada, precisas, útiles para para la investigación”.
- b) **Guía de preguntas de entrevista:** “Las guías de preguntas de entrevista son de importancia para el investigador, ya que le permitirá cumplir con el objetivo de la entrevista y la formulación de las preguntas que el investigador considere necesarias para lograr los objetivos de la investigación. Para ello el investigador elabora preguntas en forma abierta. Las preguntas son formuladas después de haberse realizado sub preguntas al problema principales y problemas secundarios, teniendo como orientador a la hipótesis de la investigación”.
- c) **Ficha de análisis de normas:** “Este instrumento permite que en la investigación se pueda hacer comparaciones normativas, ya sea de las normas nacionales o extranjeras, la principal importancia de este instrumento es que facilita el análisis ordenado, coherente y detallado de las normas que se toman en consideración”.
- d) **Ficha de análisis de Marco Jurisprudencial:** Con ésta herramienta se realizarán cuadros, los cuales consignara el análisis de resoluciones judiciales que obtengan casos que traten sobre el tema del presente

trabajo “proceso inmediato, la flagrancia y el derecho a la defensa”. Esta ficha contienen la decisión y fundamentos que han sido desarrollado en las resoluciones colocadas en el cuadro, el cual se analizará, así mismo se hará una crítica sobre la resolución y finalmente se realizará una conclusión sobre el contenido de la jurisprudencia.

3.8. Análisis e interpretación de la información

En el desarrollo de esta investigación se analizarán e interpretarán la información recopilada mediante las diversas técnicas e instrumentos de recolección de datos, siendo los siguientes:

Método descriptivo.- “La aplicación de este método consiste en describir las características y propiedades del fenómeno de estudio, esto es, se explica de manera detallada el problema, los patrones de estudio, de manera tal que se pueda ofrecer una idea al respecto. En este caso la descripción que se realiza es referente al derecho de defensa y el proceso inmediato en casos de flagrancia”.

Método analítico.- “Este es un método que consiste en desmembrar en partes la investigación y analizar las partes minuciosamente de tal manera que nos proporcione mayor información de lo que buscamos. Éste método en el presente estudio se realiza cuando analizamos las fuentes documentales, cuando revisamos la literatura y cuando construimos el marco teórico”.

Método comparativo.- “Es un método que busca mediante procedimientos sistemáticos analizar las similitudes y diferencias de dos o más fenómenos de estudio para de ello sacar conclusiones que pueden establecer diferentes postulados para el estudio o mejorar algunos postulados. En la presente investigación se suscita cuando hacemos comparaciones de las definiciones de los diferentes autores, cuando comparamos las normas nacionales, extranjeras entre otras”.

Método crítico.- Este método busca en verificar la exactitud de los textos, libros, revistas, así como también analiza y evalúa la coherencia, la firmeza de aquellos enunciados que la comunidad normalmente acepta como

verdaderos, fiables en su vida normal y gregaria. Este método se utiliza en la metodología mediante la utilización instrumentos de recolección de datos y la revisión de la literatura.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho a la defensa del procesado toda vez que por tratarse de un proceso especial se simplifican algunas etapas del proceso penal común de modo que el desarrollo del proceso se estaría vulnerando ciertos derechos fundamentales del procesado.

Del mismo modo como objetivos específicos se tuvo determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho al plazo razonable del procesado, su justificación, el cumplimiento del principio acusatorio y finalmente determinar el cumplimiento del principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del procesado.

El enfoque de la investigación es cualitativo, de nivel descriptivo – explicativo, de diseño no experimental-transversal y como instrumentos de recolección de datos tuvimos entrevistas, fuentes documentales, análisis de normas nacionales e internacionales y análisis de la jurisprudencia nacional, los métodos de estudio utilizados son; el método descriptivo, analítico, comparativo y crítico.

Así con respecto a los resultados obtenidos Carrasco (2016) señala que “Efectivamente en el proceso inmediato por flagrancia no se respetan los requisitos que debe tener toda acusación, transgrediendo así el principio acusatorio, asimismo se da cuenta que esta vulneración es consecuencia de la excesiva celeridad existente en este proceso, la cual deviene de la inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable” (p. 78).

Bajo esa misma premisa, refrendando dicha afirmación Mendoza (2016) asevera que “El proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo alguno afectan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. No es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados (...) (p. 193).

De las dos citas en mención podemos determinar que el proceso inmediato no garantiza verdaderamente los derechos fundamentales de la persona toda vez que no se respeta el principio acusatorio y consecuente en el desarrollo del proceso se llega a vulnerar derechos como el debido proceso, el derecho de defensa, el plazo razonable, al derecho a probar, entre otros derechos reconocidos por la Constitución.

Por otra parte del estudio de los antecedentes Monge (2010) refiere que todas “las garantías que se brindan a la persona imputada en flagrancia contrasta con las garantías que existen en el proceso ordinario, se comprueba que existe lesión al principio de igualdad, en la medida en que se reducen, echando mana que no son jurídicamente sustentables, una serie de garantías para la persona que resulta acusada de delito flagrante” (Monge, 2010).

Por otra parte Sernaqué (2014) afirma que de los muchos casos resueltos aplicando el proceso inmediato, no se ha llegado a disminuir la carga procesal, siendo prueba de ello que solo representan el 0.017% de total de procesos acabados. (p. 144).

En ese sentido, como podemos inferir de las citas mencionadas las garantías llevados en los procesos inmediatos por casos de flagrancia son distintas a lo que existe en el proceso común, lo cual lesiona el principio acusatorio en la medida que se simplifica el proceso en tiempo sumarásimos. Del mismo modo podemos señalar también que los procesos inmediatos no reducen la carga procesal toda vez que no existe resultados alentadores que cuestionen la lentitud del proceso penal.

Por otro lado, Portocarrero (2015) señala con respecto a los procesos inmediatos en casos de flagrancia que “la finalidad de este proceso especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio Público de formular directamente la acusación y que esta sea aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia” (p. 21).

Bajo esa misma óptica Benites (2010) refiere que se trata pues de que solamente se aplique el proceso inmediato a casos en los que la culpabilidad del imputado es evidente; de manera tal que al no haber duda alguna de la culpabilidad, se puede prescindir de la totalidad de las etapas del proceso (...) (p. 439).

Los dos autores sostienen que la aplicación de los procesos inmediatos tiene por finalidad evitar que los procesos sean dilatorios de tal manera que se prescinda de alguna de las etapas del proceso penal común, pero no señalan su incidencia en la afectación de los derechos fundamentales del imputado toda vez que al ser un proceso especial inmediato, sumarísimo, célere incide directamente a que el sujeto comitente de un delito se vea limitado a ejercer sus derechos de conformidad.

Asimismo en el desarrollo de la investigación nos hemos dado cuenta que la regulación de los procesos inmediatos en el derecho comparado no se distinguen demasiado a la nuestra toda vez que su aplicación es especial, inmediata y sumarísima, salvo algunos aspectos. Algunos países no tienen una regulación especial y regulan los casos de flagrancia de acuerdo a los procedimientos del proceso penal.

Finalmente se espera para futuras investigaciones respecto a este tema un análisis minucioso respecto a los derechos fundamentales que se ven afectados por la aplicación de los procesos inmediatos como es el caso de la flagrancia, utilizar técnica e instrumentos de recolección de datos para buscar información con mayor abundamiento toda vez que la investigación desarrollada tiene una repercusión social y jurídica muy importante.

4.2. Prueba de hipótesis

1.- En el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, toda vez que al ser muy corto el plazo, no es razonable y limita que el procesado prepare una defensa adecuada.

En “hechos fácticos la implementación de este proceso y sus características fueron dictadas a través del Decreto Legislativo N° 1194, justamente por la naturaleza de la celeridad procesal los plazos de este proceso son demasiado cortos, lo cual puede devenir en supuestos en donde se lleguen a afectar derechos fundamentales tales como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a su vez derivados del mismo se puede llegar a vulnerar el derecho al debido proceso, al derecho a la defensa” (Carrasco A. , 2016, p. 1).

El proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo alguno afectan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. No es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados (...) (Mendoza, 2016, p. 193).

2.- En el proceso inmediato en caso de flagrancia se afecta el derecho al plazo razonable del procesado, toda vez que el corto plazo no permite que el procesado prepare una defensa adecuada.

El “Tribunal considera que las juezas emplazadas no han cumplido con su deber de obrar con celeridad en la resolución del proceso penal en el que se le viene procesando al favorecido. En buena cuenta, la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable le es imputable a la Sala Penal emplazada, que no ha actuado con la diligencia debida para resolver el proceso penal mencionado” (EXP. N.º 05350-2009-PHC/TC LIMA).

Teniendo en consideración los plazos reducidos para realizar los actos procesales, puede surgir la crítica respecto a la constitucionalidad del nuevo procedimiento especial que se propone, respecto al tiempo que brinda este procedimiento para preparar una adecuada defensa” (Portocarrero, 2015, p. 2015).

3.- El proceso inmediato en caso de flagrancia tiene justificación en la necesidad de sancionar los delitos flagrantes y reducir la carga procesal, sin embargo, ello no justifica que se debe afectar los derechos del procesado.

“Al tener el proceso inmediato como características fundamentales, la simplicidad de los actos de investigación y su contundencia probatoria, convirtiéndolo así en un procedimiento rápido, hace que se aparten, por ir en contra de su propia naturaleza, los hechos considerados como complejos y cuando existen motivos razonables para dudar de la legalidad o suficiencia de los actos de investigación recabados” (Espinoza, 2016, p. 187).

De igual manera es menester que uno de los fines, tal vez el principal, es que mediante estos procesos se inicie la descarga procesal y sólo entren al sistema de justicia penal aquellos delitos que revistan mayor gravedad social y así lograr que la carga procesal pueda ser una carga manejable para los órganos de justicia criminal. (Mendoza G. , 2016, p. 104).

4.- En el proceso inmediato en caso de flagrancia no se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio para garantizar el derecho a la defensa del procesado, toda vez que la acusación que efectúa el fiscal debe cumplir con todos los caracteres de una acusación.

“Efectivamente en el proceso inmediato por flagrancia no se respetan los requisitos que debe tener toda acusación, transgrediendo así el principio acusatorio, asimismo se da cuenta que esta vulneración es consecuencia de la excesiva celeridad existente en este proceso, la cual deviene de la inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable” (Carrasco, 2016, p. 78).

“Uno y otro advierten que con la implementación del proceso inmediato se estarían vulnerando derechos elementales del procesado, v. gr. el derecho de defensa expresado en el plazo razonable que todo investigado debe tener para preparar su defensa; también se dice que su aplicación no estaría siendo acorde con la *ratio legis* del Decreto Legislativo N° 1194” (Pandía, 2016, p. 119).

5.- En el proceso inmediato en caso de flagrancia no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, en la medida que el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, pero la defensa requiere

un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa.

Se vienen presentando situaciones que van en contra del proceso inmediato y que a su vez afectan el derecho a la defensa del imputado, y es que como el juez cuenta con 48 horas para convocar a audiencia, luego de recibido el requerimiento se convoca a la misma y se confeccionan las cédulas de notificación, sin embargo por la distancia o falta de personal, la notificación se materializa muchas veces a horas previas a la audiencia, situación que da lugar a que el imputado por lo general no concurra a la audiencia haciendo imposibles las salidas alternativas; pero no solo eso, sino que la audiencia se debe llevar a cabo con defensor público ya que el imputado no tiene el suficiente tiempo para elegir a un abogado de su confianza (Tejada, 2016, p. 68).

“La experiencia latinoamericana nos ha mostrado una serie de deficiencias y malas prácticas judiciales en la aplicación de este nuevo sistema de juzgamiento acusatorio garantista: procesos lentos, ineficientes, ineficaces, escriturales, burocráticos, de una alta carga procesal y morosidad judicial. La consecuencia inmediata ha sido la irracionalidad del sistema, positivismo exacerbado, aumento de presos sin condena y de los extremos de las penas, impunidad; en resumen desconfianza ciudadana en el sistema de justicia ocasionada por la percepción de inseguridad ciudadana” (Araya, 2016, p. 7).

4.3. Presentación de resultados

4.3.1. Análisis de Fuente Documental

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Guillermo, 2017, p. 4)	<p>“La realidad demuestra que, en no pocos casos, se presentan factores que no hacen posible que ello ocurra, situación que se agrava en lugares de la zona andina y la Selva, donde las posibilidades de contar <i>en ese acto</i> con un defensor privado, se reduce ostensiblemente, quedando el defensor público como única opción; incluso, en algunas oportunidades ni siquiera con esta opción se cuenta. Por ende, en un escenario en que se ponga en riesgo el ejercicio del derecho de defensa, el juez deberá garantizar el otorgamiento de un plazo razonable para que el nuevo defensor (privado o público) pueda definir la mejor estrategia y defensa del imputado, caso contrario, el ejercicio de tal derecho se tornará en ineficaz” (Guillermo, 2017, p. 4).</p>	<p>No cabe duda que la aplicación de los procesos especiales, tal como lo es el proceso inmediato en caso de flagrancia, no sea tan efectivo, con ello nos referimos a zonas andinas y selváticas que no cabría la posibilidad por parte del imputado de contar con un abogado técnico que pueda defenderlo en el corto proceso en la que se encuentra sumido el procesado, ello a raíz por la naturaleza misma del lugar, la geografía, lejanía entre otros aspectos. Sin lugar a duda dichas limitaciones traería consigo la vulneración de sus derechos como el derecho de defensa y de no contar con el plazo razonable para realizar su descargo. En ese sentido ante tales situaciones, el fiscal debe tener en cuenta en dotarle todas las garantías mínimas al imputado para que esta realice sus descargos correspondientes con elección de un defensor, sea este privado o público.</p>	<p>En conclusión se puede decir que la aplicación de los procesos especiales para su aplicación inmediata en caso de flagrancia no sería tanto eficaz toda vez que si tomamos los factores morfológicos, la lejanía de lugar entre otros aspecto no se abría la posibilidad del imputado de poder ejercer debidamente su derecho de defensa ni el plazo razonable para poder realizar su descargo. En ese sentido, la carencia de un abogado defensor que atienda las inquietudes del imputado podría llevar a entenderse que los actos realizados en el proceso sería ineficaz, esto, como se ha señalado anteriormente a que el imputado se encuentra en desventaja, de carecer del derecho de defensa y el plazo razonable para poder definir, armar su estrategia de defensa.</p>

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Herrera, 2017, p. 6)	<p>El proceso inmediato es especial, permite la simplificación y celeridad en el proceso penal, el fiscal es quien solicita al juez de investigación preparatoria el trámite del mismo en caso se configure un hecho de flagrancia delictiva, la confesión del imputado o la evidencia de la comisión de un delito. Realizada la audiencia, luego de expedido el auto que declara fundada su incoación, el fiscal dentro de las 24 horas formula su requerimiento acusatorio, que es remitido al juez penal unipersonal o colegiado, según la gravedad del delito. Recibido los actuados, se convoca a la audiencia única del juicio inmediato, en la cual se realiza la fase del control de la acusación, se define si corresponde dictar acumulativa y oralmente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, y se desarrolla la fase del juicio oral propiamente dicho.</p>	<p>Si bien es cierto que el proceso inmediato es especial, ya que dentro sus características es la de simplificar y acelerar el proceso penal, ello no supone que la aplicación de las medidas especiales a un imputado se realice sin tomarse en cuenta los derechos que este tiene para defenderse, en mérito de un abogado defensor y el plazo razonable para sustentar su teoría del caso. En ese sentido, como bien sabemos, el fiscal, la persona encargada de solicitar al juez de la investigación para llevar a cabo el trámite debe al menos ser cautelosa en fijarse del imputado si se encuentra en las condiciones necesarias para defenderse, en contrario sensu si no existe defectos al respecto debe llevarse a cabo el proceso de acuerdo a los lineamiento de la ley y la constitución política.</p>	<p>En conclusión el proceso inmediato son especiales toda vez que a diferencia del proceso común, ésta, se caracteriza por ser inmediato, rápido y más simplificado, de modo tal que el imputado evidenciada su comisión de un delito será dispuesta al fiscal, la misma que solicitará la incoación al juez de la investigación preparatoria para continuar con las fases del proceso penal. Pero, cabe al mismo señalar que ello no significa que se vaya a trasgredir algunos derechos fundamentales, tales como el derecho de defensa, el derecho a un plazo razonable, el derecho a ser oído, el derecho a contradecir, etc.</p>

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Portocarrero, 2015, p. 2015)	<p>“Teniendo en consideración los plazos reducidos para realizar los actos procesales, puede surgir la crítica respecto a la constitucionalidad del nuevo procedimiento especial que se propone, respecto al tiempo que brinda este procedimiento para preparar una adecuada defensa”</p>	<p>Uno de los grandes problemas respecto de los procesos especiales es que su aplicación no se ajusta a los procesos comunes conocidos, lo que en cierto modo trae a colación discrepancia con la constitucionalidad de estos tipos de dispositivos en la que se ve disminuido el tiempo en el cual el sujeto atribuido de un delito pueda preparar su estrategia de defensa. Ello es una razón justificable para determinar de cierto modo de que la norma reguladora de los procesos especiales es lesiva a ciertos derechos que toda persona atribuida de un delito tiene y le es reconocida constitucionalmente.</p>	<p>En conclusión se puede decir que los procesos especiales llevado a cabo con respecto a los sujetos o personas atribuidas de delitos, en el cual se ve claramente reducido el tiempo para realizar actos procesales, tales como la de preparar debidamente su estrategia, su teoría del caso, entre otros actos procesales, recayendo de esa manera discusión respecto a su constitucionalidad, ya que de por medio se ven afecto derechos como; el derecho de defensa y el plazo razonable.</p>

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Arcibia, 2011, pp. 57-58)	<p>“Se permite detener por flagrancia a una persona hasta después de veinticuatro (24) horas de cometida el delito. Dicho período de tiempo implícitamente otorga a la autoridad policial por un lado, la realización de actos de investigación para lograr la identificación del presunto autor de delito y por otro, actos de investigación para encontrar los efectos que fueron materia del delito o los instrumentos empleados para cometerlo, que ya no constituye propiamente un supuesto de flagrancia delictual, desnaturalizándola, permitiéndose una detención no sustentada ella, sino en acto de investigación policial, lo cual, puede entenderse como inconstitucional por vulnerarse el espíritu del artículo 2 inciso 24 literal f) de nuestra Constitución”.</p>	<p>Nuestra legislación regula cuatro tipos de flagrancia, entre ellas tenemos: la flagrancia propiamente dicha, la cuasi flagrancia, la flagrancia presunta y la flagrancia diferida. Esta última es la que ha traído a colación un sinnúmero de críticas toda vez que, de acuerdo a este tipo de flagrancia la posibilidad de poder detener a una persona se encuentra entre un rango de 24 horas, desvirtuándose sin lugar a dudas la naturaleza misma de la flagrancia. Esta forma de aplicarse la flagrancia es claramente contradictorio a la etimología toda vez que también posibilita ampliar un tiempo excesivo para corroborar los hechos, realizar investigaciones policiales, diligencias, entre otros actos fuera del contexto natural que es la flagrancia.</p>	<p>En conclusión, la flagrancia diferida es tema bastante discutido toda vez que desnaturaliza la esencia propia de la etimología flagrancia, esto es, en concordancia con nuestra legislación, la posibilidad de las autoridades dentro de las 24 horas después que haya ocurrido el acto delictivo, de realizar actos de investigación ya sea para la edificación del presunto autor o para realizar los seguimientos, actos de investigación para la corroboración de los instrumentos y materias que fueron utilizados por el autor. Ello es de alguna manera contraria a la constitución, la misma que establece la flagrancia en sentido estricto, y no de la mal llamada flagrancia diferida.</p>

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Carrasco, 2016, p. 1)	<p>“Actualmente en el Perú se han implementado los procesos inmediatos por flagrancia delictiva, en donde se busca una celeridad procesal en los supuestos establecidos por el Código Procesal Penal. En hechos fácticos la implementación de este proceso y sus características fueron dictadas a través del Decreto Legislativo N° 1194, justamente por la naturaleza de la celeridad procesal los plazos de este proceso son demasiado cortos, lo cual puede devenir en supuestos en donde se lleguen a afectar derechos fundamentales tales como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a su vez derivados del mismo se puede llegar a vulnerar el derecho al debido proceso, al derecho a la defensa”.</p>	<p>Dentro de nuestro marco normativo, los procesos inmediatos por flagrancia se regulan por el Decreto Legislativo N° 1194, la misma que establece las formas cómo se va a llevar las etapas del proceso. Es desde cualquier óptica una forma de proceso reducido a una milésima parte del proceso común, esto es, una forma de proceso inmediato en la que se lleva las diligencias e investigaciones lo más pronto posible, más celeridad en el proceso como la llama nuestra legislación y la doctrina. Una de las repercusiones que ha despertado esta norma es que los procesos al ser inmediato la misma llega a afectar ciertos derechos fundamentales del imputado tales como el derecho al plazo razonable, el derecho de defensa y el derecho al debido proceso.</p>	<p>En conclusión se puede decir que el Decreto Legislativo N° 1194 regula el proceso inmediato en caso de flagrancia con la finalidad de llevar acabo los procesos de la manera más ágil y rápido posible y es la misma naturaleza de ser célere que ha abierto en nuestra legislación de manera inmediata una rápida reacción por vulnerar derechos fundamentales y que en suma no se estaría salvaguardando los derechos de los imputados debidamente. Esto es y no cabe duda al respecto, que derechos como el plazo razonable, el derecho a la defensa, el debido proceso se ven comprometido por no ajustarse a los procesos comunes a lo que estamos acostumbrados.</p>

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Ugaz, 2016, p. 4)	<p>“Las tensiones en la aplicación del proceso inmediato en casos de flagrancia, evidencian que una sentencia o la condena fácil, rápida y efectiva no constituirían más que una quimera, un monstruo cuya única consecuencia es la devastación del individuo, en cuanto a sus derechos fundamentales, ya que fundamentar una sentencia condenatoria es una labor compleja que simplemente no puede argumentarse con una interpretación literal de la ley, sino también tener en cuenta los principios a fin de llegar a una justificación racional”.</p>	<p>Sin lugar a duda, la aplicación del proceso inmediato para casos de flagrancia a abierto discusiones muy desfavorables toda vez que su regulación en el caso concreto a un imputado no se encuentra ajustado a los estándares normales de un proceso en común, lo que al fin al cabo lleva a que directa o indirectamente se transgreden derechos fundamentales de la persona. Ahora, la importancia y transcendencia de la discusión de esta regulación especial se torna además de los mencionados anteriormente si dicha práctica afecta los derechos fundamentales.</p>	<p>En conclusión la aplicación de la normas referidas al proceso inmediato por flagrancia es una práctica que tiene como consecuencia no solo afectar síquicamente a las personas sino también por tratarse de una práctica que promueve el proceso especial de manera inmediato se llega simplemente a afectar ciertos derechos fundamentales, por ello cuando se versa sobre este tema hay que tener en cuenta la importancia de tener en cuenta los derechos de las personas a fin de no afectarse los derechos fundamentales reconocidas por la constitución política del Perú.</p>

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Cartagena, 2016)	<p>“Hoy se puede apreciar con mayor certeza, que el procesado dentro de las 24 horas muy difícilmente, podrá ejercitar su derecho a la defensa material, y sobre todo la defensa técnica, como la elaboración de una teoría del caso, siendo está considerada por la doctrina y juristas reconocidos, como estrategia de defensa, que resulta ser una herramienta principal para ejercitar su derecho de defensa del procesado, sin embargo, se aprecia en la praxis, que estas garantías, principios y derechos del procesado se ven impedidos ante un proceso extremadamente célere, porque, de nada sirve tener un derecho reconocido constitucionalmente y la defensa no cuenta con una teoría de caso sólida, esto debido a la ausencia del derecho al plazo razonable”.</p>	<p>Se ha dicho en reiteradas ocasiones que la detención en flagrancia constituye de alguna forma un claro atentado contra los derechos fundamentales de las personas, esto, por situaciones en la que la persona procesada no se encuentra debidamente protegido y amparada, y más todavía cuando en el poco tiempo, tiene que sustentar su teoría del caso para su defensa respectiva. Si bien es cierto que la constitución reconoce los derechos de la persona como derechos fundamentales, la aplicación de estos tipos de normativas infringen dichas disposiciones constitucionales tal es el caso del derecho a la defensa, al plazo razonable, el derecho al debido de proceso entre otros.</p>	<p>En conclusión se puede señalar que el plazo de la 24 horas para realizar la defensa correspondiente en el proceso inmediato no se ajustan a la realidad toda vez que por tratarse de un proceso especial y celeridad en el proceso la persona procesada no puede ejercer correctamente su derecho de defensa con la que puede conjuntamente con su defensor técnico desarrollar sus teorías del caso, su plan estratégico entre otros actos procesales como medio de defensa, y claro está, que en estos casos (proceso inmediato) no se puede atender las comodidades como te ofrece el proceso común para defenderte en un tiempo razonable.</p>

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Salas, 2016, p. 30)	<p>“Resulta obvio que el ámbito natural del proceso rápido sea compatible con la flagrancia directa o estricta y en menor entidad en la cuasi flagrancia, la discusión se asienta en los casos de flagrancia por identificación inmediata y flagrancia presunta, en tanto en estos supuestos no existe un fuerte vínculo entre la percepción del hecho y el momento de detención policial, porque no hubo percepción ni persecución por parte del efectivo del orden y por el transcurso del tiempo entre la realización del delito y la detención del presunto autor, adquiriendo incluso lapsos en extremo amplios (24 horas), perdiendo la flagrancia su naturaleza temporal inmediata”.</p>	<p>La regulación de la flagrancia es un tema muy importante porque incumbe derechos reconocidos constitucionalmente y más todavía cuando nuestra normativa regula distintos tipos de flagrancia, tal es el caso de flagrancia presunta y la flagrancia diferida dado a que a su naturaleza difiere del concepto flagrante que no es más que el hecho actual de un delito en ejecución. En ese sentido, el hecho de ampliarse el tiempo o prorrogarse la misma, se desnaturaliza el término, el concepto de la flagrancia distando de su propia naturaleza. Este supuesto de flagrancia concibe que la actuaciones policiales puede realizar actos de investigación hasta por un plazo de 24 horas amparándose en la normas estales que así lo establecen.</p>	<p>En conclusión las distintas extensiones de la flagrancia, y las más discutidas como son la flagrancia presunta y la flagrancia diferida pierden su naturaleza toda vez que no se encuadran a los lineamientos propios de la palabra flagrancia. Esto es, por una parte aun sí que existe el acontecimiento de la acción delictual la posibilidad de la autoridad policial de continuar o seguir con sus diligencias hasta encontrar al autor de un hecho sea acción u omisión de un delito hasta un lapso tiempo de 24 horas.</p>

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Mendoza, 2016, p. 193)	<p>“El proceso inmediato reformado, en tanto en cuanto se circunscriba a los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla en modo alguno afectan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. No es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de juicio permite esclarecer probatoriamente el hecho punible con pleno cumplimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, intermediación y oralidad”.</p>	<p>El proceso inmediato tiene una naturaleza especial toda vez que el proceso llevado cabo se realiza de manera inmediata distinta al proceso común. Esto es, la persona es detenido en el momento y cuando este haya sido capturado hasta un plazo de 24 horas después de la comisión del delito. Ahora bien, es abordar si ella o no constituye una clara incidencia en la afectación de algunos derechos fundamentales, tal es caso del debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a un plazo razonable entre otros derechos dada a la naturaleza misma de los procesos inmediatos que en efecto se llevan a cabo con la celeridad posible por lo que su regulación visto desde otras ópticas no parece ser legalmente aceptable dada como se ha dicho por la naturaleza misma del proceso.</p>	<p>En conclusión podemos señalar que los procesos inmediatos por tener una naturaleza de por si célere, rápido, inmediato involucra de alguna manera una afectación de los derechos de los administrados, tales como el debido proceso, la tutela jurisdiccional, el derecho de defensa entre otros. Es esa la razón por el cual la aplicación de estos tipos de procesos que suma involucran la rapidez, la inmediatez, la celeridad del proceso en la que el procesado se verá impedido de ejercitar correctamente su derecho para poder defenderse correctamente con un defensor técnico.</p>

Fuente según APA	Contenido de la fuente o parafraseo	Análisis crítico	Conclusiones
(Lopez, 2016, p. 40)	<p>“En su trámite, tiene la apariencia de un proceso sumarial diferenciado del proceso común, que a la larga podría ir incorporando otros delitos como aquellos que surjan de la violencia familiar, a costa del sacrificio de algunos derechos fundamentales como la libre elección del abogado defensor, el derecho a probar dentro de un plazo razonable, la prevalencia frente a otros mecanismos de simplificación del proceso y distorsión de las competencias y roles del Juez de Investigación Preparatoria con relación al Juez de Juicio”</p>	<p>Los cuestionamientos que surgen con respecto a los procesos inmediatos en general es que de alguna manera trastocan derechos fundamentales de las personas toda vez que al ser un proceso inmediato no cabría la posibilidad del autor delictual de actuar su derecho de defensa de conformidad, se verá impedido a realizar todo los actos para su defensa correspondiente. En ese sentido los trámites que se llevarán a cabo se verán afecto a ciertas restricciones a causa de la propia naturaleza del proceso, en la que la autoridad tendrá que conceder todas las garantías necesarias para no ver desprotegida los derechos del procesado.</p>	<p>En conclusión se puede decir que los trámites llevados a cabo en los procesos especiales se sacrifica ciertos derechos toda vez que por tratarse de procesos sumamente rápidos, inmediatos incidirá de alguna manera en ciertos derechos fundamentales tales como la libre elección del abogado, el debido proceso, el derecho de probar dentro de un plazo razonable, entre otros. Y es precisamente la naturaleza de la misma que ha traído a colocación la discusión respecto de su constitucionalidad.</p>

4.3.2. Análisis normativo nacional

NORMA	CONTENIDO LITERAL DE LA NORMA	INTERPRETACIÓN EXEGÉTICA	INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA	CONCLUSIONES
Constitución Política del Perú	<p>Principios de la Administración de Justicia</p> <p>Art. 139</p> <p>“14. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”.</p>	<p>Desde una interpretación gramatical - exegética se señala que es uno de los principios de la administración de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso (...)</p>	<p>Desde una interpretación sistemática de la Constitución Política del Perú Art. 139 inciso 14, el Nuevo Código Procesal Penal Art. 446, el Decreto Legislativo N° 1194, la Directiva N° 005-2015-MP-FN se desprende que el derecho a la defensa es un principio que se sustenta en que nadie puede ser privado de su libertad sin que medie en ello la correspondiente resolución judicial del procesado en cualquiera de las etapas del proceso.</p>	<p>En conclusión nuestra Constitución Política del Perú señala que uno de los principios a favor del administrado es el derecho de defensa, entendiéndose esta como aquella por la cual la persona no puede ser privado de su libertad sin que en ella no se haya hecho efectivo el derecho de defensa que le corresponde.</p>

NORMA	CONTENIDO LITERAL DE LA NORMA	INTERPRETACIÓN EXEGÉTICA	INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA	CONCLUSIONES
El nuevo Código Procesal penal	<p>El proceso inmediato</p> <p>supuestos de aplicación:</p> <p>Art.- 446</p> <p>“El Fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos”:</p> <p>a) “El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259”;</p> <p>(....)</p>	<p>Desde una interpretación gramatical – exegética se señala que el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad, cuando se presenten los siguientes supuestos (...)</p>	<p>Desde una interpretación sistemática de la Constitución Política del Perú Art. 139 inciso 14, el Nuevo Código Procesal Penal Art. 446, el Decreto Legislativo N° 1194, la Directiva N° 005-2015-MP-FN, se desprende que el fiscal hecho toda las diligencias necesarias debe solicitar al juez de la investigación preparatoria la incoación del proceso inmediato cuando medien algunos de los supuestos establecidos por el Art. 259 del NCPP y entre ellas tenemos a la flagrancia.</p>	<p>En conclusión el Nuevo Código Procesal Penal regula los procesos especiales como son los casos de los procesos inmediatos y, para llevarse a cabo dicho proceso el fiscal, bajo responsabilidad tendrá que solicitar la incoación al juez siempre y cuando se presente los supuestos exigidos por ley, entre ellas tenemos el proceso inmediato por casos de flagrancia.</p>

NORMA	CONTENIDO LITERAL DE LA NORMA	INTERPRETACIÓN EXEGÉTICA	INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA	CONCLUSIONES
Decreto Legislativo N° 1194	<p>Artículo 1.</p> <p>La presente norma tiene el objeto de regular el proceso inmediato en casos de flagrancia, modificando la Sección I, Libro Quinto, del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo N° 957.</p>	<p>Desde una interpretación gramatical – exegética se señala que el Decreto Legislativo N° 1194 tiene por objeto regular el proceso inmediato en casos de flagrancia (...)</p>	<p>Desde una interpretación sistemática de la Constitución Política del Perú Art. 139 inciso 14, el Nuevo Código Procesal Penal Art. 446, el Decreto Legislativo N° 1194, la Directiva N° 005-2015-MP-FN, se desprende que la norma en mención tiene por objeto regular los procesos inmediatos para casos de flagrancia, modificando de la misma manera los artículos establecidos por el Nuevo Código Procesal Penal referido al proceso inmediato.</p>	<p>En conclusión el Decreto Legislativo N° 1194 es una norma que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia, las etapas del proceso, los acuerdos reparatorios entre otros aspectos. Dicha norma modifica los artículos 446, 447, 448, del Código Procesal Penal. El D. L. N° 1194 sólo regula el proceso inmediato en casos de flagrancia y no las demás normas relacionado a proceso especial.</p>

NORMA	CONTENIDO LITERAL DE LA NORMA	INTERPRETACIÓN EXEGÉTICA	INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA	CONCLUSIONES
Resolución de la Fiscalía de la Nación, N° 5893-2015-MP-FN	Artículo Primero.- Aprobar la Directiva N° 05-2015-MP-FN, denominada “Actuación fiscal en casos de detención en flagrancia delictiva, proceso inmediato y requerimientos de prisión preventiva”	Tiene por objeto regular la actuación fiscal en: Las detenciones en caso de flagrancia, el proceso inmediato y por último en los requerimientos de prisión preventiva.	Desde una interpretación sistemática de la Constitución Política del Perú Art. 139 inciso 14, el Nuevo Código Procesal Penal Art. 446, el Decreto Legislativo N° 1194, la Directiva N° 005-2015-MP-FN, se desprende que la Directiva en mención fija la actuación de los fiscales para casos de detención por flagrancia, los procesos inmediatos y requerimiento de prisión preventiva, esto es, para la actuación debida de los fiscales en los procesos inmediatos.	En conclusión se puede decir que la Directiva n° 5893-2015-MP-FN regula las actuaciones de los fiscales en temas referidas a las detenciones por flagrancia, de los procesos inmediatos, y los requerimientos de prisión preventiva adoptando medidas de acciones y medidas administrativas correspondientes entre otros.

4.3.3. Análisis normativo de derecho comparado

PAÍS	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	CONTENIDO O SENTIDO DE LA NORMA	SEMEJANZA CON NUESTRA LEGISLACIÓN	DIFERENCIA CON NUESTRA LEGISLACIÓN
Colombia	Constitución Política Colombia	Artículo 29.- “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”	La semejanza entre la legislación colombiana y la peruana con respecto al derecho a la defensa es que ambas la regulan y la mencionan respectivamente en sus constituciones.	En el caso peruano no se hace referencia a la culpabilidad para la exclusión de la presunción de inocencia, lo que no necesariamente quiere decir que no esté regulado. Se diferencia además por cuanto en la legislación colombiana no se señala de manera expresa que ella sea un principio, solo se hace mención que es derecho que tienen todas las personas.

PAÍS	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	CONTENIDO O SENTIDO DE LA NORMA	SEMEJANZA CON NUESTRA LEGISLACIÓN	DIFERENCIA CON NUESTRA LEGISLACIÓN
	Código de procedimiento penal	<p>Artículo 302.</p> <p>Procedimiento en caso de flagrancia.</p> <p>“la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en el informe recibido de la autoridad policiva o del particular que realizó la aprehensión, o con base en los elementos materiales probatorios y evidencia física aportados, presentará al aprehendido, inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, ante el juez de” (...).</p>	Hay semejanza toda vez que ambas legislaciones regulan el proceso inmediato en sus respectivos códigos. Los supuestos y la procedencia de la misma.	La diferencia con nuestra legislación es que la legislación colombiana no aborda ni tampoco hace mención a la flagrancia como un proceso especial, distinto siendo nuestra legislación que si aborda un procedimiento especial e inmediato para la flagrancia. Esto es, se señala el modo como se va llevar el proceso de manera especial y no común respecto a los delitos cometidos en flagrancia.

PAÍS	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	CONTENIDO O SENTIDO DE LA NORMA	SEMEJANZA CON NUESTRA LEGISLACIÓN	DIFERENCIA CON NUESTRA LEGISLACIÓN
Costa Rica	Constitución política costarricense	Artículo 39.- “A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”.	Al igual que nuestra legislación, la legislación costarricense señala la palabra defensa, del mismo modo también se asemejan al hacer referencia a que nadie puede ser privado de su libertad cuando de por medio el sujeto atribuido del delito no haya ejercido su derecho en el momento de su juzgamiento o del mismo proceso.	La diferencia es que la legislación costarricense no señala de manera expresa que la defensa es un principio netamente propio del administrando. Lo que contrariamente en la legislación peruana se señala de manera expresa el derecho de defensa como principio.
	Código Procesal Penal	Procedimiento Expedito Para Los Delitos En Flagrancia Artículo 426 “Cuando el fiscal considere pertinente que el asunto debe ir a juicio y se encuentre constituida la defensa técnica, procederá a solicitar oralmente al tribunal de juicio que realice una audiencia para conocer de su solicitud; el tribunal resolverá de inmediato, oralmente, si concurren los requisitos para aplicar el procedimiento en flagrancia”.	Las semejanzas son parecidas toda vez que al igual que nuestra legislación se regula de manera especial los delitos en flagrancia, su procedimiento de manera inmediata, sus etapas en el proceso, el juzgamiento, etc. en esa misma línea ambas se asemejan por cuanto es un deber del fiscal solicitar a la incoación del proceso.	Las diferencias son muy pocas con nuestra legislación distinguiéndose de algunos aspectos no sustanciales, esto es por ejemplo las formas de llevarse el proceso, los nombres, etc.

PAÍS	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	CONTENIDO O SENTIDO DE LA NORMA	SEMEJANZA CON NUESTRA LEGISLACIÓN	DIFERENCIA CON NUESTRA LEGISLACIÓN
Chile	Constitución Política Chilena	Art. 19 Inc. 3.- Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del Letrado si hubiere sido requerida.	La semejanza entre ambas legislaciones es que los dos señalan de manera exacta las palabras “derecho a la defensa”, lo que por una parte los hacen más parecida la expresión.	La diferencia con nuestra legislación es que en la legislación chilena no se concibe de manera expresa derecho de defensa como un principio netamente perteneciente al administrado.
	Código procesal penal	“130. Situación de flagrancia. Se entenderá que se encuentra en situación de flagrancia: a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito; b) El que acabare de cometerlo; c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado por el ofendido u otra persona como autor o cómplice”; (...).	No hay semejanza toda vez que solo hacen mención que es la flagrancia, distinta a nuestra legislación que si lo aborda con un proceso especial y el modo de procedimiento.	No existe diferencia toda vez que la legislación peruana regula de manera especial los procesos inmediatos tal como es la flagrancia. La legislación chilena carece de una regulación propia de un proceso penal en casos de flagrancia.
PAÍS	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	CONTENIDO O SENTIDO DE LA NORMA	SEMEJANZA CON NUESTRA LEGISLACIÓN	DIFERENCIA CON NUESTRA LEGISLACIÓN
El Salvador	Constitución Política Salvadoreña	“Art. 12. Toda persona a quien se le impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”.	La semejanza con nuestra legislación se circunscribe por cuanto la legislación salvadoreña si bien es cierto no hace referencia exactamente el derecho de defensa hace mención las	La diferencia con nuestra legislación se circunscribe en el hecho de que la legislación Salvadoreña no se señala de manera expresa el derecho de defensa, así como tampoco se hace mención que es un

			garantías para el ejercicio de su defensa.	principio a favor del administrado.
	Código Procesal Penal	Procedimiento sumario “Art. 445.- Los jueces de paz tendrán competencia para conocer del procedimiento sumario por los delitos siguientes” (...). “Art. 446.- Se aplicará este procedimiento cuando en los casos indicados en el artículo anterior se hubiese detenido a una persona en flagrante delito” (...).	La semejanza con nuestra legislación es que también en la legislación Salvadoreña se regula de manera especial los delitos cometidos en flagrancia, salvo expresos motivos señalados por la ley. Esto es, tienen una regulación de un proceso sumario e inmediato respecto a los procesos comunes normales ya conocidos.	La diferencia con nuestra legislación es que si bien es cierto que la legislación regula de manera especial los delitos cometidos en flagrancia no se conoce con el nombre de proceso inmediato sino proceso sumario. De allí es que se puede señalar que existe una regulación especial respecto a los delitos cometidos en flagrancia en el Estado Salvadoreño.

PAÍS	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	CONTENIDO O SENTIDO DE LA NORMA	SEMEJANZA CON NUESTRA LEGISLACIÓN	DIFERENCIA CON NUESTRA LEGISLACIÓN
Boliviano	Constitución Política Boliviana	Art. 115. 1 “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.	La semejanza con nuestra legislación es casi parecida dado a que también en la legislación Boliviana se reconoce a la defensa como de un derecho a favor del administrado.	La diferencia con nuestra legislación es que en la legislación Boliviana no se señala de manera expresa el derecho de defensa como principio contrario sensu en nuestra legislación si señala de manera expresa el derecho de defensa como principio.
	Código Procesal	Procedimiento inmediato para delitos flagrantes “ Art. 393. - En la resolución de imputación formal, el fiscal podrá solicitar al juez de instrucción la aplicación del procedimiento inmediato para delitos flagrantes conforme a las normas del presente Título, cuando el imputado sea sorprendido o aprehendido en la comisión de un delito en flagrancia” (...).	La semejanza con nuestra legislación es que también en la legislación Boliviana hay una regulación especial <i>respecto de los delitos cometidos en flagrancia</i> , y es más, el nombre de referencia es casi lo mismo diferenciándose solo la palabra proceso por procedimiento.	La diferencia con nuestra legislación es que la legislación boliviana si bien es cierto se regula los delitos cometidos en flagrancia de manera inmediata, solo difieren en la palabra proceso por procedimiento que en el caso peruano son distintas, por cuanto la primera tiene una naturaleza jurisdiccional y la segunda no tener la naturaleza jurisdiccional.

PAÍS	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	CONTENIDO O SENTIDO DE LA NORMA	SEMEJANZA CON NUESTRA LEGISLACIÓN	DIFERENCIA CON NUESTRA LEGISLACIÓN
Argentina	Constitución política de argentina	Art.- 18 (...) Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (...).	La semejanza con nuestra legislación es que la legislación Argentina señala de manera expresa el derecho defensa, siendo por ello inviolable dicho derecho en mención.	La diferencia con nuestra legislación es que en la legislación Argentina no se señala de manera expresa que el derecho de defensa es un principio a favor de los administrados, esto es, en el caso penal, el derecho-principio a favor del imputado.
	Código procesal penal	Art. 353 bis “El procedimiento para casos de flagrancia que se establece en este título es de aplicación a todos los hechos dolosos en los que se verificasen las circunstancias del artículo 285 y cuya pena máxima no supere los quince (15) años de prisión o veinte (20) años de prisión” (...).	Al igual que nuestra legislación, la legislación argentina regula de manera especial los delitos cometidos en flagrancia. Esto es, su regulación se hará de manera sumaria e inmediata.	La diferencia es que no se señala de manera expresa que es un proceso inmediato, solo se limita a señalar de que es un procedimiento especial. La diferencia también es que no se considera como proceso de flagrancia sino como procedimiento para casos de flagrancia diferenciándose en las palabras proceso y procedimiento que son muy distintas en nuestra regulación nacional.

4.3.4. Análisis jurisprudencial

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
Tribunal Constitucional	EXP. N.º 1318-2000-HC/TC	Contra la Resolución expedida por la Sala Penal Corporativa de la Corte Superior de Justicia del Santa	Flagrancia y el Derecho de defensa	<ul style="list-style-type: none"> - REVOCAR la Resolución expedida por la Sala Penal Corporativa de la Corte Superior de Justicia del Santa - FUNDADA la Acción de Hábeas Corpus 	Que, de la propia manifestación de los emplazados y demás documentales obrantes en autos, se corrobora que la detención se produjo al margen de los supuestos contemplados por la Constitución. Por un lado, “no hubo comisión flagrante de delito, toda vez que la flagrancia supone la aprehensión del autor del hecho delictivo en el preciso momento de la comisión del mismo, más aun tratándose de delitos” (Sentencia TC) de comisión instantánea. Desde tal perspectiva, si de acuerdo a la sindicación del detenido, don Wilder Jara Vásquez, el favorecido le habría vendido la cantidad de un kilo cuatrocientos gramos de pasta básica de cocaína el día treinta de octubre de dos mil, en horas de la tarde, no puede considerarse detención en flagrancia cuando esta medida	El caso es respecto a una detención arbitraria realizada con el señor Wilder Jara Vásquez en alusión por parte de la policía de un delito flagrante. Así el tribunal sostiene que la detención realizada contra Wilder, J. Vásquez no se ha realizado respetándose los lineamientos establecidos por la Constitución Política, toda vez que la detención efectuado no se adecúa a la flagrancia establecida por la constitución y más todavía cuando la detención se hizo posterior a los hechos acaecidos en el momento del ilícito penal, por lo que no se puede alegar la idea de flagrancia, ni

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
					<p>acontece en una fecha posterior, el día tres de noviembre a las 08 h 00 min. Tampoco cabe justificar la presente detención dentro de la denominada figura de "cuasiflagrancia" tal como lo sostiene la Sala Penal Corporativa de la Corte Superior de Justicia del Santa, pues al margen de que ni siquiera es aplicable al caso subjudice, toda vez que la detención no se produjo en el momento inmediatamente seguido a la presunta comisión del hecho delictivo, además la Constitución Política del Estado no alude en absoluto al supuesto de "cuasiflagrancia", por lo que no puede habilitarse subrepticamente supuestos de detención no contemplados constitucionalmente, sencillamente, por aplicación del principio de interpretación según el cual, las normas establecen excepciones, y el artículo 2,</p>	<p>justificarse la existencia de la cuasiflagrancia cuando la misma Constitución Política no concibe ni la señala de manera taxativa. Bajo esos criterios, de la detención posterior a los hechos ocurridos anteriormente y de la figura llamada cuasi-flagrancia no puede habilitarse la detención cuando nuestro mismo sistema legal no recoge tales postulados por lo que devendría una clara afectación del derecho de libertad del sujeto. En efecto queda claro entonces que cualquier detención en flagrancia sólo se realizará cuando el hecho delictual es vigente, en el momento, perceptible en la ejecución de la comisión del</p>

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
					inciso 24), literal "f" que es regulatorio de las excepciones que restringen el derecho a la libertad individual, deben ser interpretadas restrictivamente.	delito. Por ello, cuando se quiera interpretar una norma y más todavía cuando se trata de un derecho fundamental en conflicto, la interpretación de la norma debe de ser interpretada restrictivamente sin que en ella se llegue a vulnerar derechos de los individuos.

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
Tribunal Constitucional	EXP. N.° 05350-2009-PHC/TC LIMA	“Contra la sentencia expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima”	“El plazo razonable”	Declarar FUNDADA la demanda, por “haberse acreditado la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable por parte de las”	“El Tribunal considera que las juezas emplazadas no han cumplido con su deber de obrar con celeridad en la resolución del proceso penal en el que se le viene procesando al favorecido. En buena cuenta, la afectación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable le es imputable a la Sala Penal emplazada, que no ha”	El tribunal constitucional ha identificado dos derechos fundamentales vulnerados, en ella está el derecho a un plazo razonable y el derecho a la prueba. Respecto a la primera el tribunal sostiene que la actuación de la sala Penal emplazada no está bajo el concepto de la celeridad

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
				“juezas emplazadas conforme se señala en los fundamentos 41 a 52, supra”.	“actuado con la diligencia debida para resolver el proceso penal mencionado. Este último hecho confirma la afirmación reiterada de la recurrente respecto al ofrecimiento del DVD como prueba al proceso penal seguido en su contra, así como también conlleva a inferir su falta de actuación reclamada. Por tanto, atendiendo que el derecho a probar no solo está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, sino también a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia, tal como ya se advirtió en el fundamento 6 supra; este Tribunal considera que en el caso”	procesal toda vez que el procesado se encuentra 5 años sin ninguna sentencia desde la emisión del auto de enjuiciamiento. Por otra parte existe la afectación del derecho a la prueba toda vez que el procesado se ha visto impedido por parte de la administración de conocer y admitir el ofrecimiento de prueba. En sentido el tribunal señala que en los casos de autos se ha vulnerado dicho derecho toda vez que no ha existido por parte de la administración la admisión de los medios probatorio efectuados en su momento por el solicitante y en merito a ello ser valoradas de manera idónea y adecuada y con la motivación debida para la ejecución de resolución. En

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
					“de autos se ha configurado la invocada afectación del derecho a la prueba de la recurrente por lo que su demanda de habeas corpus deberá ser estimada”	ese sentido el tribunal llega a la conclusión de la afectación de los derechos señalados inicialmente por lo que declara fundada la demanda.

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
tribunal constitucional	EXP. N.º 6204-2006-PHC/TC	“Contra la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Loreto”	el debido proceso y el derecho de defensa	Declarar FUNDADA la demanda.	19.- “Tan arbitraria e irrazonable es una resolución judicial que adolece de falta de motivación, como aquella denuncia fiscal en la que no existen fundamentos objetivos y razonables – y sí, por el contrario, argumentos subjetivos e injustificados– para que se formule una denuncia penal contra una determinada persona”. 20.- De otro lado, la omisión del Fiscal demandado comporta también una afectación del derecho fundamental al debido proceso del demandante en su manifestación del derecho de	Una resolución es arbitraria e irrazonable cuando en ella existe defectos tales como la falta de motivación, no existen fundamentos objetivos y razonables pero si fundamentos subjetivos e injustificados con una persona determinada. En ese sentido el tribunal constitucional refiere que la omisión del fiscal de notificar y de realizar las investigaciones correspondientes afecta el derecho del debido proceso del

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
					<p>defensa, de acuerdo con el artículo 139.º, inciso 14, de la Constitución. Ello por cuanto al no haber sido notificado por el Fiscal denunciado y al no haber realizado éste la investigación correspondiente, el recurrente no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa ni tampoco la posibilidad de presentar sus descargos correspondientes. En consecuencia, en opinión del Tribunal Constitucional, en el presente caso, se ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso al no haberse permitido que el recurrente ejerza su derecho de defensa y formule sus descargos.</p>	<p>procesado toda vez que se limita la oportunidad de manifestar su derecho de defensa en el debido momento ni realizar el descargo ante la autoridad correspondiente. Es en ese sentido que el tribunal llega a la conclusión de que el hecho de que el sujeto no haya sido notificado debidamente por la autoridad se estaría afectando el debido proceso, la misma que involucra otros derechos como el derechos de defensa, a la prueba, a ser escuchado entre otros, así como también realizar sus descargos en el momento oportuno.</p>

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
tribunal Constitucional	EXP N ° 07731-2013-PHC/TC	contra la resolución expedida por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes	el derecho de defensa	Declarar FUNDADA la demanda	(...) “El Tribunal verifica que la negativa de la recurrente a rendir declaraciones, no solo se debió a su limitación para comunicarse en el idioma castellano, sino también a su falta de comprensión de lo que estaba ocurriendo en el proceso penal por ser una persona analfabeta”. “Al respecto el Tribunal observa que las autoridades jurisdiccionales no otorgaron una debida tutela en la medida que no ofrecieron las garantías necesarias, a fin de que el derecho de defensa de la recurrente en su calidad de analfabeta y quechua hablante se encuentre plenamente protegido. En opinión del Tribunal, la autoridad judicial debió asignar un intérprete a la favorecida para que pueda comunicarse correctamente y sin	Es una de las sentencias en la que el tribunal deja en claro una afectación de derecho de defensa por falta de un intérprete para un procesado quechua hablante y analfabeta. Así el tribunal constitucional ha sostenido que la limitación de poder comunicarse una persona para una declaración, así como su falta de comprensión de los hechos por su calidad de ser analfabeta es una clara afectación de una debida tutela a favor de la procesada toda vez que al no otorgárselo toda las garantías como es el caso de no asignarle un intérprete se le está impidiendo efectuar debidamente su derecho de defensa y planear toda las defensas necesarios del conocimiento que tenga del proceso sin limitaciones y

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
					limitaciones con el objeto de que pueda ser oída en el proceso; asimismo, debió exhortar al abogado para que no deje de asistir a ninguna de las audiencias y le comunique a la favorecida todo lo ocurrido en cada una de las etapas del proceso, dejando expresa constancia de ello. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el presente caso se ha vulnerado el derecho de defensa de la favorecida Carmen María Villanueva Polinar”.	comunicarse debidamente. En esa misma línea el tribunal sostiene que el hecho de que la autoridad judicial no haya exhortado al abogado defensor de dejar de asistir a las audiencias para que éste le comunique de lo ocurrido es parte de la misma autoridad jurisdiccional una clara afectación de su derecho defensa por la limitación propia de la persona, que suma es evidente.

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
Tribunal Constitucional	EXP N° 01159 2014-PHC/IT,	Contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima	El derecho de defensa	Declarar FUNDADA la demanda de autos en cuanto a la afectación del derecho a los medios y tiempo adecuados para la preparación de la defensa	12.- Queda claro para este Tribunal que el beneficio que se otorga mediante el Decreto Supremo 018-2002-PCM, no constituía la única forma de ejercer la defensa técnica del demandante, pero si es que dicho beneficio se solicitó, entonces la entidad emplazada debió otorgar los medios y tiempo adecuados para dar una respuesta rápida al peticionante, de modo que éste resuelva lo pertinente sobre el ejercicio de tal defensa. Por tanto, pese a la irreparabilidad mencionada en el fundamento 10 de la presente, corresponde declarar fundada la demanda en cuanto a la afectación del derecho a contar con los medios y tiempo necesario para la preparación de la defensa y ordenar al Ministerio de Defensa no vuelva a incurrir en las	Es otro caso en la que el Tribunal Constitucional hace constar la vulneración del derecho de defensa. Así, la afectación del derecho de defensa se suscita con respecto a un exministro de defensa, que si bien es cierto tienen el beneficio de acogerse a una normativa para solicitar una defensa especializada, no siendo este el único medio para ejercer su defensa técnica, pero si esta (procesado) se acoge con respecto a la prerrogativa (normativa) el organismo encargada del proceso está en la obligación de concederla en tiempo requerido para que el procesado pueda ejercitar su derecho de defensa como corresponde, esto es, armar su teoría del caso, preparar su

					acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda.	defensa y estrategia como cualquier sujeto de derecho en la que se vea dotado de toda las garantías reconocidas en la Constitución Política. Todo lo contrario supondría una clara afectación del derecho defensa del procesado.
--	--	--	--	--	--	--

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	EXP. N.º 01957-2008- PHC/TC LIMA	Contra la resolución expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima,	El derecho de defensa y la flagrancia	Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido a la privación de abogado defensor. Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo referido a la detención arbitraria	7.- Del análisis del Parte S/N-07-VII-DIRTEPOL/DIVPOL-CHO-DEPANDRO (que obra a fojas 29 de autos) se advierte que con fecha 24 de septiembre de 2007, siendo las 12:30 horas, se llevó a cabo el operativo denominado RETÉN 2007 en el inmueble denominado La Jungla, sito en la avenida Malecón Manco Cápac N° 941, distrito de Chaclacayo, provincia y departamento de Lima. Asimismo, como resultado de dicho operativo, se	Es un caso en la que el Tribunal Constitucional advierte un caso de flagrancia toda vez que el sujeto atribuido del delito ha sido interceptado por la policía cuando este poseía una cantidad de “Ketes” de pasta básica de cocaína, la misma que fue reconocida y ratificada por el mismo detenido. En ese sentido la negativa del procesado en aducir de que la detención era arbitraria por falta de

ÓRGANO	DATOS DE LA JURISPRUDENCIA	DEMANDADO	TEMA	DECISIÓN	TEXTO DE LA JURISPRUDENCIA	ANÁLISIS
					<p>intervino a varias personas entre las que se encontraba el recurrente, a quien se lo detuvo por habersele encontrado en posesión de 20 “ketes” de pasta básica de cocaína (PBC); hecho que fue reconocido por el propio demandante, toda vez que suscribe el acta de información de derechos del detenido (cuya copia certificada obra a fojas 39 de autos) en donde consta la razón de su detención. Por consiguiente, se advierte que el hecho en cuestión constituye un delito flagrante, al concurrir los requisitos de inmediatez temporal y personal, por lo que este extremo de la demanda debe ser desestimado.</p>	<p>conurrencia de flagrancia deviene a ser improcedente toda vez que en los hechos el procesado había suscrito en el acta de información la causa y la razón de su detención, por la que en virtud de todo los medios probatorios se puede decir que la detención se ha realizado en flagrancia, cumpliéndose entonces con todo los elementos que la configuran como es el elemento temporal y personal, que no significan más que el delito se esté cometiendo o se haya cometido instantes antes y que el presunto autor se encuentre en el lugar, y con relación al objeto o instrumentos del delito.</p>

CONCLUSIONES

Primero: En el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, sólo en algunos casos, por la mala práctica de algunos magistrados del Ministerio Público y del Poder judicial, debido a la calificación errónea que realizan al momento de definir el tipo de flagrancia, el mismo que limita el ejercicio del derecho a la defensa formal y material del procesado.

Segundo: En el proceso inmediato por flagrancia se afecta el derecho al plazo razonable del procesado, en algunos casos, toda vez que el corto plazo no permite que el procesado prepare y ejerza una defensa formal y material adecuada.

Tercero: El proceso inmediato en caso de flagrancia tiene justificación en la necesidad de sancionar los delitos flagrantes y reducir la carga procesal, sin embargo, ello no significa que a costa de la afectación de los derechos fundamentales del procesado, en algunos casos, se cumpla dicha finalidad sancionadora y reducción de la carga procesal.

Cuarto: En el proceso inmediato en caso de flagrancia, en algunos casos, no hay observancia del cumplimiento del principio acusatorio, con lo cual se afecta el derecho a la defensa del procesado, toda vez que la acusación que efectúa el fiscal no cumple con todos los caracteres de una acusación.

Quinto: En el proceso inmediato en caso de flagrancia, en algunos casos, no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, toda vez que a diferencia de la defensa, el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, sin embargo, la defensa requiere un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa o descargo.

RECOMENDACIONES

Primero: En el proceso inmediato en casos de flagrancia se debe garantizar el derecho a la defensa del procesado, para tal efecto el Ministerio Público y el Poder Judicial deben contar con magistrados idóneos, magistrados especialistas en flagrancia, a fin de calificar correctamente el tipo de flagrancia.

Segundo: Para la incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva debe establecerse como un requisito que el procesado tenga defensa técnica de su libre elección por lo menos con 24 horas anteriores a la fecha de la programación de la audiencia única de Incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva.

Tercero: Se recomienda que no se debe aplicar en forma indiscriminada el proceso inmediato en casos de flagrancia, y se debe justificar la necesidad de la misma en cada caso en especial, el cual debe respetar el derecho al debido proceso y en especial el derecho a la defensa del procesado, más en un Estado constitucional de Derecho como el Perú.

Cuarto: En el proceso inmediato en casos de flagrancia se debe cumplir con el principio acusatorio a fin de garantizar el derecho a la defensa del procesado, así como también se debe garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de armas dando las mismas facilidades y posibilidades a la defensa y el fiscal, y si hubiera desventaja, como en el plazo, se debe garantizar.

Quinto: Debe haber una cooperación interinstitucional entre el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y defensas de oficio a efectos de garantizar un eficiente proceso inmediato en casos de flagrancia, sin la vulneración de los derechos. Asimismo, se debe capacitar al personal jurisdiccional y administrativo de las instituciones que intervienen en dichos procesos, a fin de garantizar un proceso adecuado para la justicia y las partes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abundio, J. (2006). *análisis de la vulneración al derecho de defensa en el recurso de revocatoria del juicio ordinario laboral guatemalteco*. Guatemala.
- Andia, G. (2013). *Deficiencia en la labor fiscal y judicial en las distintas etapas del actual proceso penal*. Lima, Peru.
- Angulo, V. (2010). *El derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el proceso penal*. Valdivia, Chile.
- Antoniou, G., y Bulai, C. (2011). *Diccionario de derecho penal y procedimiento penal*. Bucarest: Editorial Hamangia.
- Araya, A. (2016). *Ius in fraganti*. *Revista informativa*, 1-147.
- Arcibia, E., García, E., Gonzales, G., Mori, N., Mosqueira, A., y Valdivia, C. (2011). *La Flagrancia en el nuevo Procesal Penal*. Lima: Universidad de San Martín de Porres.
- Arcibia, G. G. (2011). *"La flagrancia en el nuevo procesal penal"*. Lima.
- Barrios, B. (2011). *La defensa penal*. República de Panamá.
- Beltrán, A. (2008). *El derecho de defensa y a la asistencia letrada en el proceso penal ante la corte penal internacional*. Sevilla, España.
- Benites, J. (2010). *Mecanismo de celeridad procesal, principio de oportunidad y proceso de terminación anticipada en el código procesal penal de 2004 y su aplicación en el distrito judicial de Huaura*. Lima, Peru.
- Cabrejo, N. (2011). La flagrancia en el ordenamiento jurídico peruano. *Derecho y Cambio Social*, 1-8.
- Cardenas, I. (2016). El proceso inmediato. *Revista informativa*, 121-122.
- Carocca, A. (s.f). *Garantía constitucional de la defensa*. Santiago, Chile.

- Carrasco Díaz, S. (2008). *Metodología de la Investigación científica* (2.da ed.). Lima: San Marcos.
- Carrasco, A. (2016). *La implicancia del proceso inmediato por flagrancia delictiva al principio acusatorio y al derecho a ser juzgado en un plazo razonable*. Lima: Universidad de Huánuco.
- Carrasco, M. (2016). *La implicancia del proceso inmediato por flagrancia delictiva al principio acusatorio y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, Lima-Norte 2016"*. Lima, Perú.
- Cartagena, E. (2016). *Inconvencionalid del decreto legislaivo N° 1194 y sus efectos en la admnsitracion de justicia de la provincia de San Ramon-Juliaca*. Puno, Perú.
- Castejon, M. (2009). *El procedimeinto de flagrancia en el derecho procesal penal venezolano*. Barquisimeto, Venezuela.
- Celis, F. (2016). *Ius in fraganti*. *Revista informativa*, 1-147.
- Chicas, R. (2013). *El papel del juez en la instruccion formal y la audiencia preliminar*. San Salvador.
- Cordero, A. (2010). *La detencion y el delito flagrante*. Cuenca, Ecuador.
- Coronado, N. (2010). *Aspectos y consideraciones teoricas de la flagrancia y su regulacion en la legislacion Penal Guatemalteca*. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala.
- De la Jara, E., Mujica, V., y Ramirez, G. (2009). *¿Cómo es el proceso según el Nuevo Código Procesal Penal?* Lima, Perú: Bellido Ediciones.
- Espinoza, J. (2016). *La flagrancia y el proceso inmediato*. Lima, Perú.
- Garcia, N., y Rodriguez, N. (2014). *Las garantías constitucionales: el derecho de defensa del imputado*. Salamanca, España.

- Gómez, J. (2016). *La aprehension en delito flagrante y sus efectos jurídicos en la Legislación Ecuatoriana*. Ambato: Universidad Regional Autónoma de los Andes.
- Gomez, S. (2016). *La Aprehensión en delito flagrante y sus efectos juridicos en la legislacion ecuatoriana*. Ambato, Ecuador.
- Guaicha, P. (2010). *El derecho a la defensa en el proceso penal ecuatoriano*. Cuenca, Ecuador.
- Guillermo, J. (2016). La importancia de la imputación necesaria en el proceso inmediato. *Revista Informativa*, 73-87.
- Guillermo, J. (7 de 2 de 2017). La reforma del proceso inmediato. *El Peruano*, pp. 4-5.
- Haro, C. (2015). *La calificación de la flagrancia y su incidencia en el principio de inocencia en los procesos tramitados en la unidad judicial penal con sede en el canton Riobamba durante el periodo agosto-diciembre del año 2014*. Riobamba, Ecuador.
- Hernandez, C. (2013). El derecho de defensa adecuada en el sistema penal acusatorio. *Revista ciencia juridica*, 23-39.
- Hernandez, F. (2012). *El derecho de defensa*. Lima.
- Hernandez, J. (2013). *Aprehensión, detención y flagrancia*. México.
- Herrera, D. (07 de Febrero de 2017). La audiencia única del juicio inmediato. *El Peruano*, p. 6.
- Landa, C. (2002). Derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. *Dike. PUCP*, 445-461.
- Lope, V. (2001). *La inviolabilidad de las comunicaciones con el abogado defensor como garantía del derecho de defensa*. Alicante, España.
- Lopez, E. (2016). Las garantías y la eficacia en el proceso inmediato. *Ius in fraganti*, 39-42.

- López, J. (2015). *La flagrancia delictiva como instrumento procesal de lucha contra la criminalidad*. Lima, Perú.
- López, M. (2013). El acceso a un defensor penal y sus ámbitos especialmente críticos. *Revista Das Defensorias Publicas Do Mercosul*, 7-50.
- Maldonado, R. (2016). *Estudio de casos y análisis jurisprudencial del derecho de defensa y el ejercicio de la asistencia letrada ante la corte penal internacional*. Quetzaltenango.
- Martínez, N. (2006). *La falta de acceso por parte del sindicado y abogado defensor a la prueba pericial practicada por el Ministerio Público durante la investigación, como violación del derecho de defensa*. Guatemala.
- Mendoza, C. (2016). Ius fraganti. *Revista informativa* , 2-211.
- Mendoza, G. (2016). El proceso inmediato en el proceso penal peruano, aplicación del Decreto Legislativo 1194. *Revista Informativa*, 88-118.
- Mendoza, M., y Nuñez, A. (1999). *La defensa técnica como instrumento de contro e investigación en la etapa preliminar del proceso penal costarricense*. San Jose, Costa Rica.
- Meneses, B., y Meneses, J. (2016). Proceso Inmediato para investigar y sancionar delitos flagrantes.
- Meneses, J. (2015). *Procedimiento para investigar y sancionar delitos como respuesta a la criminalidad*. Lima, Perú.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2003). *Guía sobre la aplicación del principio-Derecho del debido proceso en los procedimientos administrativos* . Lima,Perú.
- Monge, V. (2012). *La Constitucionalidad del Procedimiento Penal de Flagrancia*. San José: Universidad de Costa Rica.
- Nogueira, J. (s,f). *Garantías constitucionales del proceso penal*. Buenos Aires, Argentina.

- Ortega, P. (2013). *El incorrecto procedimiento de los agentes policiales en la aprehensión de personas por el delito flagrante en la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, y la violación del debido proceso*. Ambato: Universidad Regional Autónoma de los Andes.
- Ozollo, F. (2015). *En defensa del procedimiento especial para los casos de flagrancia*. Universidad Empresarial.
- Palacios, M. (2015). *El principio constitucional de contradicción y su incidencia en el proceso penal*. Quevedo, Ecuador.
- Pandía, R. (2016). Razones políticas criminales del proceso inmediato y su aplicación en el Perú: una discusión actual. *Ius fraganti*, 119-138.
- Pari, Y. (2015). *El derecho del abogado procesado a renunciar al patrocinio jurídico por otro profesional en derecho y el ejercicio de su autodefensa en los procesos penales*. Juliaca, Perú.
- Perez, C. (2016). *El principio acusatorio según el tribunal europeo de derechos humanos*. Valladolid, España.
- Portocarrero, M. (2015). *Procedimiento para investigar y sancionar delitos flagrantes como respuesta a la criminalidad*. Lima, Perú.
- Portocarrero, M. (2015). *Procedimiento para investigar y sancionar delitos flagrantes como respuestas a la criminalidad*. Lima, Perú.
- Ramírez, R. (2010). *Proyecto de Investigación*. Lima: Fondo Editorial AMADP.
- Rebolledo, F., Moraga, C., Careau, S., y Andrade, C. (2008). La flagrancia: ¿Hipótesis indiscutible? *Revista de derecho*, 91-115.
- Recurso de agravio constitucional, EXP.N.º 0197-2005-PA/TC (Tribunal Constitucional 8 de Marzo de 2005).
- Recurso de agravio constitucional, EXP. N.º 01665-2014-PHC/TC (Tribunal Constitucional 25 de Agosto de 2015).

Recurso de Casación, Casación N° 281-2011 (Corte Suprema De Justicia-Sala Penal Permanente 16 de Agosto de 2012).

Reyes, A. (2004). *El delito flagrante: sus implicancias en el proceso penal*. Valdivia, Chile.

Salas, J. (2016). *Ius in fraganti*. *Revista informativa de actualidad jurídica*, 7-30.

Salas, J. (2016). Reflexiones sobre el proceso inmediato en flagrancia y otros supuestos en aplicación del decreto legislativo. *Revista in fraganti*, 28-43.

San Martin, C. (2016). El Proceso inmediato. *Revista Informativa*, 13-27.

Sanchez, A., y Santiago, A. (2010). *Análisis de la audiencia de calificación de flagrancia en la legislación procesal penal venezolana y otras leyes esenciales*. Maracaibo, Venezuela.

Santisteban, C. (2007). *Defensa Técnica en la etapa preparatoria del proceso penal guatemalteco*. San José, Guatemala.

Sarti, I. (2014). *Efectivo ejercicio de la defensa material a través de la videoconferencia en el proceso penal*. Quetzaltenango, Guatemala.

Sernaqué, J. (2014). *El proceso inmediato como mecanismo de simplificación en la celeridad y descarga procesal penal en el distrito judicial de Huaura*. Lima: Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión.

Tejada, J. (2016). *Ius in fraganti*. *Revista informativa*, 1-147.

Toaquiza, M. (2014). *La admisión y valoración de la prueba en el procedimiento penal abreviado*. Quito, Ecuador.

Ugaz, F. (1 de febrero de 2016). Proceso inmediato: celeridad extrema y consecuencias practicas . *La Ley*.

Villar, M. (2010). *Limitaciones al ejercicio del derecho de defensa en la etapa de instrucción y el trabajo del defensor de oficio*. Chiclayo, Peru.

Vitar, C. (s.f). *La detención por flagrancia y la modificación de la ley 20.253*. Valparaíso, Chile.

Viteri, D. (s.f). *El derecho al plazo razonable en el proceso penal: el desarrollo jurisprudencial de la corte interamericana de derechos humanos y del tribunal constitucional peruano*. Trujillo, Perú.

Vladila, L., Ionescu, S., y Matei, D. (2011). El derecho de defensa . *Revista de la inquisición* , 243-258.

ANEXOS

Matriz de consistencia

MATRIZ DE CONSISTENCIA				
TÍTULO: EL DERECHO DE DEFENSA Y EL PROCESO INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA AUTOR: ORLANDO VILLARREAL SALOMÉ.				
PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES E INDICADORES	
Problema principal: ¿En el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho a la defensa del procesado?	Objetivo general: Determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho a la defensa del procesado.	Hipótesis general: En el proceso inmediato en caso de flagrancia se vulnera el derecho a la defensa del procesado, toda vez que al ser muy corto el plazo, no es razonable y limita que el procesado prepare una defensa adecuada.	Variable 1: EL PROCESO INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA	
			Indicadores	Ítems Niveles o rangos
Problemas específicos: 1. ¿En el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho al plazo razonable del procesado? 2. ¿El proceso inmediato en caso de flagrancia tiene justificación jurídicamente aceptable? 3. ¿En el proceso inmediato en caso de	Objetivos específicos: 1. Determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el derecho al plazo razonable del procesado. 2. Determinar si el proceso inmediato en caso de flagrancia tiene justificación jurídicamente aceptable. 3. Determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el debido	Hipótesis específicas: 1. En el proceso inmediato en caso de flagrancia se afecta el derecho al plazo razonable del procesado, toda vez que el corto plazo no permite que el procesado prepare una defensa adecuada. 2. El proceso inmediato en caso de flagrancia tiene justificación en la necesidad de sancionar los delitos flagrantes y reducir la carga procesal, sin embargo, ello no justifica que se debe afectar los derechos del procesado. 3. En el proceso inmediato en caso de flagrancia no se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio para garantizar el derecho a la defensa del	<ul style="list-style-type: none"> Justificación jurídica Principio acusatorio Reducción de la carga procesal 	15 *Estoy de acuerdo *No estoy de acuerdo
			Variable 2: EL DERECHO DE DEFENSA	
			Indicadores	Ítems Niveles o rangos
			<ul style="list-style-type: none"> Derecho al plazo razonable Principio de igualdad de armas Derecho fundamental 	15 *Estoy de acuerdo *No estoy de acuerdo

<p>flagrancia se garantiza el debido cumplimiento del principio acusatorio para garantizar el derecho a la defensa del procesado?</p> <p>4. ¿En el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del procesado?</p>	<p>cumplimiento del principio acusatorio para garantizar el derecho a la defensa del procesado.</p> <p>4. Determinar si en el proceso inmediato en caso de flagrancia se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas para garantizar el derecho a la defensa del procesado.</p>	<p>procesado, toda vez que la acusación que efectúa el fiscal debe cumplir con todos los caracteres de una acusación.</p> <p>4. En el proceso inmediato en caso de flagrancia no se garantiza el debido cumplimiento del principio de igualdad de armas, en la medida que el fiscal tiene en forma inmediata los elementos para acusar, pero la defensa requiere un tiempo prudente para revisar el expediente y en su caso ofrecer medios probatorios de defensa.</p>			
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN	ESCENARIO DE ESTUDIO	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA		
<p>TIPO: Investigación descriptiva aplicada.</p> <p>DISEÑO: No experimental transaccional</p> <p>MÉTODOS: Inductivo, deductivo, sintético, descriptivo, comparativo, dogmático, crítico racional y filosófico.</p>	<p>El escenario de estudio del presente trabajo se toma al Distrito Judicial de Ventanilla, de donde se recolectará información de fuentes tales como: especialistas en derecho penal, derecho procesal penal, magistrados del Ministerio Público, Poder Judicial, docentes universitarios y constitucionalistas.</p>	<p>Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrevista.- Mediante el cual se realizarán preguntas abiertas a expertos. • Observación: (Observación y análisis de las leyes, jurisprudencia, doctrina, etc. relacionadas al derecho penal ambiental. • Bibliográfica: Consulta de fuentes bibliográficas de primer y segundo grado, tales como: libros, revistas impresas o electrónicas, enciclopedia, artículos científicos, etc. • Análisis de fuente documental: Análisis de fuentes documentales, 	<p>De acuerdo a lo que señala Hernández, las investigaciones descriptivas “Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar... se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se investiga.” (Hernández 2006, p. 45).</p> <p>En este orden de ideas Ramírez sostiene que la investigación descriptiva “se ocupa de detallar las características del fenómeno en estudio, clasificándolos, analizándolos o dando cuenta de sus elementos diferenciales (...) se realiza descripción, análisis e interpretación de la naturaleza de los fenómenos. Se trata de un análisis situacional, respecto a hechos sobre la</p>		

		<p>pronunciamiento de las autoridades, instituciones, organismos nacionales o internacionales, y todo aquel que proceda de fuente documental relacionado al derecho penal ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Análisis de normas nacionales: Mediante esta técnica se analizarán las normas nacionales vinculadas al objeto de investigación • Análisis de derecho extranjero: en aplicación de esta técnica se analizarán normas relacionadas al tema de otros países. <p>Instrumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guía de entrevista • Guía de observación • Cuadro de análisis bibliográfico • Cuadro de análisis de fuentes documentales • Cuadro de análisis de normas nacionales. • Cuadro de análisis de derecho comparado. 	<p>actualidad” (Ramírez Erazo, 2010, p. 200).</p>
--	--	---	---

SENTENCIAS

A) CASO: SILVANA BUSCAGLIA ZAPLER